

Vidas contra el capital

Luchas y exilios de los pueblos de Mesoamérica

Un informe de **Berta Camprubí y Marc Iglesias**



Directa

pbi
observatori d'espais per a la pau
observatori d'indignitats de l'Amèrica Central

EQUIPO

Textos: Berta Camprubí y Marc Iglesias

Fotografías: Freddy Davies y Sarai Rua

Coordinación de fotografía: Victor Serri

Diseño y maqueta: Fredio Barrera y Lola Fernández

Coordinación de diseño: Pau Fabregat

Coordinación técnica: Paula Rodríguez

Edición: Jesús Rodríguez

Corrección: Èlia Olivan

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer la colaboración y el esfuerzo de todas las entidades y personas que han hecho posible este trabajo y, especialmente, a aquellas que han dado su testimonio.

Testimonios: Amaru Ruiz, Carol Murcia, Castillo, José Miguel Gómez, María Flores, Mario Luna, Milthon Robles, Nery Gómez, Yaneli Fuentes y Yolanda Oqueli.

Personas y entidades: Àgueda Mera, Ana Aupi, Ana Maria Hernández, Arturo Landeros, Associació de Dones Migrants Diverses, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunales y Públicos de Guapinol, Comunidad Hondureña en Madrid (CHM), Consorcio Oaxaca, Coordinadora de Organizaciones Populares de El Aguán (COPA) de Honduras, David Llistar, Dina Meza, Eunice Elenes, Gabby Poblet, Gustavo Castro, Ignasi Calbó, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Jorge Jarillo, Laura Rossillo, Marc Font, María Martín, Miriam Miranda, Núria Vilà, Pasos de Animal Grande, Paula Santos, Red Europea de Solidaridad con Honduras y Taula per Mèxic.

Depósito legal: DL B 10505-2020



Un informe editado por:

Directa



Con el apoyo de:



**Generalitat
de Catalunya**



**Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament**



**Ajuntament de
Barcelona**

Índice

INTRODUCCIÓN	4
EFFECTOS DE UN MODELO GLOBAL.....	7
LUCHAS.....	19
<i>México</i>	20
<i>Guatemala</i>	44
<i>Honduras</i>	58
<i>Nicaragua</i>	84
EXILIOS	107
<i>Empezar de nuevo</i>	108
<i>La incertidumbre del asilo</i>	115
<i>Protección temporal ante la emergencia</i>	120
HORIZONTES.....	125
<i>Hacia una protección integral feminista</i>	127
<i>Puntos clave</i>	134

Introducción

Vivimos en un mundo en el que el 1% de la población mundial posee tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante. En el que el valor nominal de los derivados financieros supera en mucho más de 10 veces el valor del PIB mundial. Y en el que una gran parte de estas inversiones financieras, demandan la extracción a gran escala de materias primas, para exportarlas en cadenas transnacionales para su transformación industrial en energía y *bienes de consumo*, y, por tanto, en beneficios lucrativos, una gran parte de los cuales acaba cobijado en paraísos fiscales.

Al mismo tiempo muchas de estas materias primas son cada vez más escasas, es decir, tienen un horizonte de agotamiento más cercano, lo que acentúa su avidez, en lugar de su protección. En este contexto, la presión constante y creciente del extractivismo hace que actualmente las regiones más ricas en bienes naturales del planeta, sean precisamente las que están siendo condenadas a vivir en sociedades más desiguales y violentas. Y Mesoamérica es, sin duda, uno de los más claros ejemplos.

El desarrollo y la expansión del extractivismo acaba siendo cada vez más incompatible con las instituciones y leyes que regulan la protección de la naturaleza, las libertades ciudadanas, la vida libre de violencias para las mujeres o el control de la corrupción. Y esta presión acaba dando como resultado formas de gobierno progresivamente más coercitivas, autoritarias, corruptas y patriarcales.

La presión de los intereses extractivos sobre los ecosistemas, sobre las comunidades humanas y sobre la gobernabilidad democrática es tan intensa que crea una atmósfera irrespirable. Tan irrespirable que miles de familias se ven abocadas a un éxodo de alto riesgo: más de 3 millones y medio han logrado sortear los muros de Estados Unidos y 800 mil han solicitado asilo en Europa –a las que se suman otros centenares de miles de rechazadas o invisibilizadas. A esas cifras habría que añadir las centenares de miles de personas que no han conseguido llegar a su destino migratorio. Riadas de gente que se ve obligada a huir de su territorio no sólo por las múltiples formas de represión y de violencia, –urbana y rural–, sino también de las sequías, inundaciones, por la pérdida de fertilidad de las tierras o por incendios masivos –las llamadas refugiadas climáticas.

La región es cada vez más irrespirable especialmente para las mujeres, blanco de todas las formas de violencia patriarcal, con los más altos índices de feminicidios e impunidad en el mundo. No es casualidad, como se señala en este informe, que el 68% de la migración mesoamericana al Estado español sean mujeres. E irrespirable para cualquier persona que se empeñe en defender sus derechos, los de su comunidad o los de la naturaleza, como atestiguan las cifras de defensoras criminalizadas, acosadas y asesinadas en la última década.

Este trabajo que presentamos, *Vidas contra el capital. Luchas y exilios de los pueblos de Mesoamérica*, pretende visibilizar el nexo de unión entre las causas del exilio en los países donde se origina y las situaciones a las que las defensoras y defensores de Mesoamérica se enfrentan en nuestro país.

Detrás de los muros físicos que levantan las fronteras, continúa otra larga serie de muros legales, políticos, administrativos, culturales, que hacen de la migración un viaje interminable. Consideramos necesario no solamente acoger a estas personas, sino a sus historias y a sus causas. No se trata solamente de un acercamiento compasivo y humanitario, sino del reconocimiento de una deuda colonial, que llega hasta nuestros días, con las comunidades del sur global.

En estos tiempos en que en el norte global despierta la conciencia sobre la emergencia climática y ecológica, debemos reconocer en estas historias de vida, que llegan de la primera línea de defensa de la vida, la necesidad de cuestionar el modelo de crecimiento ilimitado del lucro empresarial y del consumo material como base del bienestar. Su mensaje nos advierte de que, agotando los bienes naturales y la biodiversidad de estos territorios, estamos socavando las mismas bases de nuestra propia supervivencia.



Efectos de un modelo global



Álvaro Minguito

“Si la gente del Sur global tuviera asegurada, no solo una buena alimentación, sino la salud, la educación y todo lo que la gente tiene asegurado aquí en el norte global, sobre todo la gente blanca, ¿tú crees que se irían?”

Míriam Miranda
Lideresa garífuna hondureña

“La denominada crisis de las personas refugiadas no es espontánea, ni coyuntural, ya que está vinculada a múltiples motivos estructurales que sustentan el modelo económico y social de dominación, lo que implica abordarla desde su raíz o los dramas humanos que provocan los desplazamientos forzados no se van a detener. Son millones de personas y pueblos los que emigran por causas climatológicas y por el modelo y proyectos de desarrollo capitalista y heteropatriarcal.”

Juan Hernández Zubizarreta
Miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina

La colonización de América Latina y el Caribe ha ido transformando sus mecanismos a medida que pasan los siglos, pero mantiene una misma lógica desde 1492. El sistema capitalista –ahora con un modelo neoliberal–, el concepto moderno de Estado nación, la democracia como forma de organización social y la religión católica-cristiana como dimensión espiritual han sido impuestos a través de la colonización por parte de las potencias occidentales. A pesar de los procesos de independencia, a inicios del siglo XIX, de los nacientes países latinoamericanos, los pueblos de estos territorios no han logrado librarse nunca de estas categorías que los encorsetan. Hoy viven sometidos a la división internacional y sexual del trabajo y a la explotación y el saqueo del Sur global en beneficio de los privilegios de la población que vive en el llamado Occidente.

Mesoamérica sigue teniendo el rol, dentro del modelo económico global, de territorio saqueado, y actualmente las principales actividades económicas de esta región son la exportación de recursos naturales y el turismo. Según afirma el miembro del Observatorio de Multinacionales en la América Latina Juan Hernández Zubizarreta en *La necropolítica frente a los derechos humanos*, “el flujo de dinero de los países ricos hacia los países pobres es infinitamente menor al establecido en sentido inverso. Es decir, los países empobrecidos entregan dinero a los países ricos. Según datos de 2012, los países del Sur global enviaron dos billones de dólares más al resto del mundo de los que recibieron”.

Desde esta perspectiva, entendemos los desplazamientos, las migraciones y los exilios de personas de origen centroamericano hacia países del Norte global como una consecuencia directa de este modelo económico y social global. Las condiciones de desigualdad, violencia y malestar de la mayor parte de la población de países como México, Nicaragua, Honduras y Guatemala son fruto del sistema moderno colonial capitalista y, por lo tanto, las personas que se ven obligadas a migrar de estos territorios son en realidad desplazadas a causa de ese sistema. Sea cual sea el motivo aparente de partida –persecución política, violencia de bandas criminales o la búsqueda de una *vida mejor* provocada por una situación económica próxima a la miseria (e insinuada por el *sueño americano* o el *sueño europeo* transmitidos a través de los medios de comunicación hegemónicos), para citar algunos de los casos más habituales–, su marco es siempre este modelo global de desigualdad y explotación.

“Hay que tratar y denunciar las condiciones por las cuales la gente sale de América Central, que tienen que ver con la estructura del mundo. Es una cosa muy profunda porque tiene que ver con las condiciones de bienestar y comodidad en las que la gente vive en otros países. Y va ligado con la inversión de empresas. Sea por turismo, sea por petróleo, son empresas que tienen base, economía y capital europeo o del norte”,

explica la lideresa social hondureña Míriam Miranda. “La mejor manera de demostrar que la migración es un fenómeno de desplazamiento forzado por culpa de un modelo económico global es simplemente ver las condiciones de Honduras. Con la destrucción de la institucionalidad, con lo que sucedió con el golpe de estado de 2009, hay una degradación de toda la sociedad, una destrucción de las políticas sociales, y esto se suma a una crisis económica profunda”, continúa. “Es un vaciado territorial que parece muy planificado porque, mientras se vacían los territorios, ya está lista la inversión extranjera –a la que le serán libradas grandes cantidades de tierra y recursos naturales– y también la actuación de los narcos”, denuncia Miranda.

MODELO NEOLIBERAL Y EXTRACTIVISMO

“Tenemos que asumir que estamos inmersos en un sistema que denominamos capitalismo, nos guste o no, con todas las características que tiene: empobrecedor, endeudador, patriarcal, injusto, etc.”, explica el activista mexicano Gustavo Castro, coordinador de organizaciones como Amigos de la Tierra y Otros Mundos. Castro es conocido por haber sido el único testigo del asesinato de la activista del pueblo lenca Berta Cáceres en Honduras, y él mismo fue víctima de un atentado contra su vida. “Este sistema tiene diferentes modelos, y el modelo que ha agudizado la situación que vivimos hoy, no solo en Mesoamérica sino en todo el mundo, son las políticas neoliberales. En este capitalismo, algunos países todavía intentan vivir bajo el modelo económico del estado del bienestar que se instaure después de la Segunda Guerra Mundial. Europa todavía tiene algunos elementos muy fuertes del estado de bienestar, pero también los tiene del modelo neoliberal”, continúa el activista.

Excepcionalmente Costa Rica, que ha vivido procesos muy diferentes y guarda excepciones como la de haber suprimido el ejército hace 71 años, los países de Mesoamérica no han accedido de manera generalizada a los subsidios y a los servicios públicos característicos de los estados de bienestar occidentales. En esta región, “el estado ha tenido que salir de la actividad económica para permitir que el mercado y las transnacionales entren a invertir. Por lo tanto, el estado ya no es el que garantiza los derechos humanos de la población. Ahora, si tú quieres derechos humanos, los tienes que comprar, y me refiero al hecho de que se privaticen el agua, el aire, la salud, la educación, los espacios públicos. Todo se convierte en un negocio”, explica Castro. El paquete de medidas neoliberales inyectadas en Mesoamérica y en el conjunto de América Latina ha significado, desde los años setenta, dictaduras, guerras y hambre. Chile fue el primer gran laboratorio y, precisamente en estos días, vive sacudido por las masivas movilizaciones populares que intentan liberarse de esta herencia.

El eje colonial en las migraciones

Mientras la siria, la afgana y la iraquí son las principales nacionalidades de las solicitantes de asilo en la Unión Europea (datos del año 2018), en el Estado español las personas que más piden asilo son de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Esta realidad pone de manifiesto la intensidad de la relación que sigue existiendo entre la exmetrópoli y sus excolonias. Sin duda, la lengua común es el vehículo clave que hace que tantas personas de América Latina migren al Estado español. Pero más allá de la superficie, la huella de empresas y del gobierno español en esta región del mundo sigue significando un elemento fundamental. Entre 1993 y 2015, las inversiones españolas en América Latina superaron los 200.000 millones de euros, una cifra que situaba al Estado Español como el primer inversor europeo de la región. Así mismo, el hecho de que América Latina sea el destino principal de la inversión directa al exterior de las empresas españolas –con un 41,5% del total– y de que, a la vez, el Estado español sea el destino principal de las personas latinoamericanas que migran a Europa –con un 47% del total–, resulta bastante revelador de la pervivencia de este eje colonial.

En Mesoamérica es a partir de los años ochenta y sobre todo durante los noventa que se aplican las políticas neoliberales. Tal y como explica Castro, gradualmente “modifican la ley minera, la ley del agua, las leyes sobre la energía, la ley de hacienda para que las transnacionales no paguen tantos impuestos, eliminan subsidios en el campo, abren fronteras, y lo hacen fundamentalmente presionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), instituciones multilaterales que obviamente son controladas por Europa y los Estados Unidos”.



Campamento de resistencia de la comunidad de Guapinol, en Honduras

Con todas estas modificaciones empieza –o continúa con una nueva forma– una cadena de privatizaciones, inversiones y explotación en la cual “el papel de Mesoamérica es fundamental, porque hay muchos recursos que el Norte global necesita: necesita petróleo, necesita gas, necesita madera; las farmacéuticas necesitan biodiversidad, material genético. [...] El extractivismo se convierte en un mecanismo muy voraz”, denuncia el activista mexicano.

Proyectos hidroeléctricos; minas a cielo abierto; extracción de hidrocarburos; *fracking*; monocultivos extensivos de soja, caña, palma africana, eucalipto y pino; etc. Las formas en las que el extractivismo se instala en los territorios por medio de empresas transnacionales son atrevidas y acaparadoras. Y a pesar de que la mayoría de países ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los gobiernos a celebrar consultas previas, libres e informadas en las comunidades que habitan estos territorios antes de aprobar concesiones y permisos, la realidad es que pocas veces se consulta a las poblaciones y, cuando se hace, no hay garantías de que el resultado sea vinculante. “Esta es una de las causas de que la gente migre: un sistema que empobrece a la población y donde las multinacionales se disputan los territorios porque son el elemento indispensable para llevar a cabo sus inversiones”, explica Gustavo Castro.

Para poder exportar todos estos bienes comunes, mientras en América del Sur se está implementando la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana –la demasiado desconocida IIRSA–, en Mesoamérica está en marcha el Plan Puebla Panamá o Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Este macroproyecto se anuncia en 2000 porque, como explica Castro, en aquel momento “se

esperaba que toda la región centroamericana estuviera *pacificada*. Se trataba de poder impulsar proyectos que no se habían implementado antes porque existían las guerrillas en Guatemala, Nicaragua, El Salvador...”. Cuando se firman los últimos acuerdos de paz, se considera que “la región ya está lista para que puedan entrar las empresas” y se empieza a instalar el Plan Puebla Panamá, “que será un corredor de inversiones y un corredor de paso”. Pero sin energía las empresas no lograrían llegar, de modo que “el plan se inicia con concesiones para la construcción de presas”. Estas presas se hicieron “con mucho dinero del Fondo Quinto Centenario del gobierno español para que Endesa, entre otros, tuviera el control de la energía eléctrica de la región mesoamericana”, explica Castro. Con el tiempo, el plan ha salido adelante, pero hoy, lejos de estar pacificado, el territorio centroamericano es uno de los corredores del tráfico de drogas, armas y personas más importantes.

UN ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS OBSOLETO

Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el Estatuto de los Refugiados, una convención aprobada en Ginebra en 1951 que reconoce como refugiadas a las personas que huyen de su territorio a causa de una persecución por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado y opinión política. Hoy, las problemáticas que fuerzan a migrar y desplazarse a millones de personas en el mundo van mucho más allá de las que pudiera provocar una guerra hace sesenta años. Es por eso que este estatuto se muestra desfasado y obsoleto.

Son muchas las personas que se ven obligadas a huir de su territorio por conflictos no reconocidos en esta convención: por ejemplo, las que huyen de sequías, inundaciones, tierras que ya no son fértiles o incendios masivos –las llamadas refugiadas climáticas– o las que huyen de la violencia urbana que causan bandas organizadas a escala transnacional. Dentro de los 70,8 millones de personas que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fueron desplazadas de sus territorios en 2018, no se contabilizan estas otras refugiadas.

En julio de 2019, la especialista en derecho ambiental Susana Borrás denunciaba, en una ponencia llamada “La eclosión de las migraciones climáticas”, que al menos 25 millones de personas han huido de sus territorios por cuestiones climáticas, a pesar de que, por ahora, el término *refugiado ambiental* no signifique nada jurídicamente. “Las movilidades humanas y las variaciones climáticas se han producido a lo largo de la historia. Aun así, durante los últimos años se están produciendo movilidades por la variabilidad climática provocada por el hombre”, explicaba Borrás. Según la abogada y profesora de derecho

internacional, se trata de “25 millones de personas invisibilizadas y que parece que no merecen ninguna protección”.

EL PATRIARCADO TAMBIÉN OBLIGA A MIGRAR

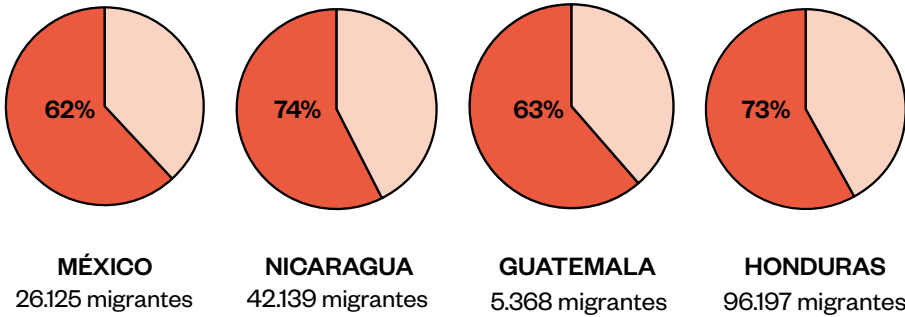
La lideresa hondureña Míriam Miranda asegura que “hay un grupo muy grande de mujeres que migra por la violencia intrafamiliar. Es un tema que no ha sido estudiado, pero creemos que, en épocas de mayor crisis en nuestro país, los cuerpos de las mujeres se convierten en los espacios de descarga de ira y de frustración por parte de los hombres”. Hay un alto número de mujeres que, con hijas o sin, hace el salto de decidir huir de su territorio por la violencia que vive en casa y la violencia estructural que vive también en la calle. Y si la violencia machista –directa e indirecta– sobre el cuerpo de las mujeres las obliga a migrar, también lo hace el fenómeno de las cadenas globales de los cuidados.

En el momento en que la mujer en Occidente entra de manera mayoritaria al mercado laboral, deja un vacío en la esfera doméstica que hasta ahora había ocupado ella: es lo que se ha denominado como crisis de los cuidados en Occidente. A falta de que el hombre pase a colaborar en la tarea de cubrir este vacío, las personas que han migrado para realizar las tareas reproductivas de las familias occidentales han sido mayoritariamente mujeres de origen latinoamericano, y lo hacen en condiciones siempre precarias. Conociendo esta situación, en muchos países de Mesoamérica hay un *efecto llamada* de mujeres que migran porque saben que son ellas las que, más rápidamente que los hombres, encuentran trabajo una vez llegadas al Estado español. Esta economía de los cuidados a la que las mujeres se ven vinculadas rápidamente se transforma en un suelo pegajoso del que –tanto mujeres sin estudios académicos como mujeres con estudios universitarios titulados por sus países de origen– difícilmente pueden librarse. “Nosotras limpiamos vuestro techo de cristal”, ha denunciado el colectivo de trabajadoras del hogar.

Como denuncia la hondureña Míriam Miranda, el motivo del éxodo, del “vaciado territorial”, de las migraciones masivas, son las circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas de los países de Mesoamérica. Y estas circunstancias, según Gustavo Castro, se deben “a la actividad extractiva, a la pobreza que crean las políticas neoliberales y a la acumulación de ganancias de las empresas, que significan costes ambientales, salariales, sociales”. Pero no todo está perdido. Gustavo Castro hace mucho énfasis en que, a pesar de la firma de tratados de libre comercio y la llegada de multinacionales en los territorios, “la resistencia ha tenido mucho éxito y por eso se agudizó la persecución, la criminalización, la violencia. Mucha gente tiene que marchar, pero la gente está luchando, se moviliza, resiste”.

La feminización de las migraciones

% de mujeres en el total de migrantes



FONT: Instituto Nacional de Estadística español, 2018

En total, un 68% de las personas migradas en el Estado español provenientes de México, Nicaragua, Guatemala y Honduras son mujeres. Más de la mitad de las trabajadoras del hogar y los cuidados en el Estado español son mujeres migradas.

Para saber más

La necropolítica ante los derechos humanos,
de Juan Hernández Zubizarreta
<http://ves.cat/erDi>

Informe *Enemigos del estado 2019*, de Global Witness
<http://ves.cat/erDj>

Conferencia “La eclosión de las migraciones climáticas”,
de Susana Borràs
<http://ves.cat/erDk>

Entrevista a la lideresa hondureña Míriam Miranda,
de *El Salto*
<http://ves.cat/erDl>

Entrevista al activista mexicano Gustavo Castro,
del Proyecto Chakana
<http://ves.cat/erDm>



Luchas

México



2006

Victoria electoral de Felipe Calderón (PAN) e inicio de la “guerra contra las drogas”

2010

Se hace público el proyecto del acueducto Independencia en el estado de Sonora y empieza el ciclo de movilizaciones en su contra

2012

Comienza el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto (PRI)



13 millones

de mexicanas se han ido de su país
desde el año 1995



98%

de las mexicanas migradas
viven en Estados Unidos



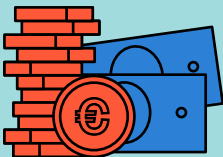
109

conflictos mediambientales
según el Atlas de Justicia Ambiental



0,4%

de las mexicanas migradas residen en el Estado
español, que es el tercer país receptor



6.719 M€

de inversión de las empresas españolas
en México entre 2016 y 2018



48,3*

Coefficiente de Gini: México está en el
puesto 22 de países con más desigualdad
· El Estado español ocupa el número 85
· El listado incluye 144 países

2017

A lo largo de este año, doce
comunicadores fueron
asesinados en relación con
su labor periodística. En
total, desde el año 2000, en
México han matado a 131
periodistas

2018

Victoria
electoral
de Andrés
Manuel López
Obrador
(MRN)

2019

A lo largo de
este año, 35.000
personas fueron
asesinadas
en el conjunto
del territorio
mexicano

Con el anuncio del presidente Felipe Calderón de una nueva estrategia en la “guerra contra las drogas”, México inició una de las etapas más cruentas de su historia reciente: 250.000 muertes violentas, 60.000 personas desaparecidas y 3.600 fosas clandestinas son –según las cifras más recientes proporcionadas por las Naciones Unidas y el propio gobierno mexicano– el balance oficial provisional del conflicto armado interno que sufre el país desde el año 2006. La militarización de la seguridad pública –reservada constitucionalmente a las instituciones de carácter civil– y las oscuras alianzas entre la clase política, la económica y los grupos dedicados al narcotráfico han provocado un vacío de poder en gran parte del territorio, que ha dejado indefensa a la mayoría de la población.

En julio de 2019, el subsecretario de infraestructuras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal mexicano anunciaba en rueda de prensa la enésima nueva fecha oficial de finalización de las obras de mejora y ampliación de la Carretera Federal 15. Esta vía –que va desde Ciudad de México hasta Nogales– forma parte del corredor comercial estratégico que conecta México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo “de aumentar la competitividad de la región y facilitar las exportaciones”.

Aquel día, el subsecretario Cedric Iván Escalante informaba de que los principales obstáculos para terminar el tramo de 650 kilómetros que cruza el estado de Sonora habían sido el incumplimiento de los plazos por parte de cinco de las empresas encargadas de la reforma y un “conflicto con la tribu yaqui, que ha impedido, bloqueando la carretera, la entrega de la maquinaria necesaria”. Según la información facilitada por el gobierno federal a la prensa, solo faltaba acabar “2,6 y 1,6 kilómetros a cargo de dos empresas, Urales y Acciona, que se entregarán el 9 de agosto”. Era evidente que las empresas españolas encargadas del tramo que cruza el territorio de la tribu yaqui habían topado con lo que el antropólogo y experto en lenguas indígenas José Luis Moctezuma ha definido como “uno de los grupos étnicos más bien organizados de México”.

ALZADOS CONTRA LA CARRETERA

A lo largo de 2018, los conflictos entre el pueblo yaqui y las empresas constructoras de la conocida como la Cuatro Carriles fueron frecuentes. Protestas, denuncias en los medios de comunicación, bloqueos de carreteras y negociaciones se encadenaron durante meses. El 22 de enero de aquel año, por ejemplo, las familias yaquis de Estación Oroz se reunieron con el ingeniero responsable de la obra para hacerle diversas reclamaciones. El pueblo yaqui se quejaba de que para llevar a cabo la ampliación de la carretera se estaban ocupando tierras propiedad de la tribu sin pagar las indemnizaciones correspondientes y denunciaban que las farolas, la parada de autobús del pueblo y la calle paralela a la carretera habían quedado inutilizadas, cosa que impedía el acceso a distintas casas. Además, exponía que se habían causado diversos daños en viviendas particulares y en la escuela. Según los testimonios de dos vecinas que asistieron a la reunión, el ingeniero de la constructora española Urales contestó a las presentes que “le daba igual lo que decíamos”, “que él acabaría el trabajo que le habían encargado y se iría” y “que nos quedásemos en nuestras pocilgas porque lo único que queríamos era plata”. Tal como afirma una de las vecinas, “nosotros no queremos plata, queremos que arreglen lo que estropearon y lo dejen todo tal cual estaba. Él nos ofendió mucho. Vivimos como vivimos, pero esa no es razón para que gente extranjera nos lo recrimine a gritos. No estamos dispuestos a tolerar que nos traten así”.

Al día siguiente, en una carta dirigida al director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora, las vecinas de Oroz explicaban que se las había tratado “con altivez, despotismo y discriminación por ser indígenas” y reclamaban la visita urgente al pueblo del responsable del organismo federal y “del representante legal de la empresa contratista Urales. Mientras tanto –advertían los yaquis– no permitiremos la continuación de la obra, y nos reservamos el derecho de promover las acciones legales que correspondan para proteger nuestro patrimonio”.

Mario Luna

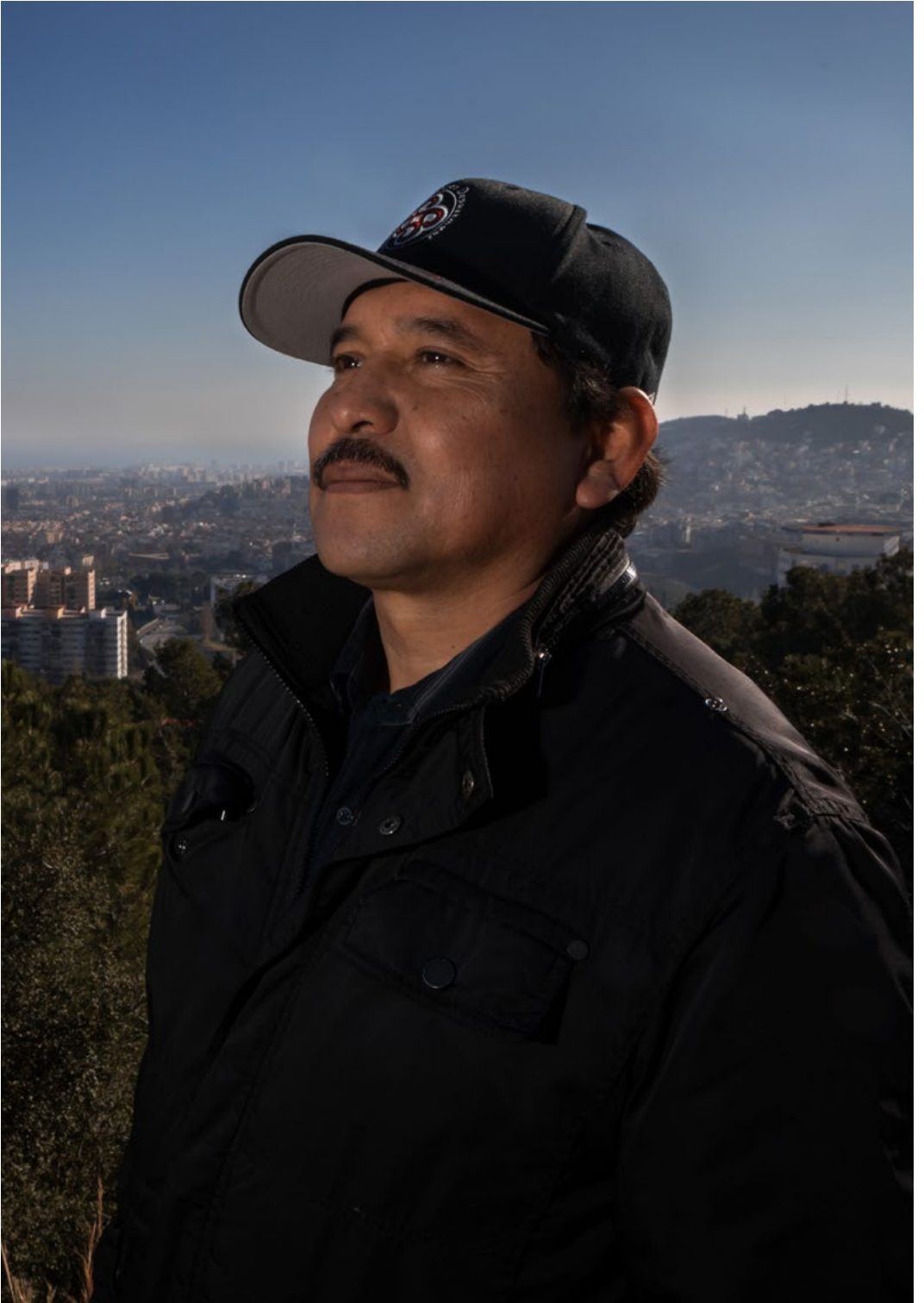
Unas semanas más tarde, un convoy de vehículos que transportaban maquinaria destinada a la obra fue parado y retenido por los yaquis en Vicam, la segunda localidad más poblada del territorio de la tribu. El objetivo era forzar una mesa de negociación en la que las demandas yaquis fueran escuchadas. Entre las reclamaciones de la comunidad destacaban la continuidad de los comercios situados a pie de carretera, la instalación de dos puentes elevados y la renovación del sistema de drenaje –que estaba colapsado– y de las tuberías de agua potable que cruzan la carretera.

Según relata Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional yaqui del pueblo de Vicam, en uno de los encontronazos con los responsables de las obras que se dieron en aquella época, “una autoridad de uno de los pueblos decidió por sí mismo dar el permiso para ampliar la carretera, pero, cuando empezaron a entrar las máquinas, la gente se inconformó. Entonces, la empresa mostró el documento que la autoridad había aceptado pero el pueblo les respondió que allá no mandaba la autoridad sino la asamblea, y que la autoridad lo único que tiene que hacer es obedecerla”.

MANDAR OBEDECIENDO

“En nuestra cultura –explica Luna– las decisiones se toman de forma colectiva, en asamblea. Las decisiones no se votan, sino que se generan espacios para llegar a consensos. Tenemos cinco autoridades –civiles y militares– que son las que deben firmar los acuerdos. Pero todas ellas son solo una más a la hora de decidir. Entonces es difícil que un gobernador o un capitán pueda tener una decisión por encima de la asamblea. Puede hacerlo, pero, finalmente, si el pueblo no lo avala, queda en nada y puede ser motivo para que se degrade o sustituya a esa persona”.

Según el secretario yaqui, “la inercia que tiene la gente ajena al pueblo –como por ejemplo empresarios, inversionistas o funcionarios gubernamentales– es dirigirse a las autoridades, que son visibles, y convencerlas o, incluso, intentar sobornarlas o comprarlas. Pero eso no tiene ningún efecto en el momento en que la población no lo reconoce. El gobernador no tiene la capacidad para imponer una decisión propia, porque nadie te avalará si tomas una decisión de manera autoritaria”.



“Nuestra forma de gobierno es propia y ha ido modificándose conforme lo que ha ido necesitando la comunidad. En la actualidad, tenemos un gobierno cívico-militar en el que el pueblo –la tropa– nombra al máximo representante de la comunidad –que es el gobernador– y cumple sus funciones por un año. También tenemos una estructura civil en la cual el Consejo de Ancianos es el órgano máximo en la asamblea. En los años cincuenta del siglo XX se empezó a nombrar una nueva figura, la del secretario, que actúa como traductor y escribano de las decisiones de la asamblea. Esa es mi función en la comunidad. Yo nací en Vicam y sigo viviendo ahí. Por mi trayectoria de vida y convivencia en mi pueblo, y porque mi comunidad sabe que yo estudié en las escuelas públicas mexicanas, vieron en mí el perfil necesario para hacer la función de intérprete entre la asamblea y la gente de afuera: las empresas, las instituciones públicas y de gobierno y también las organizaciones civiles no gubernamentales con las que tejemos alianzas”.

El secretario yaqui cumple una función de bisagra entre dos culturas muy distintas. Como es una persona que conoce ambas lenguas –y además tiene una firme identidad yaqui–, se espera de él que sea capaz de transmitir bien las decisiones de la tribu. El secretario debe redactar los acuerdos y decisiones de la asamblea, debe darlos a conocer y es el encargado de hacer declaraciones públicas en castellano. Pero esta figura, como explica Luna, cumple también otro papel vinculado con la voluntad de autopreservación que tienen los yaquis: “El secretario también sirve como una barrera para que los funcionarios del gobierno, de las instituciones o los miembros de las organizaciones no lleguen directamente a nuestras autoridades. Los gobernadores y los militares nunca hablan directamente con las personas de afuera; es el secretario quien tiene esa función”. A pesar de eso, remarca Luna, “el secretario no tiene ninguna capacidad de decisión. En una mesa de negociaciones, por ejemplo, el secretario interpreta las propuestas o los argumentos de la contraparte –que no habla nuestra lengua–, y también tiene la obligación de transmitir lo que en nuestra lengua se está intentando decir a los interlocutores”.

PROPIEDAD COMUNAL Y TRADICIÓN DE LUCHA

La tribu yaqui tiene una tradición de lucha muy fuerte. Tal y como explica Mario Luna, “los invasores españoles fueron incapaces de conquistarnos por la vía de las armas. Tanto los colonialistas como el Estado mexicano han tenido que negociar con el pueblo yaqui y establecer tratados de paz y hacer concesiones”.

A pesar de que los acuerdos más conocidos son los que se realizaron con el presidente Lázaro Cárdenas entre 1937 y 1940, “hubo pactos anteriores con la Corona española, con los gobiernos virreinales, con los gobiernos independentistas y también con los revolucionarios. Todos los

que han estado en el poder en México han tenido que negociar el tema de la autonomía con el pueblo yaqui. Para conseguirlo, ha habido mucha guerra, muchos enfrentamientos... Ha habido campañas gubernamentales declaradas para exterminar al pueblo yaqui, pero no lo lograron nunca. Incluso ha habido bombardeos con aviones del ejército mexicano al territorio y, a pesar de eso, no han logrado erradicar a nuestra gente ni quitarnos el derecho de regirnos libremente”.

“El pueblo yaqui –continúa Luna– siempre ha defendido el territorio, nuestra forma ancestral de organización y también nuestro derecho a la libre determinación. Es decir, decidir, nosotros, qué hacer con nuestras vidas y con nuestro entorno natural. Queremos mantener nuestra identidad propia y eso ha estado siempre presente a lo largo de los siglos”. El secretario yaqui subraya que “nuestro territorio es de propiedad comunal, es un todo. No hay propiedad privada en cuanto a los recursos naturales. El agua es de todos, la tierra es de todos, el bosque, el mar... Todo es de uso común. Es decir, que la forma de tenencia yaqui contrasta bastante con el modelo neoliberal capitalista que se ha impuesto en México”.

EL AGUA COMO BIEN ESTRATÉGICO

Mario Luna relata: “Mi pueblo está ubicado en el noroeste de México, en una zona semidesértica donde hay poca vegetación y muy poca agua. Al tener una tradición militar, los yaquis conocemos las tácticas y las estrategias. Y, claro, el agua es un bien estratégico de primer orden que ha sido utilizado como arma tanto a favor como en contra nuestro. En este





sentido, nosotros entendemos muy bien el valor estratégico del río Yaqui, que ha sido una fuente de vida para nosotros y un elemento clave para nuestra supervivencia”.

Los acuerdos de paz de 1937 y el decreto de Lázaro Cárdenas de 1940 supusieron la restitución de una parte del territorio ancestral yaqui, el reconocimiento de su derecho a la propiedad colectiva y al usufructo del 50% de las aguas del río Yaqui; pero, al mismo tiempo, significó el inicio de la primera obra sobre la cuenca del río: la presa La Angostura, que terminó de construirse en 1942. A pesar de que el decreto presidencial establecía que la mitad del agua de la presa era para la tribu, los terratenientes del valle del Yaqui presionaron hasta conseguir un cambio en el diseño de la obra que dejaba muchas hectáreas del territorio de la tribu fuera del distrito de riego. Aquel mismo año comenzó la construcción de una segunda presa, hoy llamada Álvaro Obregón, con el argumento de “que sería una presa derivadora. Decían que allá se captaría toda el agua para, entonces, dividirla. A partir de ahí ya empezaron los problemas porque el decreto no se cumplía y el agua que nos llegaba no era ni siquiera el 10% del caudal”. Así, lejos de cumplir sus acuerdos con el pueblo yaqui, el Estado mexicano implementó una política que marginó la agricultura propia de la tribu para privilegiar el modelo agroindustrial a gran escala de los colonos.

Sin embargo, continúa Luna, “el reclamo no era tan fuerte porque el agua todavía alcanzaba a escurrirse y la gente podía cavar pozos a las orillas del río y abastecerse de agua limpia para tomar, hacer los quehaceres domésticos y alimentar a los animales. También había sufi-

ciente salud en el ambiente que permitía la generación de bosques bajos y la abundancia de fauna. Yo todavía llegué a avistar loros –una cosa que parece imposible en medio de un desierto, ¿verdad?– e incluso jaguares”.

A medida que se fueron haciendo más obras –como la presa Plutarco Elías Calles y una serie de otras más pequeñas– la situación iba empeorando, hasta el punto de que “desde 1975, y como resultado de todas estas construcciones, el tramo final del río está totalmente seco en la superficie. Solo sueltan agua cuando hay lluvias extraordinarias y la presa se llena demasiado. Pero esa agua, cuando bien le va, dura entre una semana y un mes”.

EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

“Cuando, en el año 2010, empezó el tema del acueducto Independencia, se bombardeó a los secretarios de la mayoría de los pueblos yaquis con información engañosa. Los promotores solo hablaban de las bondades del proyecto: que serviría para acabar con el problema del agua potable en la ciudad de Hermosillo, que se detonaría la economía y que todos tendríamos trabajo y que la obra no nos afectaría de ninguna forma. Pero en ningún momento se hablaba de las posibles afectaciones que pudiera haber por la ausencia de esa agua en nuestro territorio. Porque tampoco les decían que iban a tomar agua del territorio; les decían que iban a tomar agua del río en un punto alejado de la tribu y, entonces, daba la impresión de que nuestro derecho de caudal no iba a quedar afectado”.

El río Yaqui efectúa un largo recorrido que comienza en las montañas de Arizona, cruza una parte de Chihuahua y atraviesa toda Sonora

hasta desembocar en el mar de Cortés –en la costa perteneciente al territorio yaqui. “Es decir, que nosotros somos los últimos usuarios del río y, en ese sentido, cualquier cosa que suceda en los tramos superiores nos afecta”. Las minas de cobre del norte de Sonora, la agricultura intensiva del valle del Yaqui, las ciudades y las industrias que hay a lo largo de su curso ya consumen la mayor parte del

agua del río y, por eso, explica Luna, “añadir un nuevo usuario a una cuenca deficitaria –en este caso una ciudad en crecimiento como Hermosillo, que nunca va a dejar de demandar más y más agua– no es una

El gobernador del estado mexicano de Sonora Guillermo Padrés impulsó, el año 2010, la construcción del segundo acueducto más grande de México en la cuenca del río Yaqui



buena idea. De todas formas, si bien la justificación sobre el papel de la necesidad del proyecto es garantizar el agua a los ciudadanos de Hermosillo, en los hechos, el acueducto termina donde empieza el parque industrial, situado a las afueras de esta ciudad; un hecho que evidencia que los intereses reales son otros, ¿no? Tampoco está proyectada la construcción de plantas de tratamiento del agua para el consumo humano. Además, la red de agua de Hermosillo es totalmente obsoleta y las pérdidas actuales superan el 40%. Si, tal y como está, le inyectan más agua, lo que va a pasar es que van a reventar la red”.

Mario Luna relata que, una vez descubiertos nuevos datos sobre el proyecto, “enviamos toda la información a las comunidades, y las autoridades yaquis empezaron a ver la posibilidad de que hubiera afectaciones al río y a la tribu. Una de las cosas que hicimos fue ubicar el espacio concreto donde se harían las extracciones de agua y descubrimos que era en la parte más profunda de la presa. Es decir, que el acueducto –a diferencia de nosotros, que dependemos de los niveles de agua acumulada– no tendría problemas para abastecerse ni en épocas de sequía”. Esta búsqueda empujó a los yaquis a decidir el inicio de las movilizaciones y a plantear una serie de exigencias para asegurar que “se respetaran nuestros volúmenes de agua y para cuestionar de raíz un proyecto que iba a afectar a una cuenca ya deficitaria y situada en un territorio, como es el desierto, con un débil equilibrio ecológico”.



La defensa del derecho a registrarse libremente y la protección de su territorio ancestral han sido unas constantes en la lucha centenaria del pueblo yaqui

BATALLA LEGAL

Viendo que el gobierno no tenía intención alguna de establecer una mesa de negociación sobre el proyecto del acueducto, los yaquis, “después de las denuncias que hicimos públicamente en los medios de comunicación, después de las manifestaciones multitudinarias –tanto de los agricultores, que también salían perjudicados, como de los miembros de la tribu–, decidimos utilizar las herramientas jurídicas que teníamos a nuestro alcance para hacer valer el decreto del presidente Cárdenas y los tratados de paz correspondientes firmados por el Estado mexicano”.

El primer paso fue presentar diversas demandas en los tribunales locales exigiendo la restitución del caudal de agua que correspondía legalmente a la tribu y el ejercicio del derecho a la consulta. El derecho a la

El narco, un ariete al servicio del capital

“En 2010, cuando empezaron las movilizaciones y la resistencia del pueblo yaqui al proyecto del acueducto Independencia, la industria de la metanfetamina brotó de la nada en nuestro territorio. Se empezó a distribuir la droga, casi regalada, por toda la región. Eso llegó a tal grado que muchos jóvenes –una buena parte, casi niños– quedaron totalmente desmovilizados”. El territorio yaqui, continúa explicando el secretario de la autoridad indígena de Vicam, Mario Luna, se convirtió también en escenario del enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes que se disputaban el control de ciudades como Ciudad Obregón o Guaymas: “Nosotros creemos que las balaceras [tiroteos], las ejecuciones o la exhibición impune de las armas que hacen los narcos son una forma de intimidar al pueblo, un tipo de terrorismo psicológico que, en muchos casos, empuja a la gente a irse. El hecho innegable es que en todas las regiones donde hay resistencia también hay una presencia muy grande del narcotráfico, y eso permite al Estado mexicano lavarse las manos y no entrar en las causas reales de los conflictos que se viven en los territorios”.



consulta a los pueblos indígenas afectados por proyectos susceptibles de provocar impactos sobre sus territorios está recogido en la Constitución mexicana, pero, como explica Mario Luna, “hasta ese momento no se había ejercido por parte de ningún pueblo indígena. Fue entonces cuando iniciamos un tortuoso camino por los tribunales mexicanos”.

Los yaquis, según el secretario de la autoridad indígena de Vicam, “exigíamos que se nos respetara nuestro derecho a ser informados y consultados y, como las violaciones eran muy obvias, ganamos los amparos en la primera instancia. Curiosamente, las instituciones mexicanas encargadas de proteger los bienes naturales fueron las que metieron un recurso. Tuvimos que acudir a los tribunales colegiados de la región, donde volvimos a ganar. Después de esta segunda sentencia, la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y el CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) –junto con el gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés– volvieron a inconformarse. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la nación, que tomó una decisión histórica que reconocía los derechos del pueblo yaqui”.

Para Luna, “a pesar de la victoria, la decisión era muy ambigua porque reconocía que teníamos razón pero no cancelaba el proyecto, entendiendo que esta decisión debían tomarla las instituciones encargadas de la gestión de los recursos naturales basándose en su normativa interna vigente. El tema es que estos organismos, a pesar de la manifiesta ilegalidad del proyecto –que, por ejemplo, no tiene manifiesto de impacto ambiental–, no han paralizado las obras. Actualmente, la construcción

del acueducto continúa y una pequeña parte ya está operando. Por eso nosotros denunciarnos que, en México, no se cumple la ley”.

EL REINO DE LA IMPUNIDAD

Una vez agotado el tránsito por las instancias legales mexicanas, el pueblo yaqui decidió “elevar el nivel de presión” y se dirigió a las instituciones internacionales. “Pusimos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington y eso –explica Luna– le dolió mucho al Estado mexicano y a las empresas promotoras del proyecto. Es en ese momento cuando empiezan las campañas criminalizadoras contra nosotros. También empiezan las persecuciones, los ataques en las redes sociales, los chantajes y los hostigamientos. El gobierno nos retiró todo los apoyos. Cancelaron las becas educativas, los programas que financiaban proyectos productivos, las ayudas para la construcción de viviendas”.

En ese contexto, se dieron casos de “fabricación de delitos que jamás pudieron comprobar porque eran un montaje. A mí y a un compañero nos encarcelaron acusándonos, inicialmente, de secuestro, robo de vehículos y asociación delictiva. Las acusaciones eran totalmente falsas y fueron decaendo una detrás de la otra. Hoy en día está totalmente demostrado que todo fue una farsa, pero yo estuve encarcelado durante más de un año y todavía espero el reconocimiento oficial de esta injusticia”.

“En México –afirma Mario Luna– hay una impunidad total. La aplicación de la ley se hace en forma selectiva. Para generar y ejecutar las órdenes de detención en nuestra contra, por ejemplo, bastaron doce horas. Sin embargo, han pasado más de siete años desde que se dictó la resolución de la Suprema Corte de Justicia a favor del pueblo yaqui y todavía no se ha cumplido. Los poderes *de facto* que existen en México no solo controlan la seguridad sino también la administración pública y la económica. Las leyes se tuercen al criterio y a las necesidades de los operadores del despojo, ya sean los empresarios que operan legalmente o los que lo hacen de forma ilegal. Desgraciadamente, eso es lo que pasa en México. Por eso no hay garantías para los defensores de los derechos humanos, para los defensores de los pueblos indígenas ni tampoco para ejercer un periodismo libre. Está muy difícil que alguien se atreva a denunciar lo que no funciona sin sufrir las consecuencias”.

PERIODISMO CRÍTICO Y DE PROXIMIDAD

“Me llamo Yaneli Fuentes, soy periodista y trabajo en el estado mexicano de Guerrero, en la región de Costa Chica. Me dedico al periodismo local. A finales del año 2014 iniciamos un medio, con ediciones en papel y digital, que se llama *Diario Alternativo*. Al principio éramos tres personas:

mi jefe, que es periodista; el diseñador y yo, que hacía todo tipo de tareas. En aquellos primeros tiempos me encargaba del proceso de impresión, del mantenimiento de las máquinas, y también hacía de reportera. Iniciamos el proyecto pensando que íbamos a vivir de eso, pero después nos dimos cuenta que, más que ganar dinero, teníamos que poner de nuestro bolsillo”. Las políticas de austeridad aplicadas por la administración mexicana durante el mandato del presidente Peña Nieto (2012-2018) complicaron la supervivencia de medios pequeños como *Diario Alternativo*: “Nosotros, en el diario, casi no tenemos convenios publicitarios con los municipios; se resisten porque somos un medio crítico y a los que mandan no les interesa nuestra existencia. De hecho, nuestro trabajo es activismo puro. Estamos buscando otras posibilidades de financiamiento, pero la realidad es que en Costa Chica, por ejemplo, es muy complicado encontrar subscriptores, como hacen algunos medios aquí en Europa”.

Yaneli Fuentes

Costa Chica forma parte del estado de Guerrero y está situada en la parte meridional de México, dentro de la región del Pacífico Sur. De mayoría mestiza pero con presencia de diversas etnias, en Costa Chica se hablan tres lenguas indígenas: amuzga, mixteca y tlapaneca. Esta última, originaria del estado de Guerrero, cuenta aproximadamente con unos 100.000 hablantes. Tal y como explica Fuentes, “son pueblos muy pequeños y, la mayoría, también muy pobres. No hay luz ni tecnología, y lo único que tienen para informarse es el periódico. En las comunidades hay gente que nos ayuda con la distribución. Son personas que bajan de mañana hasta la carretera más próxima y, después de que el periódico pase de carro en carro aprovechando los recorridos de la gente por la zona, les llegan unos cuantos ejemplares. En estas comunidades no todos entienden bien el español y a menudo, cuando llega el periódico, una persona lo lee y explica a los otros las noticias que aparecen”.

“En *Diario Alternativo* –explica la periodista– desde el principio decidimos mantener una línea crítica. Los primeros tiempos no tuvimos grandes problemas pero la cosa cambió cuando, en 2017, empecé a tomar denuncias referentes a la actuación –en el municipio de Marquelia– de la policía ciudadana UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero). Empezó a llegar una denuncia, después otra, y muy pronto se convirtió en un goteo constante. Éramos el único medio que daba voz a las personas que se quejaban y parecía que todas las denuncias venían hacia mí”.

PRIMERAS AMENAZAS

En marzo de 2017, Yaneli Fuentes publicó un artículo en el que los padres de un chico del pueblo denunciaban que la UPOEG les estaba exigiendo,



El poder de la UPOEG

A mediados de 2017, cuando la periodista Yanelí Fuentes empezó a recibir las primeras amenazas de la policía ciudadana que operaba en el municipio mexicano de Marquelia, la agencia de noticias Apro hizo público un informe del gobierno federal donde se calificaba a varios de estos grupos de “paramilitares vinculados con el narco”. Entre ellos se señalaba directamente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que había empezado a operar como movimiento de autodefensa en Costa Chica en enero de 2013 y que, poco tiempo después, se convertiría en una de las autodenominadas policías ciudadanas con más presencia en la región.

Más allá del informe, tanto Miguel Ángel Osorio –secretario de Gobernación del gabinete del presidente Peña Nieto– como Héctor Astudillo Flores –gobernador del estado de Guerrero– daban por hecho ante los medios de comunicación que los grupos de autodefensa estaban “infiltrados por el



narco”. En sus declaraciones, el gobernador Astudillo defendía la existencia de las organizaciones armadas indígenas, amparadas en la ley estatal relativa a los derechos de estos pueblos, a la vez que advertía a las policías ciudadanas que estaba dispuesto a enfrentarlas.

A pesar de las palabras del entonces gobernador, la UPOEG –responsable, entre muchas otras cosas, de la persecución a la periodista Yanelí Fuentes– siguió operando en Marquelia hasta que, en agosto de 2018, la asamblea general del municipio consiguió echarla. Sin embargo, eso tampoco fue suficiente y, meses después, gracias a la complicidad de Javier Adame Montalván –nombrado alcalde del municipio en octubre de 2018–, la UPOEG volvió a abrir su comandancia en Marquelia.

a cambio de la libertad de su hijo, una cantidad de dinero que no podían pagar. Dos días después, el director del periódico recibió una llamada de la comandancia de esta policía ciudadana de Marquelia.

“Querían hacer unas aclaraciones y le pedían a mi jefe que yo me acercara hasta su oficina. Me moví y, al llegar, algunos de los policías armados que había en la puerta me invitaron a pasar y, riéndose, me dijeron que ya tenían mi celda lista. Cuando abrieron la puerta de la oficina me sorprendió ver que dentro había más de una docena de personas entre consejeros, comisarios y comandantes. También estaban el chavo detenido y su padre, el mismo que dos noches antes había estado hablando conmigo del caso. Empezaron a gritarme y a decir que yo afirmaba cosas en mis notas que no eran verdad. Intenté explicar que lo que había hecho era dar voz a las denuncias que me llegaban, pero no me escuchaban. Me decían que antes de publicar tenía que hablar con ellos de los temas, pero la verdad es que yo había ido varias veces a pedir información y nunca me la daban. En realidad, casi siempre me negaban la propia existencia de los hechos. Siguieron subiendo el tono y me exigían que les revelara cuales eran mis fuentes, que les mostrara fotografías... De repente me dijeron que me estaba ganando ser mandada a *reeducación*. Yo sabía que ellos se habían apropiado de aquel concepto –que es propio de las poli-

cías comunitarias indígenas— pero que lo aplicaban de forma muy diferente. Yo había documentado denuncias de gente a quienes la UPOEG había torturado durante la *reeducación* y sabía que usaban a los detenidos como mano de obra para beneficio propio. Entonces les dije que ya tenía suficiente y que me iba a retirar, pero, cuando me enfilé a irme, dos de los hombres me sujetaron. Empecé a protestar y a intentar librarme de ellos hasta que, un rato después, uno de los consejeros intervino para rebajar la tensión. De nuevo empezaron a exigirme que antes de publicar nada ellos lo tenían que ver y darme su aprobación. Las peticiones eran absurdas y yo estaba molesta. Les dije que iba a hablar sobre las amenazas que había recibido y entonces se enojaron más. Me gritaban: ‘¿Quién te está amenazando? Amenazarte es decir que te vamos a matar o que te vamos a golpear, ¡pero nadie te está diciendo que te va a matar!’. En ese momento una persona abrió la puerta y aproveché para salir de ahí corriendo”.

Según datos de Reporteros sin Fronteras, diez periodistas fueron asesinados en México el año 2019 y el índice de impunidad de los crímenes cometidos contra profesionales de la información en la última década supera el 90%

EL FANTASMA DEL NARCO

Cuando Fuentes logró llegar a la redacción habló con el director y decidieron publicar un artículo contando lo que había pasado. Al día siguiente, un vendedor del periódico pasaba por el mercado de Marquelia

cuando uno de los consejeros de la UPOEG se encaró con él y le amenazó diciéndole: “Lo que ustedes quieren es que les mandemos el narco para que se los chinguen de verdad. A ellos sí que los van a respetar, ¿eh? ¡Les vamos a ir a quemar ese periódico!”. Según el relato de la periodista de Guerrero: “El vendedor avisó al director y él me llamó para pedirme que me quedara en la casa de mi compañero, donde había pasado la noche. Estuve ahí



escondida unos días sin salir a la calle mientras decidíamos qué hacer con esto. Mi jefe se fue a Chilpancingo, que es la capital del estado, y convocó una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa para hacer pública la situación y pedir la intervención de las autoridades. Fue entonces cuando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano tomó mi caso y se dictaron algunas medidas como los rondines policiales alrededor del edificio del periódico. También denunciarnos ante la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión y ante la Fiscalía del Estado. En la Fiscalía del Estado, una vez nos tomaron declaración, nos dijeron que no iba a pasar nada porque era un asunto político.

Decían que la UPOEG era una fuerza política... A mí me molestó porque daba la impresión que solo habían venido a sacarme información. El hecho es que la Fiscalía tiene convenios y pactos de colaboración con la UPOEG y no hacen nada contra ellos”.

Unas semanas más tarde, alguien forzó la puerta del periódico y entró mientras no había nadie. A raíz de eso, desde el mecanismo de protección del gobierno decidieron poner cámaras de vigilancia y reforzar la seguridad del local. “Yo seguía trabajando y tratando los mismos temas, pero cada vez pasaba más tiempo en mi casa e intentaba no salir, sobretodo por las noches”. La situación se complicó todavía más cuando, en noviembre de 2017, el hijo de uno de los comandantes de la UPOEG se encontró con la periodista y la intimidó disparando al aire y empujándola. Días más tarde, en casa de sus padres, empezaron a aparecer animales de su granja acribillados a tiros; un hecho que se repitió varias veces.

REACCIÓN POPULAR CONTRA LOS ABUSOS

En enero de 2018 se convocó una reunión de ciudadanas para tratar el tema de las actuaciones de la UPOEG en Marquelia. El vecindario reclamaba cambios y quería echar del pueblo a los responsables de los abusos que sufrían. La mayoría de las personas presentes eran familiares de víctimas de la policía ciudadana y decidieron ir a pedirles que les entregaran las armas. Tal y como explica Yaneli Fuentes, “después de la reunión yo fui a casa de mis padres. Hice de comer y estuve con ellos y mi hermano hasta la tarde. Cuando me regresé a Marquelia, escuché por la bocina del pueblo que pedían apoyo a la gente para ir a desarmar a la UPOEG. Decidí ir a la comandancia y, cuando llegué, vi que en la esquina había un grupo de hombres muy bien armados. Llevaban armas largas y yo, a pesar de que había escuchado que las tenían, nunca las había visto hasta entonces. Pensé que algo grave iba a pasar. Seguí avanzando, pero las personas que llegaban eran invitadas a retirarse, y claro, al ver las armas, la gente les hacía caso y se iban. Llegaron más y más camionetas con gente de la UPOEG de distintas comunidades de la zona. Todos muy bien armados. Yo le marqué a la policía estatal para decirle que estaba en ese lugar y explicar cómo estaba la situación y que podía ser peligroso. Me dijeron que llegarían en quince minutos. Las personas que habían hecho el llamamiento también marcaron a la policía estatal para pedir apoyo y el presidente municipal avisó al ejército. Lo que nunca nos dijo la policía estatal es que no podían ir porque no había elementos. Resulta que habían enviado a todos sus hombres a otro municipio de Costa Chica donde los de la UPOEG tenían retenidos a cuatro agentes federales que se habían presentado con unas órdenes de detención dirigidas a personal de la policía ciudadana”.

“Mientras esperábamos a la policía –continúa Fuentes– se dio el primer choque entre la UPOEG y los ciudadanos que se habían acercado al lugar. Yo empecé a grabar y escuché que alguien gritaba: ‘¡Quítenle el teléfono a esa pinche vieja chismosa!’. Entonces dos tipos se me echan encima. Caímos y, mientras intentaban arrancarme el teléfono, me dieron un golpe fuerte en las costillas. De repente alguien me agarró de la mano y me empujó hacia el grupo de personas que estaban concentradas. Yo veía que estaban golpeando a la gente, que los amenazaban con las armas, y marqué de nuevo a la estatal. La gente empezó a huir y algunas personas, en medio del caos y la oscuridad, me sacaron de allí por el patio de una casa”. Una vez en la redacción, Yaneli Fuentes empezó a leer los comentarios de la gente en las publicaciones que el periódico había hecho durante los incidentes. “Los familiares de miembros de la UPOEG negaban los hechos que acababan de suceder y nadie se atrevía a contestarles. Lo más grave es que mi jefe estaba en comunicación con la analista del mecanismo de protección del gobierno y esta persona le decía que la gente estaba contando en las redes que no había pasado nada. Es decir, ella le estaba dando credibilidad a las mismas personas que me acababan de atacar”.

A lo largo de los meses siguientes, las amenazas no pararon pero la periodista siguió haciendo su trabajo. Pero finalmente un intento chapucero de involucrarla en un supuesto complot para matar a un miembro de la UPOEG le hizo saltar todas las alarmas. “Me dí cuenta de que había dejado pasar demasiadas señales y de que realmente ellos tenían la intención de perjudicarme y hacerme daño de verdad. Emocionalmente yo estaba mal y también muy asustada. Mi madre quería que saliera del pueblo. Ella insistía en ofrecirme un dinero que tenía guardado para construir un local para su negocio y al final, cuando ya no podía aguantar más, decidí irme”.

LA SERENA

“Mientras estaba desplazada hice una estancia en una casa que se llama Casa La Serena, gestionada por la organización Consorcio Oaxaca. La verdad es que a mí La Serena me rescató. Era el peor momento de mi vida. Estaba fuera de casa, no podía volver, tenía miedo y extrañaba a mis amigos. La entidad CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer) ya me había invitado antes a varios de sus talleres, pero yo, con las excusas más absurdas, evitaba ir. Entonces me lo volvieron a proponer y acepté. En el último momento me estaba arrepintiendo de haber dicho que sí, y en el aeropuerto, antes de agarrar el avión hacia Oaxaca, todavía pensaba que estaba a tiempo de no ir”.

La periodista explica que “La Serena fue mi primera experiencia de convivencia con otras mujeres. Ni con mi madre había vivido mucho

tiempo –y cuando lo hice fue durante la adolescencia, que es cuando más enfrentado estás con los tus padres, ¿no?– y no sabía de qué hablaban las mujeres entre ellas. Pensaba: ‘¿Qué les diré?’. Pero una vez allí estuve muy bien. La verdad es que cuando llegué no podía mantener los ojos cerrados, no podía tolerar el contacto físico... Hasta ese momento yo no me había atrevido a hablar de las situaciones por las cuales había pasado, de las amenazas que había sufrido. Yo no había recibido ninguna atención psicológica. De hecho no quería ir al psicólogo. No estaba preparada y los rechazaba. En La Serena me aflojé y fue un momento muy bonito. Entré de lleno en el tema del feminismo y me replanteé muchas cosas a nivel personal y laboral”.

Después de pasar diez días en La Serena, Yaneli Fuentes fue a Ciudad de México y se reunió “con varios compañeros periodistas que se habían visto obligados a desplazarse de sus territorios. Me propusieron participar en la constitución de una asociación que se llama Periodistas Desplazados y fuimos a Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, a realizar los trámites. Después de estas dos experiencias ya no me sentía tan sola. Tenía una nueva visión y nuevas ideas para empezar de nuevo. Sabía que había una red de mujeres que me daba apoyo y también que formaba parte de un grupo de compañeros que estaban trabajando el tema de las amenazas y las agresiones a periodistas. Entonces, después de haber pasado cinco meses fuera, decidí volver a Guerrero”.

DE COSTA CHICA A BARCELONA

La periodista pidió al mecanismo de protección del gobierno una escolta permanente para poder volver a su trabajo con normalidad, pero se lo denegaron. “Me decían que no había suficientes patrullas, que no tenían vehículos... Yo me cansé de tanto marcar”. En febrero de 2019, mientras Fuentes estaba haciendo un taller en Ciudad de México, familiares de



uno de los comandantes de la UPOEG estuvieron rondando por su casa, y horas después acabaron disparando, sin herirlo, a uno de sus compañeros del periódico. Los periodistas también se dieron cuenta de que los miembros de la policía ciudadana vigilaban la casa del director. Después de este episodio y gracias al acompañamiento de CIMAC, Fuentes consiguió que el mecanismo autorizara que, de los cuatro escoltas que ya protegían al director del diario, dos pasaran a acompañarla a ella. Un mes después, un amigo le confirmaba que “iban a por mí y que todavía estaba bajo vigilancia porque en febrero no me habían podido atrapar”.

La periodista siguió trabajando y publicando temas relacionados con la UPOEG de otros municipios de la zona. Enfrentamientos y asesinatos entre los propios miembros de la policía ciudadana, denuncias de abusos sexuales a menores, secuestros y extorsiones seguían llegando a su mesa. Cuando familiares de los presos le entregaron un montón de cartas donde los detenidos explicaban sus casos, las torturas y las condiciones de detención, Fuentes empezó a publicar sobre el tema. En aquel momento una persona avisó a la periodista de que la policía ciudadana estaba pensando en detenerla. Por su lado, los responsables de la UPOEG empezaron a realizar declaraciones públicas en otros medios de comunicación de la zona acusándola de ser una “defensora de los delincuentes” y anunciando acciones en su contra. “Yo, a esas alturas, ya entendía que aquellas declaraciones comportaban otra cosa y que eran solamente el paso previo a mi detención. CIMAC ya me había propuesto venir a Barcelona con un programa de protección temporal y entonces pensé que era mejor marcharme que quedarme a ver qué pasaba”.

Para saber más

Conflictos socioambientales en México

<http://ves.cat/ertJ>

Congreso Nacional Indígena

<http://ves.cat/ertK>

Derecho indígena al territorio y a la consulta:
el caso yaqui en México, de Magdalena Gómez

<http://ves.cat/ertM>

El silencio no es una opción. Barcelona protege
a periodistas de México (Taula per Mèxic)

<http://ves.cat/ertN>

Diario Alternativo de Costa Chica
(Guerrero, México)

<http://ves.cat/ertO>

Taula per Mèxic

<http://ves.cat/ertP>

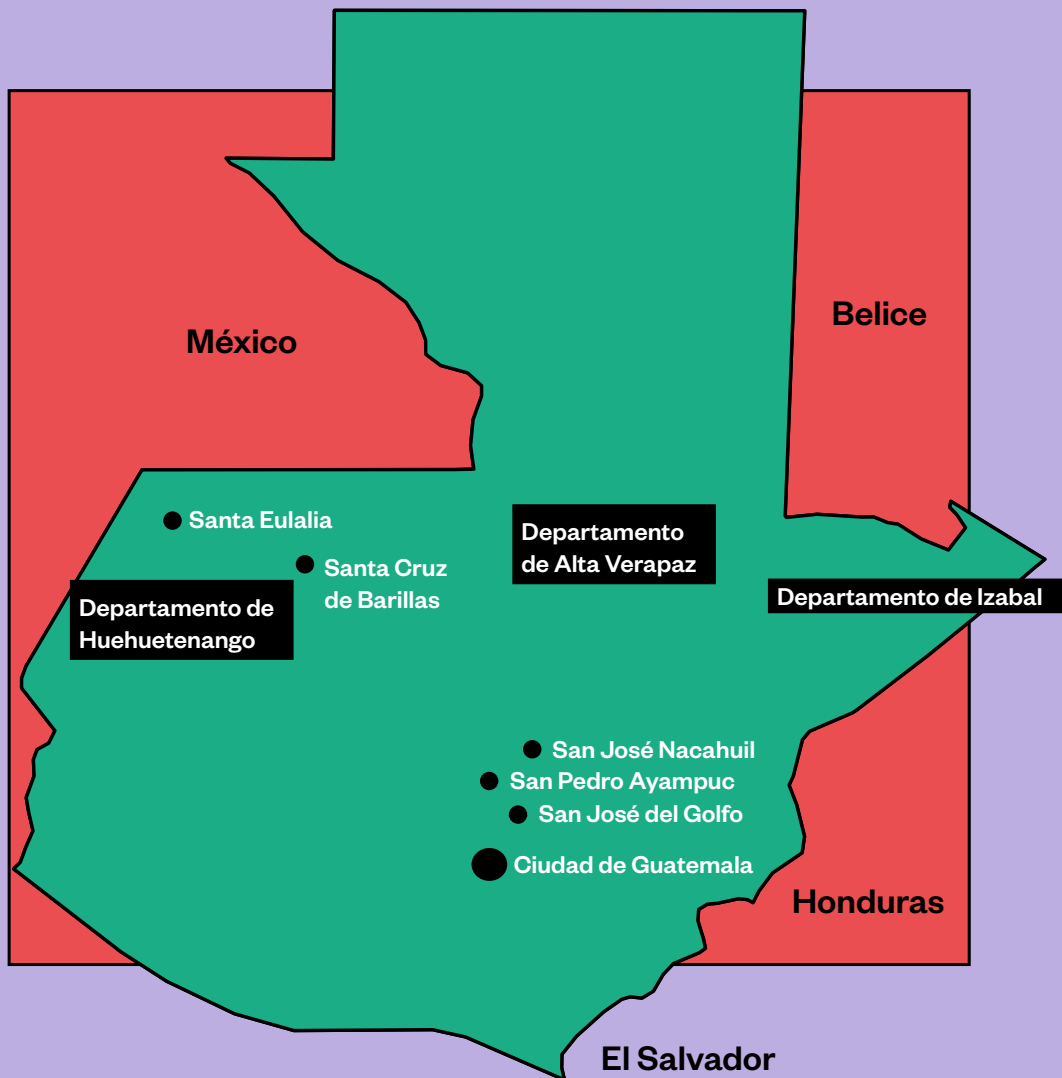
Comunicación e Información de la Mujer (Cimac)

<http://ves.cat/erDn>

Consorcio Oaxaca

<http://ves.cat/erDo>

Guatemala



1960

Inicio de la guerra
de Guatemala

1996

Firma de los
acuerdos de paz

17 MILLONES DE HABITANTES



5.400

personas migradas de Guatemala residen
en el Estado español según el INE



1,3 millones

de las personas migradas de Guatemala
residen en los Estados Unidos



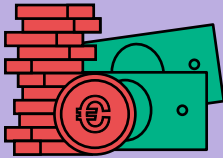
27

conflictos socioambientales según
el Atlas de Justicia Ambiental



0,1 %

de las migrantes residentes en el
Estado español son de origen guatemalteco



220 M€

de inversión de las empresas españolas
en Guatemala entre 2014 i 2018



48,3*

Coeficiente de Gini: Guatemala ocupa el
puesto número 20 en el listado de países
con más desigualdad

2006

Creación de la Comisión
Internacional contra la
Impunidad en Guatemala
(CICIG)

2016

Jimmy Morales
gana la
presidencia

2019

La CICIG es
anulada

*0 sería la perfecta igualdad y 100 la máxima desigualdad

En 1996 Guatemala firmaba los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno de Álvaro Arzú que debían poner fin a una guerra que dejaba más de 250.000 personas muertas y desaparecidas. Veintitrés años después de esa firma, es difícil afirmar que la paz haya llegado nunca a los territorios guatemaltecos. Con casi la mitad de la población indígena y rural, la situación de las comunidades refleja altos niveles de desigualdad y exclusión muchas veces afrontados desde distintas esferas con procesos de resistencia. Trece años después de su creación en 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –organismo que se dedicó a señalar las estructuras de criminalidad organizada, la corrupción estatal y las deficiencias del sistema de justicia; herencias del conflicto armado– fue desmantelada por el expresidente Jimmy Morales.

Denunciar y hacer visibles la vulneración sistemática de derechos humanos en el marco de la instalación de proyectos extractivistas y la situación de complicidad entre el gobierno y las multinacionales para expoliar territorios, obligó Yolanda Oquelí a salir del país. Estaba en riesgo su vida y la de su familia. Había esquivado la muerte, pero no la bala que penetró su cuerpo y sigue albergada cerca de su columna vertebral. Oquelí nació en San José del Golfo, en el departamento de la capital (Ciudad de Guatemala) de un país con alrededor de un 50% de la población indígena, durante los años ochenta, en plena guerra. El conflicto armado duró 36 años y dejó, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Guatemala, 200.000 personas desaparecidas y 100.000 desplazadas. Y a pesar de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996, el país maya no encontró nunca una situación estable de paz territorial. Lejos de eso, desde el punto de vista de distintas activistas por los derechos humanos consultadas, Guatemala sigue en guerra.

AYUDAR A ABRIR LOS OJOS

“La magnitud de la corrupción del gobierno y de las empresas –lamentablemente todas vinculadas con el crimen organizado– es muy grande, es toda una misma estructura”, asegura Yolanda Oquelí. Ella regentaba una pequeña tienda de fertilizantes y abonos en San José del Golfo cuando, sin previo aviso ni consulta, llegó la noticia de que una gran mina se instalaría en el territorio. La multinacional canadiense Radius Gold Inc. se disponía a instalar en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, dos pueblos a veinte kilómetros de distancia de la capital, el proyecto minero de extracción de oro y plata El Tambor Progreso VII Derivada. Para el año 2009 cogió impulso el proceso de lucha comunitaria. “Yo enseguida me involucré. Vi la necesidad de empezar a concienciar a las comunidades y explicar qué se nos aproximaba, con los pros y los contras –que son más contras que pros–, y vimos de informar a todas las comunidades. Esto hizo que la resistencia fuera tan fuerte: la información”, explica la activista.

Según el Atlas de Justicia Ambiental, el área del proyecto minero El Tambor era de 20 km², la inversión sería de 33,7 millones de dólares estadounidenses y afectaría negativamente de manera directa al menos a 4.000 vecinas de la región, buena parte de ellas del pueblo maya kaqtxikel. “Desgraciadamente es uno de los muchos proyectos en nuestro país. Cuando ves el mapa de las licencias que están en etapa de exploración y de explotación te quedas impactada porque ya no hay más territorio para arrasar. Los gobiernos entregan nuestros territorios sin consultar”, asegura la activista. Esta era la principal demanda del colectivo: poder

hacer una consulta previa que preguntara a las comunidades locales si estaban de acuerdo con la instalación de la mina tal y como estipula el convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala en 1996. En 2017, según el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, en el país había 307 licencias entregadas, 270 para explotar y 37 para explorar, y 599 solicitudes en trámite. La dinámica que han demostrado los sucesivos gobiernos guatemaltecos es de nula voluntad política para aplicar el convenio 169. “La raíz de toda la problemática es que nunca se hacen los procesos de consulta pertinentes”, denuncia Oquelí.

CUANDO NI LA LEY NI LA NO-VIOLENCIA SON GARANTÍA

La lucha en San José del Golfo se intensificó y Yolanda Oquelí pronto se situó como una de las portavoces del proceso de resistencia contra la mina de Radius Gold Inc. “No era solo que se llevarían el oro, sino que contaminarían las aguas y destruirían los bosques. Para mí esto es lo más doloroso”, expresa la guatemalteca. “Justamente en esta región es donde empieza el corredor seco del país y es donde ya llueve poco, así que teníamos que defender nuestros acuíferos, nuestras montañas”, sigue. Desde marzo de 2012, las comunidades afectadas, con un amplio apoyo popular, instalaron la resistencia pacífica de La Puya, un campamento que bloqueaba la entrada de camiones y maquinaria en la mina. Conocían el caso de otros procesos de resistencia contra el extractivismo y “habíamos visto como criminalizaban las luchas. Por eso la nuestra buscaba ser exclusivamente no-violenta, pacífica, y solamente exigir nuestros derechos”, explica la lideresa guatemalteca. Aun así, enseguida llegaron la represión, la criminalización y la persecución de todo el movimiento.

*Yolanda
Oquelí*

En el ámbito personal, las amenazas llegaron primero vía telefónica. Después llegaron también las citaciones judiciales. “Yo estoy criminalizada, no puedo contar las demandas que tengo en mi contra; así que la lucha pacífica no da garantías, esto lo pudimos comprobar”, se lamenta Oquelí: “No tenía clara la magnitud de cuán podrido está todo”. A la persecución judicial le siguió la persecución física. El 13 de junio de 2012, dos hombres en moto dispararon contra Yolanda Oquelí y una de las balas entró en su cuerpo. Sobrevivió, aunque “todavía tengo una bala a medio milímetro de la columna que me causa muchos dolores pero que no pueden extraer porque corro el riesgo de quedar parapléjica. Pero ninguna bala podría sacar mi conciencia”, asegura.

Todavía nadie ha pagado ninguna pena por la agresión contra Oquelí. El nivel de impunidad de la persecución de lideresas sociales es extremo en un país donde la violencia está altamente normalizada. Según un estudio del diario guatemalteco *Plaza Pública*, en el país maya hay 4 armas por cada 100 habitantes, y en los últimos diez años, entre el 70%



y el 80% de las muertes violentas se han ejecutado con arma de fuego. El mismo estudio denuncia que en octubre de 2018 había casi 24.000 agentes de seguridad privada registrados en el Ministerio de Gobernación y 36.000 agentes de Policía Nacional Civil, y afirma que el número de personas que trabajan en la seguridad privada de manera ilegal podría llegar a las 200.000. Las empresas, así como las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, que hay detrás de la instalación de esta violencia en el país entran y salen de la escena según sus intereses.

“Curiosamente, después del primer atentado contra mi vida la empresa cambió de nombre”. A finales de 2013, sin expresar los motivos, la multinacional canadiense decidió retirarse de esta iniciativa que se había convertido en una problemática: Radius Gold Inc. vendió sus participaciones del proyecto El Tambor a la multinacional estadounidense Kappes Cassiday and Associates (KCA), con sede en el estado de Nevada. Su subsidiaria local guatemalteca, Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), es la empresa que seguiría reprimiendo y persiguiendo, ahora de manera sanguinaria, la resistencia que la comunidad oponía contra la lógica extractivista. En julio de 2013 fue asesinado por la espalda el activista de la resistencia pacífica de La Puya Santos Fidel Ajau. Dos meses después, un grupo paramilitar –presuntamente coordinado con la Policía Nacional Civil– perpetró la masacre de once miembros de la comunidad kaqtxikel de San José Nacahuil que también participaban del movimiento de resistencia contra la mina El Tambor. Diecisiete personas más salieron heridas, entre ellas varios niños.

VICTORIAS AMARGAS

Si la persecución fue tan intensa fue porque la lucha estaba dando donde dolía: “Yo me maravillaba cuando los expertos nos decían cuántos mi-



La justicia neoliberal

En Guatemala impera, en términos de mercado, el tratado de libre comercio entre la República Dominicana, la América Central y los Estados Unidos: el DR-CAFTA (por sus siglas en inglés). Como todos los tratados de libre comercio, este acuerdo establece sus propios mecanismos para resolver posibles conflictos; teóricamente solo entre estados y, solo en casos de extremo desacuerdo, entre estados y empresas. En la práctica, sin embargo, a través de los tratados de libre comercio se han creado sistemas de justicia paralelos a los sistemas nacionales y supranacionales, espacios de arbitraje que colocan al mismo nivel estados nación, empresas multinacionales e inversores internacionales.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington DC, es el espacio de arbitraje internacional encargado de tramitar la demanda que Kappes, Cassiday & Associates (KCA) ha interpuesto contra Guatemala para parar el proyecto minero El Tambor de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. La multinacional estadounidense reclama al gobierno de Jimmy Morales una indemnización por valor de 300 millones de dólares.

llones de dólares habían perdido cuando llevábamos 21 meses de lucha”, explica Yolanda Oquelí. En 2015 la resistencia de La Puya empezó a recoger sus frutos: la Corte Suprema de Justicia canceló la licencia de explotación por inviabilidad. Los motivos eran varios y desautorizaban el estudio de impacto ambiental presentado en un inicio. “La comunidad más próxima al proyecto estaba a 350 metros, por lo tanto el riesgo era muy alto. Los niveles de arsénico de la comunidad eran más elevados de lo permitido. Y, además, en aquella área del país donde hay la mina, hay una falla geológica que cruza Guatemala y que es la que provocó los últimos terremotos”, enumera Oquelí.

Pero de un caso concreto y una lucha local, la activista pasó a ser crítica con la realidad estructural del país y con el modelo económico global y se organizó a niveles más amplios: “El planteamiento y el cuestionamiento que yo siempre colocaba ante el gobierno hicieron que pasara a participar en otras luchas”. Si su lucha había sido contra empresas de los Estados Unidos y el Canadá, cuando la invitaron a conocer otros procesos de resistencia empezó a toparse con la huella de empresas españolas. “Veíamos que todas tienen relación y que todas actúan con una impunidad impresionante”, denuncia. La lucha contra los monocultivos extensivos de la región de Izabal promovidos por la multinacional española Repsol o el proyecto hidroeléctrico Hidro San Luis de la empresa Cinco M S.A., en el departamento de Huehuetenango, son algunas de las luchas a la que siguió dando apoyo Yolanda Oquelí.

Efectivamente, en Guatemala se han logrado paralizar varios proyectos extractivistas gracias a la lucha por el territorio de las comuni-

La huella de las empresas españolas

“En toda el área noroccidental de Guatemala es donde se han perpetrado más masacres y donde hay más megaproyectos, durante el conflicto armado y hasta la actualidad”, denuncia Ana G. Aupi, comunicadora popular española-guatemalteca. “Allá se ha dado la resistencia más significativa de los últimos años contra un proyecto hidroeléctrico”, continua. Habla de la región de Santa Cruz de Barillas, donde las comunidades indígenas mayas consiguieron frenar en 2016 el proyecto hidroeléctrico que quería instalar en

el río Q'amB'alam la empresa española Hidralia Energía, propiedad del gallego Luis Castro Valdivia.

El proceso de lucha contra el proyecto, desde el año 2009, fue víctima de estigmatización, criminalización y persecución. Andrés Francisco Miguel y Pedro Miguel Mateo fueron asesinados por oponerse a la presencia de Hidralia en su territorio. Tal y como analiza Ana G. Aupi, “lo que hubo ahí es un ensayo de penetración transnacional. Allá se hizo la prueba y después se expandió por todo el país”. A pesar de que Hidralia se ha ido del territorio, “el mal no se va. Es como la guerra, que se queda”, afirma la comunicadora.

También es española la empresa ACS, responsable del proyecto hidroeléctrico Renace y de la destrucción del río Cahabón –que da vida a 29.000 indígenas kekchí de Alta Verapaz. Detrás del desastre, uno de los hombres que más poder concentra en el Estado español y en América Central: Florentino Pérez. La lideresa social maya quiché también refugiada en el Estado español, Lolita Chávez, ha denunciado incansablemente que el presidente del Real Madrid “está matando la gente de Guatemala”. El naviero Ángel Pérez-Maura es otro de los empresarios españoles despreciados en Guatemala. El Estado guatemalteco hace años que exige su extradición del Estado español para poder ser juzgado por un caso de corrupción según el cual el empresario habría sobornado altos funcionarios para conseguir la adjudicación de la infraestructura de Puerto Quetzal.

dades, pero estas victorias han costado vidas y libertades, y los procesos de lucha han creado fracturas sociales en los tejidos comunitarios que siempre quedan invisibilizadas. Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEHUGUA), entre 2015 y 2018 fueron asesinadas 51 defensoras de derechos humanos y 1.641 fueron agredidas. UDEFEHUGUA también denuncia que en 2019 el modelo extractivista ha asesinado 15 personas y ha agredido a 462. Además, al menos 312 lideresas han sido víctimas de criminalización por su labor de defensa del territorio. “Es increíble, pero cuando hay una cara visible que atenta contra una empresa en concreto, todas se ponen de acuerdo para silenciarnos”, denuncia Oquelí.

APLAZAR EL EXILIO

Recordando el día en que esquivó la muerte, Yolanda Oquelí asegura: “El atentado me cambió la vida, pero quise seguir porque creía que era importante haber salido viva; era una responsabilidad que tenía”. Ella, que siempre había pensado que “perro que ladra, no muerde” y que las amenazas eran solo un mecanismo para construir miedo, tuvo que cambiar de dinámicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le asignó medidas cautelares con un esquema de seguridad: “Iba siempre con policías armados, pero ya no podía salir con mis hijos a la calle”, recuerda triste. Se encontraba con que ya no la invitaban a casa de amigas o familiares ni a fiestas de cumpleaños por el riesgo que llevaba consigo a todos lados. Lo peor, según la activista, es que entonces no era del todo consciente de todo lo que estaba perdiendo poco a poco, “de las fisuras sociales, que causan muchos daños”, porque seguía ocupada con la lucha.

Y es que a pesar de la amarga victoria, la resistencia pacífica de La Puya seguía y sigue activa hasta hoy: “Hay grupos comunitarios que cuidan el campamento las 24 horas, “porque cancelar la licencia no es garantía de que la empresa no siga trabajando”, explica Oquelí. Del mismo modo que antes de conseguir fraudulentamente la licencia de explotación Radius Gold Inc. ya había excavado un túnel, “se sabe que todavía hay personal trabajando dentro de la mina. Lo que conseguimos fue que cayeran en la ilegalidad”, confiesa la guatemalteca.

El punto de inflexión llegó el día en que, después de una llamada con una amenaza de muerte, su hijo le dijo: “Mama, vayámonos porque nos van a matar”. La idea de dejar atrás Guatemala sin saber cuándo podría volver se le hacía muy difícil. Despedirse de su madre, que en aquel momento tenía 84 años, podía significar “decirle adiós para siempre jamás”, explica, triste, la lideresa comunitaria. A través de un programa de Amnistía Internacional, Yolanda Oquelí salió de su país en dirección al Estado español junto con su familia en enero de 2018.

La CICIG

Creada en 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) surgió como respuesta a una situación política y social crítica que no había mejorado desde la firma de los acuerdos de paz de 1996. En vez de ser desarticuladas, las redes de poder instaladas durante la guerra se profundizaron y los procesos de impunidad por los crímenes del conflicto armado se consideraban desmesurados por varias organizaciones sociales nacionales e internacionales.

La CICIG se configuró como un órgano internacional de carácter independiente que surgía de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala y que nacía con el objetivo de investigar los delitos de los “cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad”, según la misma CICIG, a la vez que fortalecer el sistema de justicia. La sociedad civil organizada fue la que manifestó la necesidad de crear un espacio de lucha contra la impunidad de estas características.

Después de contar con varios comisionados comprometidos, a partir de 2014 la responsabilidad de la CICIG estuvo en manos del jurista colombiano Ivan Velásquez, reconocido en su país por la persecución inédita del paramilitarismo y el famoso escándalo de la parapolítica a inicios de la década de los 2000. El colombiano se convirtió en una figura muy incómoda para el gobierno guatemalteco al levantar el velo de muchos procesos de impunidad que pronto apuntaron a las altas esferas. En 2017

llegó el primer intento de borrar a Velásquez del mapa: el actual presidente, Jimmy Morales, intentó expulsarlo del país después de declararlo “persona non grata”, pero la Corte de Constitucionalidad lo evitó.

Desapariciones forzadas, torturas y otras cuestiones relevantes en materia de derechos humanos que en otros países de América Central y del Sur son casi intocables empezaban a ser indagadas en Guatemala desde una política de investigación criminal estratégica. La CICIG se había convertido en un paradigma contra la impunidad, un caso único en América Latina. Cuando se empezaron a presentar casos que implicaban a la misma presidencia del país, la comisión internacional se convirtió en intolerable. El 31 de agosto de 2018, el presidente Jimmy Morales anunciaba unilateralmente la no renovación del mandato de la CICIG, que vino seguida de un desmantelamiento acelerado y lleno de irregularidades de la comisión que más luchó contra la impunidad.



Miembros de la resistencia pacífica de La Puya protestan contra el gobierno de Otto Pérez Molina, presidente hasta el año 2015

Para saber más

La resistencia pacífica de La Puya, proyecto minero
El Tambor, Guatemala (EjAtlas)
<http://ves.cat/erDp>

Informe *Por el derecho a defender derechos 2017*
(UDEFEUGUA)
<http://ves.cat/erDq>

Florentino Pérez roba un río en Guatemala
<http://ves.cat/erDr>

Empresas españolas como ACS e Hidralia causan
impactos en tierras indígenas de Guatemala
<http://ves.cat/erDs>

Honduras



2006

Manuel Zelaya
llega a la
presidencia con
un giro progresista

2009

Golpe de estado a Zelaya
que impone un gobierno
de facto encabezado por
Roberto Micheletti

9,5 MILLONES DE HABITANTES



+ 100.000

hondureños han migrado al Estado español
desde los años 90



1 millón

de hondureños (11% de la población)
reside en los Estados Unidos



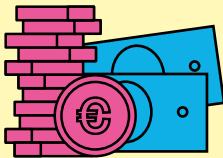
20

conflictos socioambientales
según el Atlas de Justicia Ambiental



1,7 %

de las migrantes residentes en el
Estado español son de origen hondureño



10 M€

de inversión de las empresas españolas
en Honduras entre 2016 y 2017



50,5*

Coefficiente de Gini: Honduras ocupa el
puesto número 8 con más desigualdad social

2013

Se aprueban la nueva
ley de minería y la ley
de las ZEDE (zonas de
ocupación y desarrollo
económico), con el
otorgamiento masivo
de territorios al capital
transnacional

2017

Fraude electoral
por parte del actual
presidente, Juan Orlando
Hernández, seguido de
movilizaciones

2018

Se masifican
las caravanas
migrantes de
hondureños
hacia los
Estados Unidos

*0 sería la perfecta igualdad y 100 la máxima desigualdad

Diez años después del golpe de estado contra Manuel Zelaya, Honduras vive inmersa en una situación de emergencia social. Los altos índices de violencia, de desigualdad y de inseguridad han llevado más de un millón de personas a huir del país en los últimos años. La militarización de los territorios, la judicialización de las que luchan y la represión social exhiben la realidad de un estado que, más que fallido, se muestra funcional a un modelo económico neoliberal que ha llevado a muchas comunidades a desplazarse también internamente. En 2018 el Estado español tramitó 2.410 solicitudes de asilo de personas hondureñas, de las cuales solo 10 fueron aceptadas. Además, 3.690 quedaron pendientes.

Milthon Robles lleva quince años denunciando e investigando la situación política y social de Honduras a través del periodismo. Inversiones extranjeras en la instalación de proyectos extractivistas, tramas de prostitución infantil o irregularidades en los procesos electorales han estado en el punto de mira de su trabajo. Desde San Pedro Sula, la segunda mayor ciudad del país, ha visibilizado por medio de la radio situaciones de vulneración de los derechos humanos. A inicios de la década de los 2000, daba voz y colaboraba con varias entidades dedicadas a los derechos de la infancia, las mujeres y el colectivo LGTBI: “Aquí fue cuando empecé a ser incómodo”. “Uno de los grandes problemas era, y es, que las travestis son utilizadas para vender droga, y no solo son extorsionadas por los *tratas* –ejecutores del tráfico de personas– sino también por la policía, que está muy involucrada. Nos encontramos con casos de travestis que habían sido violadas o golpeadas por policías”, relata el periodista.

En aquella época, José Manuel Zelaya preparaba la campaña para presentarse a las elecciones presidenciales de 2005 por el Partido Liberal. Gobernaba Ricardo Maduro, del Partido Nacional, quien acababa de firmar un acuerdo con el FMI para condonar un 60% de la deuda externa en el marco de la llamada Iniciativa por los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), creada por el G8. En el año 2005 gana las elecciones *Mel Zelaya*, quien paso a paso orquesta un cambio de bando: en 2008 Honduras ingresaba a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), promovida por Cuba y Venezuela. Gracias al trabajo del movimiento hondureño contra la minería, Zelaya decretó una moratoria sobre nuevas concesiones mineras y propuso un proyecto de ley en el Congreso que incluía la prohibición de la minería a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio, entre otras medidas. El presidente liberal planeaba consultar al pueblo hondureño, mediante un plebiscito, la posibilidad de instalar una asamblea nacional constituyente, cuando todo cambió de repente.

GOLPE DE ESTADO A ZELAYA

A pesar de que Milthon Robles había estado denunciando “la inoperancia y las políticas de derroche” de Manuel Zelaya, cuando el presidente fue increpado mientras dormía, encañonado por fusiles de las fuerzas armadas y, después de pasar por la base militar estadounidense de Palmerola, expulsado del país –aún con pijama–, el periodista no calló. Según Robles, el golpe de estado contra Zelaya significó “una ruptura total del orden constitucional. Estalló todo: las garantías sociales, los derechos humanos, las libertades”. Si la lógica imperativa es que los grandes medios de comunicación “siempre están con el gobierno de turno”, como relata

el periodista, el tratamiento y la cobertura que Milthon Robles hizo del golpe de estado lo llevaron a exiliarse por primera vez de su país. Era 2009 y Robles tenía 27 años. Después de pasar en Guatemala “ocho meses, como en una prisión”, regresó a San Pedro Sula, “a volver a empezar”, recuerda.

Según Robles, “el gran problema en mi país no viene de la violencia de las pandillas, como quieren mostrar; viene de muy atrás, de las inversiones extranjeras, para las que conviene que el país esté en caos. No es solo por la situación geográfica de Honduras, que es envidiable porque tiene salida al Caribe y al Pacífico”, analiza el periodista, “sino porque interesa mantener ciega a la población, que no se dé cuenta de qué pasa a su alrededor”. ¿A quién le interesa? “A las transnacionales, a los Estados Unidos, a la Unión Europea... A las grandes potencias”. ¿Y por qué? “Para explotar los recursos naturales”. Robles centró parte de sus investigaciones en las actividades mineras ilegales que explotaban antimonio, coltán y cobre en el departamento del Yoro –que a menudo son exportados a países como Hong Kong– o al tráfico ilegal de “madera de color, que es de la más cara que hay en el mercado y que suele venir hacia España, pero es difícil saber con qué empresas”, relata.

*Milthon
Robles*

En 2010 Honduras llegaba al récord de ser el país sin una guerra oficial con más violencia del mundo. En 2015 batía su récord en otra categoría: fue el país donde ser activista medioambiental o defensora del territorio era más peligroso. Desgraciadamente, el récord se tradujo y se sigue traduciendo en el asesinato sistemático de lideresas sociales y comunitarias como Berta Cáceres, activista del pueblo indígena lenca y ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente que fue asesinada el 3 de marzo de 2016.

LA VIDA COLGANDO DE UN HILO

Hacía años que Milthon Robles investigaba las tramas de extorsión que cada vez afectaban a un sector más amplio de la población hondureña. El ultraconservador Juan Orlando Hernández era presidente cuando, alrededor de 2015, la violencia ya afectaba a las amistades y la familia de Robles. Pero él no otorga todo el protagonismo a las impopulares pandillas criminales llamadas maras: “Las pandillas cobran las extorsiones, pero en la estructura jerárquica de estas organizaciones los que en realidad acaban cobrando son la policía, el ejército, diputados, empresarios, multinacionales, pastores evangélicos, etc. Las pandillas son la cara visible, las víctimas del sistema”. Este planteamiento casi le costó la vida. Volvieron las amenazas y con ellas un estado psíquico de nervios y desesperación. “Pero las amenazas no venían a través de las pandillas. De hecho, gracias a dos exmiembros de una mara que conocía pude ponerme en alerta para



protegerme. Me dijeron que me cuidara y que dejara lo que estaba haciendo, que no serviría de nada. Y me dijeron que era gente de la policía la que me quería matar”, asegura el reportero.

El 19 de septiembre de 2016, Milthon Robles fue increpado mientras andaba por la calle por hombres que lo amenazaron con una pistola, le taparon la cabeza y lo hicieron subir a un coche. Reconoció la voz de uno de los hombres: “Era un policía que vivía en una colonia que se llama El Roble y fue el que me amenazó con la pistola y el que más discutía conmigo”, recuerda. Ocho horas de batalla psicológica de las cuales el periodista salió vivo pero en un estado ya muy alterado de angustia. “Que te metan un tiro y te maten, mira, ya está, pero el sufrimiento que de que te golpeen, que te puedan dejar inválido, eso sí es terrible”, confiesa Robles. Este fue el último gran susto después de varios intentos de asesinato —por atropello o con tiros de arma de fuego en la calle— sufridos en diferentes ocasiones en San Pedro Sula. Enseguida se activó el mecanismo de protección institucional y, después de estar cuatro días encerrado en su casa, lo trasladaron hacia la capital del país, Tegucigalpa.

PROTEGIDO POR SUS VERDUGOS

El Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia es el órgano del Estado hondureño encargado de gestionar las solicitudes de protección que recibe desde la sociedad civil. En sus manos, Robles no se sentía mucho más seguro: “El Mecanismo me ofrecía protección



Pandillas y narcotráfico

La antropóloga Gabriela Poblet investiga desde hace años los procesos migratorios de personas de Honduras y El Salvador. Ella asegura que la violencia de las maras está cada vez más presente “en los relatos de personas de Honduras” migradas y refugiadas en el Estado español. “Las pandillas son la capa más visible pero, por supuesto, hay todo un entramado detrás. Te cobran el impuesto, pero no sabes hacia dónde va”, asegura la investigadora de origen argentino, “se asemejan cada vez más a una mafia”. Para entender su auge en Mesoamérica en las últimas décadas, es necesario entender la lógica geoestratégica regional.

“En esencia, detrás hay un interés por el narcotráfico. América Central ha estado en un conflicto permanente e inestable durante un siglo y medio. A medida que las pandillas empiezan a crecer, van apropiándose cada vez más del negocio del narcotráfico y, no lo olvidemos nunca, el de personas. Cada vez hay más investigaciones precisas, por ejemplo, sobre las pandillas que operan en las zonas de la frontera entre Guatemala y México, donde se dan desplazamientos de comunidades campesinas para hacer pasar nuevos corredores de tráfico de drogas y de personas. Sin duda, teniendo Colombia debajo y los Estados Unidos encima, el de la droga es el mercado más común, están condenados”, opina Poblet.

Sincera y con un tono pesimista, la antropóloga añade que, para ella, “Honduras tiene un punto de surrealista, de descarado: no es un estado, es una cosa extremadamente clientelista, feudal, corrupta. Prácticamente no hay instituciones públicas, está todo mezclado y las pandillas lo han ido controlando todo”.

policial, a la cual me negué rotundamente porque ¿cómo puedes aceptar que te acompañen los mismos que te persiguen?”. Se acogió a otras posibilidades de protección del mismo Mecanismo mientras, conjuntamente con ONG y organizaciones de la sociedad civil como el Comité por la Libertad de la Expresión, encontraban una forma de salir del país. Pasó aproximadamente tres meses en la capital hondureña, Tegucigalpa. Los que lo perseguían lo localizaron de nuevo allá donde el Mecanismo lo alojó: volvió a recibir amenazas por vía telefónica y, “cuando lo denunciaba al Mecanismo, no hacían nada”, se queja. “Desde mi experiencia, el Mecanismo no funciona. Pero yo no tenía otra opción”, se lamenta Robles.

Finalmente, la vía y el medio de financiación para exiliarse de Honduras se consiguieron gracias a la solidaridad de varios actores: en buena parte, a la intermediación de Dina Meza, periodista y defensora de los derechos humanos hondureña fundadora del centro hondureño del PEN Internacional, asociación defensora de la libertad de expresión que conecta escritoras a escala global. FreedomHouse, ONG de origen estadounidense, puso los recursos económicos para un vuelo hacia Madrid. Reporteros Sin Fronteras emitió la documentación necesaria para que el Estado español le pudiera tramitar la residencia temporal de circunstancias excepcionales por razones humanitarias. “Pero ellos no te sacan del país, ellos te ayudan en cosas puntuales y tú te tienes que buscar la vida”. Milthon Robles consiguió subir a un avión rumbo a Madrid el 11 de diciembre de 2016.

HUIR DE LA TRANSFOBIA

“Las transexuales somos invisibles en Honduras”. Carol Murcia, mujer transexual hondureña, es superviviente de un país con una cultura machista y transfóbica donde en los últimos diez años han sido asesinadas al menos 325 personas de la comunidad LGTBI por el hecho de serlo. También en la ciudad de San Pedro Sula, Murcia trabajaba como educadora en el Colectivo Unidad Color Rosa, una organización que trabaja en la defensa de los derechos de las personas transexuales financiada sobre todo a través de organizaciones internacionales, “porque el gobierno nunca nos ha apoyado”, denuncia la activista. “En mi país no tenía ningún reconocimiento como mujer trans: allá eres travestí y ya está”, sigue.

Carol Murcia

En Honduras los diferentes tipos de violencia –machista, racista, clasista– se cruzan con las múltiples violencias que hay tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Después de que su padre las abandonara cuando ella tenía nueve años, a Carol Murcia, sus hermanas y su madre les tocó salir desplazadas de su barrio debido a la intimidación de la Mara MS que reinaba en su barrio. “La casa donde mi madre nos había criado, donde pasamos hambre, enfermedades y pobreza; de allá, miem-



bros de la pandilla nos dijeron que teníamos 24 horas para marchar, con pistola y todo”, relata Murcia.

Diez años después, cuando Murcia tuvo el valor de decidir hacer la “transición hacia lo que yo realmente era, una mujer”, perdió automáticamente su trabajo como supervisora de una fábrica textil. Como chico, hijo de una familia monoparental de bajos recursos económicos, había tenido varios trabajos de cara al público que a partir del momento de su transición pasaron a ser inaccesibles. Pero “las mujeres trans tenemos que vivir de algo, también comemos”, afirma, realista, Carol Murcia, “y yo ejercía la prostitución”. Las calles del barrio de Suyapa fueron su espacio de trabajo durante cuatro largos años.

SEGAR VIDAS CON TOTAL IMPUNIDAD

En 2018 el índice de violencia de Honduras era de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La prostitución en las calles ejercida desde un cuerpo discriminado e incomprendido conlleva, en un país violento como Honduras, un riesgo muy alto. “De repente llegaban grandes coches, lujosos, bajaban el vidrio, sacaban el arma y... A tiros. Otras veces nos echaban piedras o petardos, pero yo he sido testigo de cómo mataban a mis compañeras en la calle, a tiros”, denuncia la activista LGTBI. No eran asesinatos selectivos, se trataba de transfobia organizada. En una ocasión, por negarse a bailar sin remuneración ante un puñado de hombres, una de sus amigas fue asesinada con 24 balas ante una cámara de vigilancia. Carol Murcia no es de las que se queda con los brazos cruzados: decidió denunciar, exigir las grabaciones como pruebas, pero “la policía no me



ayudó, son corruptos, ellos decían que las transexuales somos unas payasas de la sociedad, en mi cara”, denuncia Murcia.

La siguiente situación de injusticia ante la que Carol Murcia no se quedó callada fue la que le costó el exilio. “Estaba con una amiga. De golpe, estacionó un coche a nuestro lado, bajó un hombre y le disparó a mi amiga en la cabeza. Pensé que también me mataría a mí, pero volvió hacia el coche”, relata. Murcia grabó un video del coche y la matrícula de este hombre y procedió, de nuevo, a poner una denuncia. Esta vez sí, el hombre, guardia de seguridad y cliente de su amiga, fue capturado por la policía el día siguiente por la mañana. Con este, Murcia ya acumulaba una serie de sujetos que podían pretender atentar contra su vida por haber defendido los derechos del colectivo transexual. La misma policía y el Colectivo Unidad Color Rosa le recomendaron salir del país. “Yo ya tenía un informe policial propio porque había denunciado muchas veces y esto me ayudó”, explica.

Sin embargo, el mecanismo de protección del Estado hondureño que usó el periodista Milthon Robles y que teóricamente tendría que proteger a todas las defensoras de los derechos humanos no se ha aplicado nunca, según Carol Murcia, con miembros del colectivo LGTBI. “Es un mecanismo con doble moral”, afirma la activista. “Hasta que no llegué a España no me di cuenta de que en Honduras hay tantas defensoras de los derechos humanos. Yo no las vi nunca en nuestras luchas”, denuncia la activista. Según ella, en Honduras hace falta unidad entre las diferentes luchas populares y sociales. El colectivo transexual, sobre todo por desconocimiento, todavía está muy discriminado por el resto de sectores. A través de un programa especial de asilo para mujeres trans en peligro de muerte, Carol Murcia salió de Honduras en septiembre de 2016.

DE ESTUDIANTE DE QUÍMICA AL EXILIO

Cuando Nery Gómez aceptó finalmente que tenía que huir de Honduras porque su vida colgaba de un hilo, no se lo pensó ni un momento al buscar la forma de hacerlo a través de las redes de solidaridad locales e internacionales. “Yo no opté por el mecanismo de protección porque es un mecanismo institucional y Honduras es un estado fallido”, asegura el joven. A inicios de 2017, Gómez estudiaba la carrera de química y farmacia a la vez que la de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa. Era uno de los miembros más activos del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU); su vida giraba en torno al estudio y la militancia. Aún activo, una de las tareas centrales del MEU es la lucha contra la privatización de la educación pública, pero, además, “tenemos una visión de trascender los muros de la academia para denunciar que la mayoría de la población en Honduras no puede estudiar por más que la educación sea un derecho fundamental”, explica el activista.

El posicionamiento del MEU es que “la universidad tiene que estar vinculada necesariamente con los pueblos indígenas y garífunas, y por eso siempre trabajábamos conjuntamente con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), donde luchábamos con nuestra compañera Berta Cáceres, y con la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), con Míriam Miranda”, asegura Gómez. “La universidad tiene una responsabilidad ante una situación en la que el gobierno está otorgando concesiones a multinacionales: concienciar sobre el sistema extractivista que está creando desplazamientos internos en nuestro país, que está expoliando a las comunidades ancestrales de sus territorios”, afirma el estudiante. Según él, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández “no manda en Honduras, mandan estos poderes fácticos que son unas pocas familias, como los Facussé, a las cuales el gobierno entrega las concesiones que quieren”. Nery Gómez habla con emoción de la época en la que el MEU apoyó desde la capital hondureña a la campaña que Berta Cáceres lideró en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desa para salvar el río Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca, y que le costó la vida. A Míriam Miranda, lideresa garífuna, compañera de lucha de Cáceres y superviviente de múltiples atentados, la considera una “gran maestra”.

*Nery
Gómez*

LAS PROTESTAS CONTRA EL FRAUDE DE 2017

El ataque con gases lacrimógenos y la violencia policial siempre habían sido la respuesta automática a cualquier movilización estudiantil en las calles de la capital hondureña, pero a finales de 2017 la represión saltó a otro nivel. El 26 de noviembre de 2017, el recuento de los resultados de las elecciones presidenciales reprodujo una secuencia que se ha repetido en varias ocasiones en diferentes países latinoamericanos durante la última década: un cambio de tendencia drástica en el escrutinio de los resultados después de un apagón informativo. “Por arte de magia, el sistema de monitoreo paró y, cuando se retomó, ya ganaba la extrema derecha”, relata Nery Gómez. La operación dio lugar a la reelección de Hernández, acusado en varias ocasiones de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico. Esta jornada electoral con esencia de fraude y engaño enseguida llevó buena parte de la población hondureña a la calle y a la acción directa, y Gómez no fue de los que se quedó en casa. Según un informe de Coalición contra la Impunidad de Honduras, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018 se registraron 33 muertes de manifestantes y 3 de agentes policiales. “Nosotros sabíamos que la policía ya nos tenía fichados”, explica Gómez. El 20 de enero se convocó una gran huelga general indefinida que paralizó el país, el campo y la ciudad. En Tegucigalpa los enfrentamientos entre manifestantes



y policía fueron sanguinarios. “Aquel día yo actuaba como observador de derechos humanos, y la policía nos persiguió, nos disparó, con balas. Me refugié en una casa particular, pero la policía entró y me sacaron a la fuerza”, sigue explicando. En el video del momento en el que se lo llevan esposado se puede ver cómo la policía enseña constantemente un cóctel molotov delante de la cara de Nery Gómez. El estudiante fue trasladado a una comisaría donde fue torturado física y psicológicamente. Organismos de derechos humanos consiguieron localizarlo al día siguiente y convocaron a los medios de comunicación. La primera intención era acusarlo de terrorismo contra el Estado hondureño y encerrarlo en una prisión de máxima seguridad, pero la fiscal no fue capaz. No por él, sino por ella: según Nery Gómez, la fiscal dijo textualmente: “Este chico no puede ser procesado porque viene muy golpeado y me metería en un problema”. Fue puesto en libertad al cabo de 24 horas.

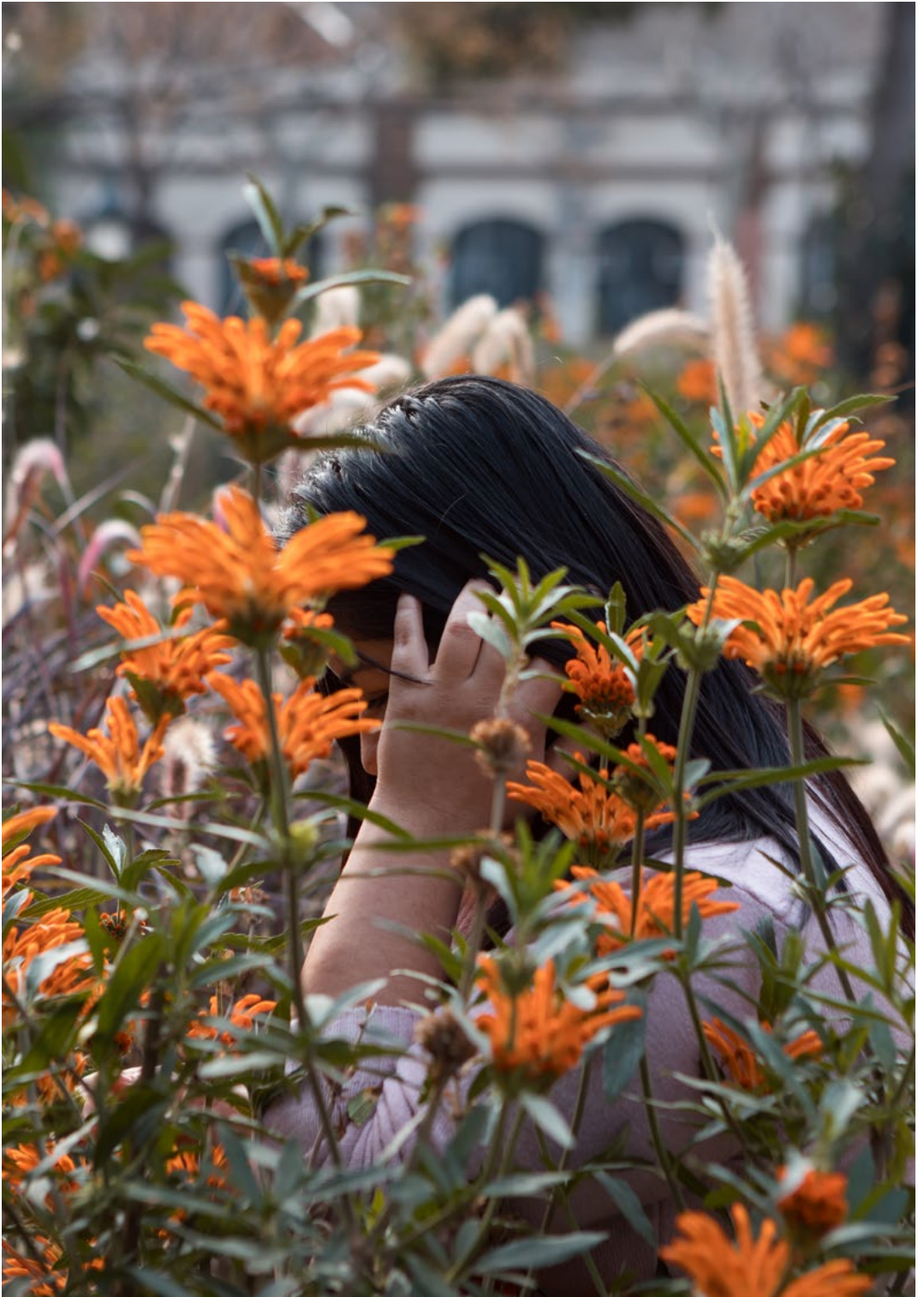
EXILIO O MUERTE

Pocos días después, el estudiante de química leía su propia muerte en las redes sociales. “Que yo me había colgado por la depresión que tenía”, explica el joven. “Ya había pasado con otro manifestante en Choluteca; la policía lo había colgado”, sigue. Gómez también arrastraba un estado psicológico alterado y su situación hizo saltar las alarmas; varios organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, los amigos y la familia, insistieron en que saliera inmediatamente del país. “Yo no quería marchar, yo quería seguir luchando con el movimiento, no podía dejar Honduras. Pero muchos amigos me dijeron que no me querían como mártir, que me querían vivo. Me lo pensé muchísimo, fue muy, muy difícil salir”. Esta vez, una de las personas claves para conseguir la salida del activista del movimiento estudiantil fue un periodista hondureño que estaba refugiado en el Estado español: Milthon Robles. El 20 de septiembre, a pesar de tener una alerta migratoria –“por suerte nuestro país es un caos, es nefasto y negligente”–, Nery Gómez consiguió coger un vuelo desde San Pedro Sula en dirección a Madrid.

HUIR PARA DEFENDER LA VIDA

El día en que María Flores sobrevivió a un intento de asesinato mientras salía de la comunidad de Guapinol sola en moto, lo primero que hizo fue llamar a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. “Me moría del miedo”, recuerda la lideresa. La Red de Defensoras es un espacio de fortalecimiento y articulación entre mujeres defensoras de diferentes organizaciones y movimientos sociales en ámbito nacional. México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras tienen su propia red, y otros países como Colombia la están construyendo. Todas forman

María Flores



parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, una plataforma que busca acompañar la tarea de mujeres que defienden la vida y el territorio desde la perspectiva de la protección integral feminista. Se creó en 2010 como respuesta al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en América Latina.

María Flores había conectado con la Red de Defensoras durante los días en que algunas de sus activistas fueron a acompañar el proceso de lucha contra el proyecto extractivista de minería que se estaba instalando en su territorio, la comunidad de Guapinol. Flores había participado en talleres, formaciones y círculos de sanación no mixtos con otras defensoras del territorio. Había encontrado en estos espacios el *acuerpamiento* que necesitaba. “*Acuerpamiento* es cuando te conviertes en parte de una familia que no lleva tu sangre, es cuidarnos, no dejar nadie atrás. *Acuerpar* es luchar la una por la otra, es lo de que ‘si nos tocan a una, nos tocan a todas’ en la práctica, como los nudos de la atarraya –red de pesca circular–, todas en un solo hilo. Es defender con el alma, con todo”, explica, inspirada, la lideresa.

LA INVASIÓN DEL EXTRACTIVISMO Y LA LÓGICA NEOLIBERAL

Hace solo un par de años Flores se concebía como una humilde habitante de Guapinol, una comunidad de 3.000 habitantes del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. “Teníamos una vida corriente, tranquila, en comunidad. Levantar-nos, dedicarnos a nuestros hijos, estar pendientes de la escuela y trabajar”. Era peluquera y estilista en un pequeño negocio y vivía con su familia en una caseta del casco urbano de una región principalmente agraria. A pesar de que todavía hay cierto



La invasión de la palma africana

Mientras existen cerca de 200.000 hectáreas de monocultivos de palma africana, en Honduras cada año se pierden entre 60.000 y 65.000 hectáreas de bosque a causa de los incendios forestales y la tala ilegal. Buena parte del territorio que había sido bosque y ahora es un extenso monocultivo de palma africana es propiedad de la Corporación Dinant, empresa de la poderosa familia Facussé, también propietaria de Inversiones Los Pinares.

Ana Facussé y Lenir Pérez son los propietarios de Inversiones Los Pinares, la multinacional con parte de accionariado radicado en los Estados Unidos que buscaba instalar este proyecto minero en el municipio de Tocoa. “Cambió de nombre porque ya arrastraba demandas y tenía que renovar la imagen”, asegura Flores. Antes se llamaba EMCO Mining Company y fue acusada de amenazas e intimidaciones para obligar campesinas del departamento de Atlántida a vender sus tierras. La intención de Pérez y Facussé en aquellas tierras era la misma: poner en marcha un proyecto minero de extracción de óxido de hierro. Pero la comunidad organizó la respuesta. En Guapinol, Inversiones Los Pinares tiene la concesión, sin previa consulta a la población y sin un estudio de impacto ambiental legítimo, de 200 hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, espacio que el Congreso Nacional declaró área protegida en 2012. Hecha la ley, hecha la trampa: a finales de 2013, cuando Pérez y Facussé pusieron la mirada en este territorio, el Congreso Nacional redujo la zona de reserva natural para entregar la concesión a la empresa de manera legal. Cuatro años después, sin previo aviso, Guapinol amanecía con la invasión sorpresa de Inversiones Los Pinares.

nivel de soberanía alimentaria, durante las últimas décadas en el departamento de Colón la vida productiva se ha visto hegemonizada por los monocultivos extensivos de palma africana en manos de terratenientes. La lógica extractivista, sin embargo, planeaba instalarse en todas sus formas. “El año 2017 empezamos a ver que pasaban aviones con hierros y material pesado hacia la montaña y nadie sabía qué era. El año pasado [2018], en abril, ya bajaba agua sucia por nuestro río”, recuerda con tristeza la hondureña. Su vida se transformó completamente en cuestión de pocos meses cuando supo que su territorio estaba a punto de convertirse en el escenario de una mina a cielo abierto para extraer óxido de hierro.

Ana Facussé y Lenir Pérez son los propietarios de Inversiones Los Pinares, la multinacional de accionariado principalmente estadounidense que buscaba instalar este proyecto minero en el municipio de Tocoa. “Cambió de nombre porque ya arrastraba demandas y tenía que renovar la imagen”, asegura Flores: pues la misma empresa antes se llamó EMCO Mining Company y fue acusada de perpetuar amenazas e intimidaciones para obligar a campesinas del departamento de Atlántida a vender sus tierras. La intención de Pérez y Facussé en aquel territorio era la misma: poner en marcha un proyecto minero de extracción de óxido de hierro. Pero la respuesta de la comunidad también lo fue: organizar el rechazo.

En Guapinol, Inversiones Los Pinares tiene la concesión, sin previa consulta a la población y sin un estudio de impacto ambiental legítimo, de 200 hectáreas que se encuentran dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, espacio que el Congreso Nacional declaró área protegida en 2012. Hecha la ley, hecha la trampa: a finales de 2013, cuando Pérez y Facussé pusieron la mirada en este territorio, el Congreso Nacional redujo la zona de reserva natural para entregar la concesión



El campamento organizado por la comunidad de Guapinol resistió durante tres meses, hasta que llegó el violento desalojo

La lucha contra la mina de óxido de hierro de Guapinol ha sufrido persecución y criminalización



a la empresa de manera legal. Cuatro años después, sin previo aviso, la población de Guapinol se encontraba con la invasión sorpresa.

TRABAJO DE CONCIENCIA COMUNITARIA

Entre vecinos y vecinas “empezamos a averiguar, a investigar, a buscar orientación. Éramos nuevos en esto de luchar”, explica Flores. Es por eso que pronto conectaron con los colectivos que ya hacían trabajo contra la lógica extractivista en la región y que resultaron ser grandes aliados: la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR). Bien pronto se constituyó el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Guapinol y empezaron “a hacer concentraciones y protestas y a pedir explicaciones a la municipalidad, que al final era la responsable de haber firmado la concesión”, explica Flores. El Comité exigía poder celebrar un cabildo abierto –espacio de participación política de ámbito local y abierto a todo el mundo; un mecanismo que, herencia de la colonización española, a menudo se mantiene como herramienta eficaz de poder popular en muchos países de América Latina– para declarar Tocoa municipio libre de minería. Este cabildo abierto se ha podido realizar y, efectivamente, ha logrado su objetivo dos años después, pero María Flores lo ha tenido que celebrar desde el otro lado del océano Atlántico.

Después de acampar ante la municipalidad durante once días sin conseguir un diálogo que tuviera en cuenta sus consideraciones, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Guapinol decidió trasladar su atención directamente hacia la actividad de la multinacional. “Bromeando, el mismo gobernador nos dijo: ‘Yo no puedo hacer nada, vayan y ocupen la carretera de la mina’”, explica Flores con una



Las manifestaciones estudiantiles en contra del fraude de 2017 fueron duramente reprimidas por la policía hondureña, provocando diversos muertos y heridos

sonrisa juguetona en los labios. Le hicieron caso. La madrugada del 1 de agosto de 2018 la comunidad instaló el Campamento por la Vida en un espacio estratégico que bloqueaba la carretera por donde normalmente entraban la maquinaria y las trabajadoras hacia la mina de Inversiones Los Pinares. “Lo que les dejamos claro a los trabajadores”, recuerda la lideresa, “fue que maquinaria no pasaría, que el pueblo se oponía, que no teníamos nada en contra de ellos, que estábamos en contra de la empresa y del gobierno”.

Cuando llega un proyecto productivo extractivista de la mano de una multinacional a una comunidad rural empobrecida, en primer lugar, siempre se buscan las estrategias para crear división interna entre las resistencias locales a la iniciativa. La primera de estas estrategias se construye sobre una base que el propio modelo social ya tiene instalada a través de la educación, los medios de comunicación y la cultura consumista de masas. Se trata de buscar una de las vulnerabilidades de la mayoría de comunidades: la lucha por la supervivencia. “Estos proyectos traen empleo para una cantidad de personas y, está claro, este es uno de los grandes problemas de nuestro país, que no hay empleo. La gente no vive, sino que sobrevive”, denuncia María Flores. A los ojos de gran parte de la población, el modelo de desarrollo llega con un paquete goloso: “Con estos proyectos muchos entran en la etapa de la ilusión; hay trabajo y lo pagan relativamente bien. Se les pinta un panorama muy bonito: la moto, la televisión, y se oculta la destrucción, la contaminación, todo aquello que a la larga sufrirá la población de Guapinol y de más allá”, explica la lideresa.

Las discrepancias con las trabajadoras fueron inevitables, pero aun así sumaron más las aliadas y siguieron adelante con la ocupación.

Gobierno español, Lenir Pérez y el aeropuerto de Palmerola

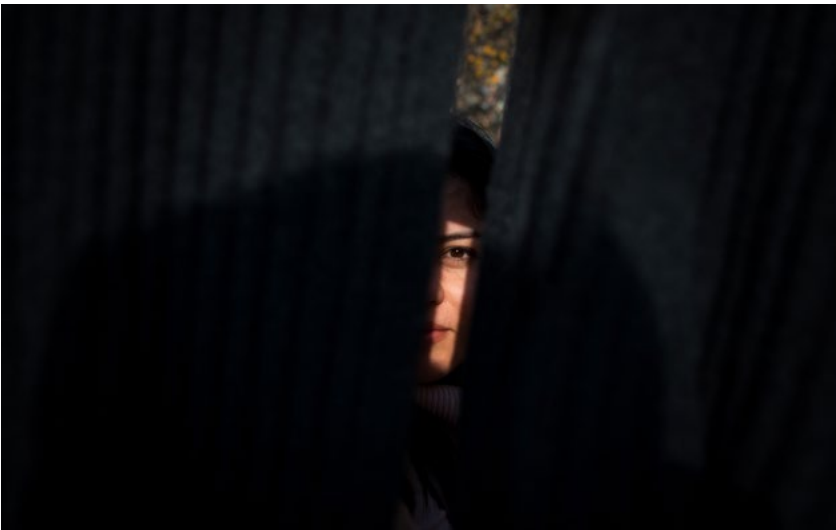
En 2016 Juan Orlando Hernández entregaba el contrato millonario para construir y operar durante treinta años el nuevo aeropuerto internacional de Palmerola de Tegucigalpa al Grupo Emco, empresa constructora de Lenir Pérez. Se trata de un aeropuerto que ha albergado, desde los años ochenta, la base militar de los Estados Unidos más grande de la América Central, donde permanecen siempre cerca de 600 soldados y que fue construida para apoyar a los gobiernos de la región durante la guerra contra las guerrillas comunistas de liberación nacional centroamericanas. Bien, de los 163 millones de dólares que la construcción del aeropuerto costará, 53 son una “aportación” del gobierno español a través del fondo de conversión de la deuda. Y una parte de esta aportación del Estado español acabará, de todos modos, en las arcas de una empresa española, CEMOSA S.A, con sede en Málaga, que trabaja en el diseño de la infraestructura.

Varias fuentes de esta investigación denuncian que investigar el accionariado, el capital y las transacciones de empresas como las de Facussé y Pérez es en una tarea complicada y peligrosa. El sistema de registro mercantil de Honduras es muy opaco, la información debe ser solicitada de manera personal y se convierte en una misión arriesgada, puesto que es obligatorio identificarse para acceder a ella.

“Nos quedamos allá y empezamos a recibir donaciones de alimentación; la gente ponía lo que tenía”, narra entusiasmada. La humilde peluquera fue agarrando fuerza, dejó muchas de las tareas individuales a un lado para dedicarse a esta misión colectiva. Gracias a la Red de Defensoras, “durante la época del campamento participé en talleres y fui adquiriendo conocimientos para poder luchar con la información necesaria”, explica Flores. Ella, y sobre todo mujeres de la comunidad, “lo que hacíamos era concienciar a la población, andar por las comunidades del sector montaña explicando los efectos que la minería nos llevaría: la destrucción masiva de árboles centenarios, de nuestras montañas, de nuestras cuencas, de nuestra madre tierra”. La emoción la llena entera cuando recuerda aquellos días. “Una empresa decidió proveer el campamento de agua potable. La gente era consciente de que estábamos en nuestro derecho, que teníamos toda la razón de estar allá”, asevera.

PERSECUCIÓN, REPRESIÓN Y MILITARIZACIÓN

La siguiente estrategia que la empresa y sus aliados aplicarán cuando la comunidad se fortalezca y no se deje doblar es la criminalización y la construcción en el imaginario colectivo de un enemigo interno. En general, empieza tildando a las organizaciones contrarias al proyecto extractivista y sus lideresas de opositoras o enemigas del desarrollo y del progreso de la comunidad. Más adelante llega el juego sucio. Cuando llevaban un par de semanas acampadas en la entrada de la mina de óxido de hierro, empezó una campaña de desprestigio contra los miembros del campamento: “Que las mujeres nos estábamos prostituyendo, que los hombres se estaban drogando”, explica Flores. La maniobra siguiente



suele ser el miedo. “Pronto empezaron las amenazas. La empresa contrató a una compañía de seguridad para intimidar a nuestra gente”. Y la siguiente, inminente, la judicialización.

En una confabulación total entre empresa privada, Estado hondureño y poder judicial, la primera lista de personas perseguidas legalmente señalaba a dieciocho miembros del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Guapinol sobre las cuales se aplicó una orden de búsqueda y captura por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado y daños a la propiedad privada y al Estado hondureño, entre otros. “En la lista había sobre todo líderes, algunos de COPA, uno de Cáritas, el coordinador del Comité, que era el más sabio de nosotros. Fue un proceso difícil, se tuvieron que desplazar dentro del país, ni nosotros sabíamos dónde estaban”, explica la lideresa. A medida que el eco social, político y mediático de la lucha de Guapinol ha crecido, la represión también lo ha hecho. Más adelante algunos de estos líderes han acabado, sin tener antecedentes penales, en prisiones de máxima seguridad.

El 27 de octubre de 2018, casi tres meses después de su inicio, aproximadamente mil efectivos de militares y policías efectuaron un brutal desalojo del Campamento por la Vida de la comunidad de Guapinol. “El juez ejecutor que intentó negociar para que saliéramos de una forma pacífica nos dio una hora para salir. No era suficiente”, recuerda todavía afectada María Flores. “Nosotros éramos unos 400, contra 1.000. Fue un desalojo muy violento, una bomba lacrimógena tras otra. Hay unas que pican, otras te ahogan, otras te ablandan el cuerpo. Tienen diferentes efectos”, sigue la lideresa.

Cuando la empresa y sus brazos en el interior del Estado vieron que a pesar del desalojo y la represión judicial la comunidad seguía saliendo a protestar, a cortar la carretera, y continuaba insistiendo en la celebración de un cabildo abierto, pasaron a la siguiente estrategia: la militarización. En cuestión de meses, la vida en Guapinol se había transformado por completo. “Antes era una lucha en el día a día, para salir adelante, pero sin amenazas, sin represión. Ha sido un cambio muy duro: de dejar que tus hijos fueran solos a cualquier lado dentro de la comunidad a verlo todo militarizado, que pasen coches desconocidos, que haya controles en la carretera”, se lamenta la lideresa. Y desde lo colectivo, donde reside siempre la mayor fuerza, la persecución en seguida fue dirigida de forma afilada hacia lo individual.

EL CALLEJÓN SIN SALIDA

“Empecé a recibir llamadas”, relata Flores. “Llamadas que se cortaban, después me decían que querían hablar conmigo. Sentíamos el ojo sobre nosotros. Sabían todo lo que hacíamos, ya empezamos a sentir miedo”. Los intereses privados siguieron con la enésima estrategia de desarti-

culación de la organización (que afortunadamente pocas veces funciona): la compra de sus lideresas. “Un día se me acercó un trabajador de la empresa y me dijo que cuál era mi precio, que cuántos ceros necesitaba para ‘dejar esta mierda’, me lo dijo así. Me querían sobornar, comprarme, querían que yo convenciera a mi gente de abandonar la lucha, que yo dijera que estos proyectos traen desarrollo”. Pero con María Flores no funcionó. “Le dije que yo en ningún momento traicionaría a mi gente porque era mi río, era mi comunidad”, asegura; una respuesta que, seguro, inquietó más a la empresa de Lenir Pérez y Ana Facussé.

“Estorba tu vida”. Este fue el siguiente mensaje que la lideresa de Guapinol escuchó a través del teléfono. Ya se había visto obligada a activar su propio protocolo de seguridad –cambiar sus rutas habituales, intentar no ir sola– cuando, pocos días después de aquella llamada, “me intentaron sacar de la carretera pavimentada cuando iba en la moto. Ya me seguían. Entonces intentaron que perdiera el equilibrio de la moto, pero gracias a Dios no pasó nada. Querían que pareciera un accidente”. En aquel momento la lideresa comunitaria ya no vio ninguna salida. “Tenía mucho miedo... Yo no le conté nada a mi padre ni a mi pareja. Yo me moría sola. Cuando se lo conté todo bien a las de Red, ellas me dijeron: ‘No salgas de casa’. Ya no contestaba llamadas desconocidas e intentaba conversar muy poco, lo más básico”. La Red dio la alerta. En Tegucigalpa otra lideresa hondureña que, a pesar de ser víctima de amenazas y persecución, sigue en su territorio y de quien por lo tanto es necesario guardar el anonimato, gestionó, gracias a toda una red de colectivos de mujeres conectadas entre sí, los recursos económicos y humanos para garantizar la salida del país de María Flores. Uno de estos colectivos fue el Fondo de Mujeres Calala, que ayudó a financiar el billete de avión hasta Madrid. Flores, emocionada, confiesa, “yo ni sé exactamente cómo lo hicieron, pero lo hicieron todo para sacarme a tiempo”. Poco después “empezó la matanza, asesinaron a líderes en todo el país”. “Estamos luchando contra un monstruo muy grande. Y el pueblo está solo”, asegura la lideresa comunitaria.

Para saber más

Documental *Pandillas: el origen del odio*, d'El Faro

<http://ves.cat/erDt>

Informe *La defensa de la diversidad sexual y los derechos humanos en Honduras*, de Voces

Defensoras

<http://ves.cat/erDu>

Vídeo: Detención de Nery Gómez (Teleceiba Internacional)

<http://ves.cat/erDv>

Informe del Observatorio de Bienes Naturales y los Derechos Humanos 2017 (CEPRODEH)

<http://ves.cat/erDw>

Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)

<http://ves.cat/erDx>

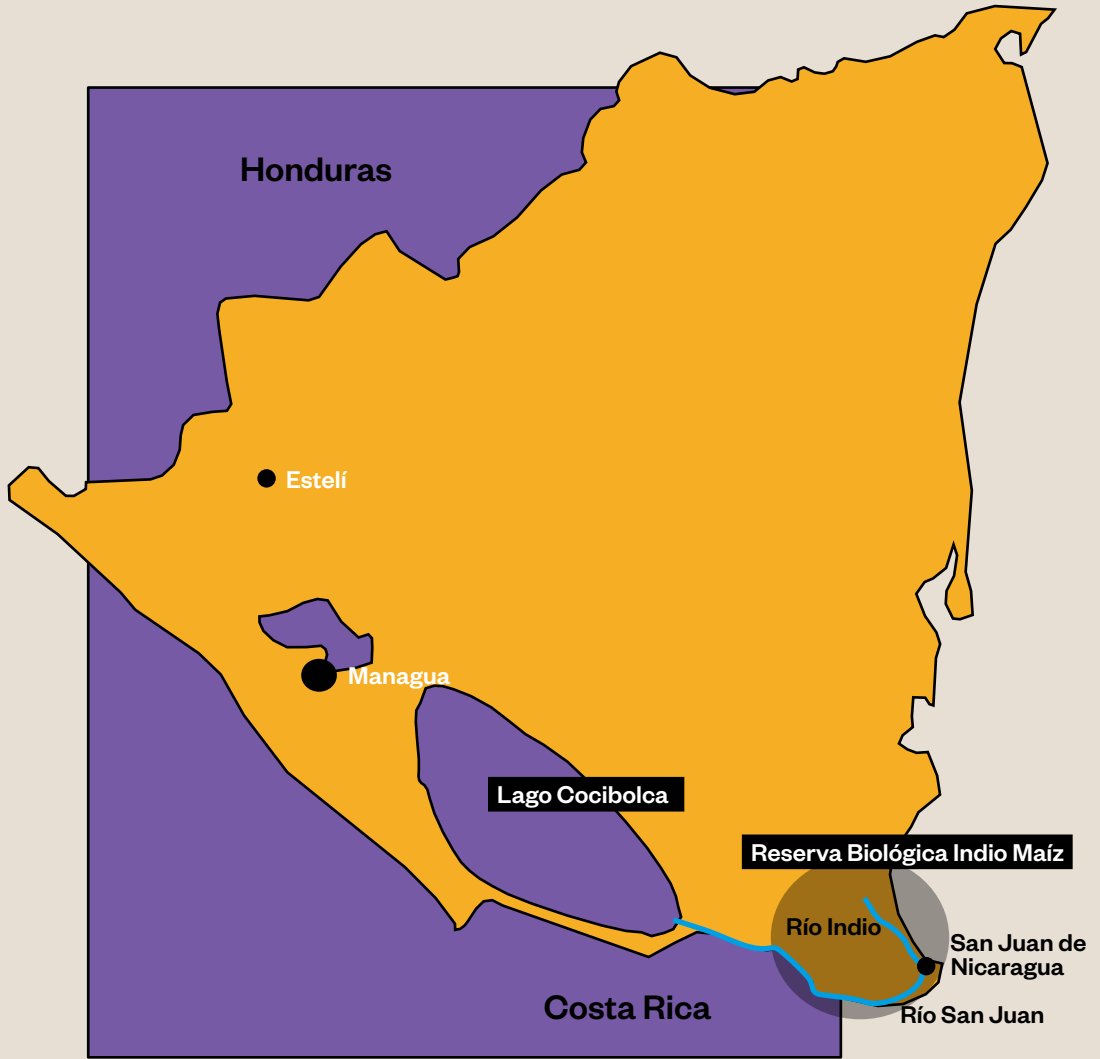
Criminalización y judicialización de líderes de Guapinol por oponerse a la minería

<http://ves.cat/erDy>

Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos de Honduras

<http://ves.cat/erDz>

Nicaragua



2007

Daniel Ortega es investido presidente y recupera el cargo que había perdido en 1990

2011

Nueva victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y nuevo mandato presidencial de Daniel Ortega

6,4 MILLONES DE HABITANTES



650.000

nicaragüenses se han ido
de su país desde 1995



87%

de las nicaragüenses migradas se reparten entre
Costa Rica y los Estados Unidos



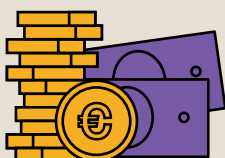
11

conflictos socioambientales
según el Atlas de Justicia Ambiental



3%

de las nicaragüenses han migrado al Estado
español, que es el tercer país receptor



78 M€

de inversión de las empresas españolas
en Nicaragua entre 2013 y 2018



46,2*

Coefficiente de Gini: Nicaragua ocupa el puesto
número 31 con más desigualdad social

2013

Presentación del
proyecto de canal
interoceánico e inicio del
ciclo de movilizaciones
campesinas

2016

Aprobación de la
ley de asociación
público-privada
para la provisión de
infraestructuras y
servicios públicos

2017

Inicio del
tercer
mandato
consecutivo
de Daniel
Ortega

2018

Inicio de las
revueltas
de abril

*0 sería la perfecta igualdad y 100 la máxima desigualdad

La revuelta de abril de 2018 dejó un saldo de 325 personas muertas, 2.000 heridas y 800 encarceladas. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cruda represión del gobierno Ortega-Murillo provocó el éxodo de más de 70.000 personas. A finales de 2019, la vecina Costa Rica informaba que 55.000 nicaragüenses habían solicitado asilo en su territorio. En el Estado español, 1.365 personas llegadas desde Nicaragua solicitaron protección en 2018. Solo en cinco casos se ha obtenido una respuesta favorable; el resto siguen pendientes de resolución.

El martes 3 de abril de 2018, líderes comunales rama y kriol alertaban a la organización ambientalista Fundación del Río de la existencia de un incendio a cuatro kilómetros del municipio de San Juan de Nicaragua. El fuego había empezado en la ribera del río Indio dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan y, empujado por el viento, avanzaba hacia el núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Situada en el sureste de Nicaragua, y con una extensión que supera los 2.500 km², Indio Maíz está considerada como una de las zonas de bosque tropical húmedo más importantes de Centroamérica y forma parte de la Reserva de la Biosfera Río San Juan. Según Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y actualmente solicitante de asilo en la vecina Costa Rica, los técnicos de la organización “pudimos comprobar a través de imágenes satelitales la existencia de cuatro focos de calor en la zona señalada, y enseguida hicimos un llamado a las autoridades gubernamentales nicaragüenses pidiendo una actuación inmediata”.

Las comunidades indígenas y los ambientalistas sospechaban que el incendio había sido provocado por una quema ilegal de terrenos para ampliar superficie de cultivo, un hecho que se confirmaría pocas horas después. El 70% de la Reserva Biológica Indio Maíz forma parte del territorio ancestral de los pueblos rama y kriol, y a lo largo de los últimos años sus gobiernos comunales han presentado múltiples denuncias sobre la invasión de tierras protagonizada por colonos y la explotación de los recursos naturales protegidos. Pero sus reclamaciones nunca han sido atendidas y los asentamientos ilegales alrededor del perímetro de la reserva han seguido proliferando gracias a la complicidad de ayuntamientos, iglesias evangélicas y mafias dedicadas a la venta de tierras.

UN TESORO A CONQUISTAR

La ubicación geográfica de Nicaragua, sus recursos naturales y la idea de que su territorio podría servir como vía de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico han alimentado y alimentan las ambiciones de las potencias imperiales, y también de sus propios gobiernos. Un interés geopolítico que ha marcado el destino del país y también la historia del pequeño municipio de San Juan de Nicaragua, situado junto a la desembocadura del río San Juan.

En 1538 llegaron hasta este enclave las embarcaciones de la expedición ordenada por el gobernador de Nicaragua Rodrigo de Contreras, que partiendo del gran lago Cocibolca habían seguido el curso del río San Juan hasta el océano Atlántico. A finales del siglo XVIII, y todavía bajo dominio colonial español, San Juan se convirtió en un importante puerto comercial hasta que los miskitos sambu, conchabados con Gran Bretaña, ocuparon la boca del río y bloquearon el paso de las embarca-

ciones que llegaban a la bahía. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña ya había invadido militarmente buena parte de la costa atlántica y pretendía convertir San Juan en la puerta de entrada del anhelado canal interoceánico. Pero el proyecto acabaría siendo abandonado, y a finales del siglo XIX el presidente de Nicaragua Santos Zelaya reincorporaba la costa atlántica al territorio nacional nicaragüense. Durante la larga dictadura dinástica de los Somoza, que se extendió entre 1937 y 1979, el sueño del canal no desapareció y Nicaragua solicitó a los Estados Unidos –reiteradamente y sin éxito– financiación para canalizar el río San Juan.

En los años ochenta del siglo XX, el municipio de San Juan –territorio en permanente disputa– sufrió con intensidad los efectos de los enfrentamientos entre el nuevo gobierno revolucionario sandinista y uno de los diversos grupos armados que formaban la Contra financiada por los Estados Unidos. En 1984 el pueblo fue atacado y ocupado por la guerrilla antisandinista Alianza Democrática Revolucionaria (ARDE), liderada por el antiguo comandante y miembro de la dirección del FSLN Edén Pastora. La mayoría de los habitantes de San Juan acabaron huyendo a Costa Rica y el actual núcleo fue reconstruido, a partir del año 1990, con 30 familias repatriadas y 20 desmovilizados de guerra.

LA FUNDACIÓN DEL RÍO

El acuerdo de paz de Sapoá, firmado por el gobierno sandinista y la contra en 1988, suponía el fin de una guerra que había causado 50.000 muertos y abría la puerta a la celebración de unas nuevas elecciones que darían la presidencia a Violeta Chamorro, la líder de la coalición Unión Nacional Opositora. En ese contexto, relata Amaru Ruiz, “muchos de los



Los gobiernos comunales de los pueblos rama y kriol hace años que denuncian la venta ilegal de tierras que forman parte de la Reserva Biológica Indio Maíz

En Managua, Matagalpa y León, las estudiantes salieron a la calle para protestar por la inacción del gobierno ante el incendio de la reserva de Indio Maíz



líderes revolucionarios pasaron a jugar un rol en otros ámbitos. Había un compromiso por construir un proceso democrático institucional en el país y algunos sectores del sandinismo –un movimiento que nunca había sido monolítico e integraba diferentes corrientes y sensibilidades– consideraban que eso se debía construir desde la sociedad civil y no desde un partido político”.

En 1990 se constituyó la Fundación del Río y la entidad estableció su sede en la ciudad de San Carlos, capital del departamento de Río San Juan. La fundación, explica su presidente, nace como una “organización ambientalista creada por personas que habían sido parte del proceso revolucionario de los ochenta y que en ese momento ya identificaron la importancia de la protección y la conservación de los recursos naturales del sureste de Nicaragua”.

“En los últimos años la fundación ha trabajado principalmente en el acompañamiento de comunidades indígenas y campesinas –con el objetivo de fomentar la protección de la zona de amortiguamiento y de la reserva– y en el tema de la comunicación y la educación ambiental a través de dos radios comunitarias: Radio Voz Juvenil y Radio Humedales. Esta última, creada en 2014 gracias a la colaboración con el municipio catalán de Sant Boi de Llobregat”.

Paralelamente la fundación también ha desarrollado “una línea de incidencia política vinculada, sobretudo, a los temas ambientales y sociales del sureste nicaragüense. Una tarea que se ha mantenido a través de los gobiernos de distinto signo y que nos llevó, en 2013, a oponernos al proyecto de canal interoceánico bendecido por el presidente Daniel Ortega”.

UN PROYECTO ZOMBI

El encargado de presentar y defender el proyecto de canal, resucitado en 2013, fue un incombustible Edén Pastora, que había sido nombrado delegado presidencial para el Río San Juan por Daniel Ortega. En distintas apariciones en los medios de comunicación, el viejo comandante del FSLN afirmó que la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua permitiría “acabar con la pobreza” y “cambiar la economía del mundo”.

Pero las promesas no convencieron a los ambientalistas de la Fundación del Río y “junto con el Grupo Cocibolca –donde estamos integradas varias organizaciones– empezamos a hacer estudios, a evidenciar por qué el proyecto no era viable y a denunciar todas las arbitrariedades, ilegalidades y su carácter anticonstitucional. Protestamos por la opacidad de la concesión –que suponía una entrega de la soberanía del país a la empresa concesionaria–, por el tema del sigilo bancario... Denunciábamos que se pretendía poner nuestros recursos estatales al servicio de un proyecto y de una empresa privada de origen y capital chino”, explica Ruiz. Y continúa: “Nosotros nos dedicamos –junto con el resto de las organizaciones– a llevar la información sobre el proyecto del canal a la población campesina, y eso produjo una preocupación en las comunidades al darse cuenta de que no habían sido debidamente informadas por el Estado nicaragüense. Las protestas empiezan en el año 2013 y se inicia un ciclo de movilizaciones que se alargará hasta el 2016. A raíz de eso se cortaron las acciones conjuntas de preservación ambiental que realizábamos con distintas instituciones del Estado y empezó una política de querernos callar por parte del gobierno. Desde ese momento el escenario se fue complicando para organizaciones de la sociedad civil como la nuestra”.

EL DESPERTAR DE LA SOLIDARIDAD

Tal y como explica Amaru Ruiz, cuando en abril de 2018 las comunidades originarias y las activistas ambientalistas hicieron público su temor a que el incendio originado en San Juan de Nicaragua afectara fatalmente la reserva Indio Maíz, “el llamado no fue atendido, más bien fue ignorado por las autoridades del gobierno central. Eso generó indignación entre la gente. Nosotros lanzamos la alerta por redes sociales, hablamos con los medios de comunicación y lo que no nos esperábamos es que iba a surgir una amplia respuesta en otras partes del país. En Managua, en Matagalpa, en León y en otros lugares, los estudiantes salieron a la calle a decir a su gobierno que atendiera la situación”.

Para Ruiz, la respuesta popular se explica porque “el modelo extractivista, corporativista y clientelar que se imponía en Nicaragua ya

En la ciudad nicaragüense de Estelí, siete jóvenes fueron asesinados por paramilitares y miembros de los cuerpos de seguridad del estado durante las protestas de abril y mayo de 2018



había generado mucho descontento a nivel rural. No era solo el tema del canal, estaban las concesiones mineras –como el proyecto de Rancho Grande, una mina de oro a cielo abierto de más de mil hectáreas– o el megaproyecto hidroeléctrico de represas Tumarín. La deforestación, por poner otro ejemplo, llegó hasta las 135.000 hectáreas anuales. El gobierno de Ortega también permitió la entrada de transgénicos al país y aumentó el volumen de plaguicidas e insecticidas comercializados. Todo eso sin olvidar los procesos de acaparamiento de tierras producidos por empresas privadas con el apoyo y las concesiones entregadas por el ejecutivo”.

Según Ruiz, “en 2007, con la vuelta al poder de Daniel Ortega, mucha gente pensó que los procesos de privatización iniciados por los gobiernos neoliberales se iban a revertir, pero eso no sucedió. Sobretudo a partir de su segundo mandato, el gobierno estableció un modelo de diálogo y consenso solo con la élite empresarial del país y desatendió el diálogo con otros sectores de la sociedad. Lo vimos en la concesión del Canal pero también en la ley de asociación público-privada aprobada para captar más inversión extranjera. Esos intereses económicos estaban trastocando todo el marco jurídico y el equilibrio ambiental del país y la gente se daba cuenta”.

CONTRA EL PATRIARCADO

Entre las estudiantes que se sumaron a las protestas por la inacción del gobierno frente al incendio de la Reserva Indio Maíz estaba Castillo, que en aquel momento cursaba el último año de la carrera de Psicología en la sede de Estelí de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. “Yo comencé a hacer activismo a los 14 años en espacios creados para

propiciar la participación juvenil, y sentía que cuando llegaba a mi casa todos los talleres y las charlas que recibía se difuminaban. Sentía que esos derechos de los que me hablaban –derecho a la alimentación, a una buena educación, a vivir sin violencia, a la recreación...– estaban siendo vulnerados en mi familia y eso me generaba mucha indignación. Decidí oponerme a ese modelo patriarcal que se estaba perpetuando en mi casa pero que también estaba presente en el barrio, en la escuela, en la iglesia...”.

En este contexto, la estudiante nicaragüense –que hoy vive exiliada en Cataluña– explica que empezó “a identificar las diferentes situaciones y dinámicas de violencia machista que se reproducían en mi familia y, finalmente, logré visibilizar una situación de abuso sexual de mi padrastro hacia mi prima, que era solo una niña. Mi castigo fue la expulsión total de la familia”.

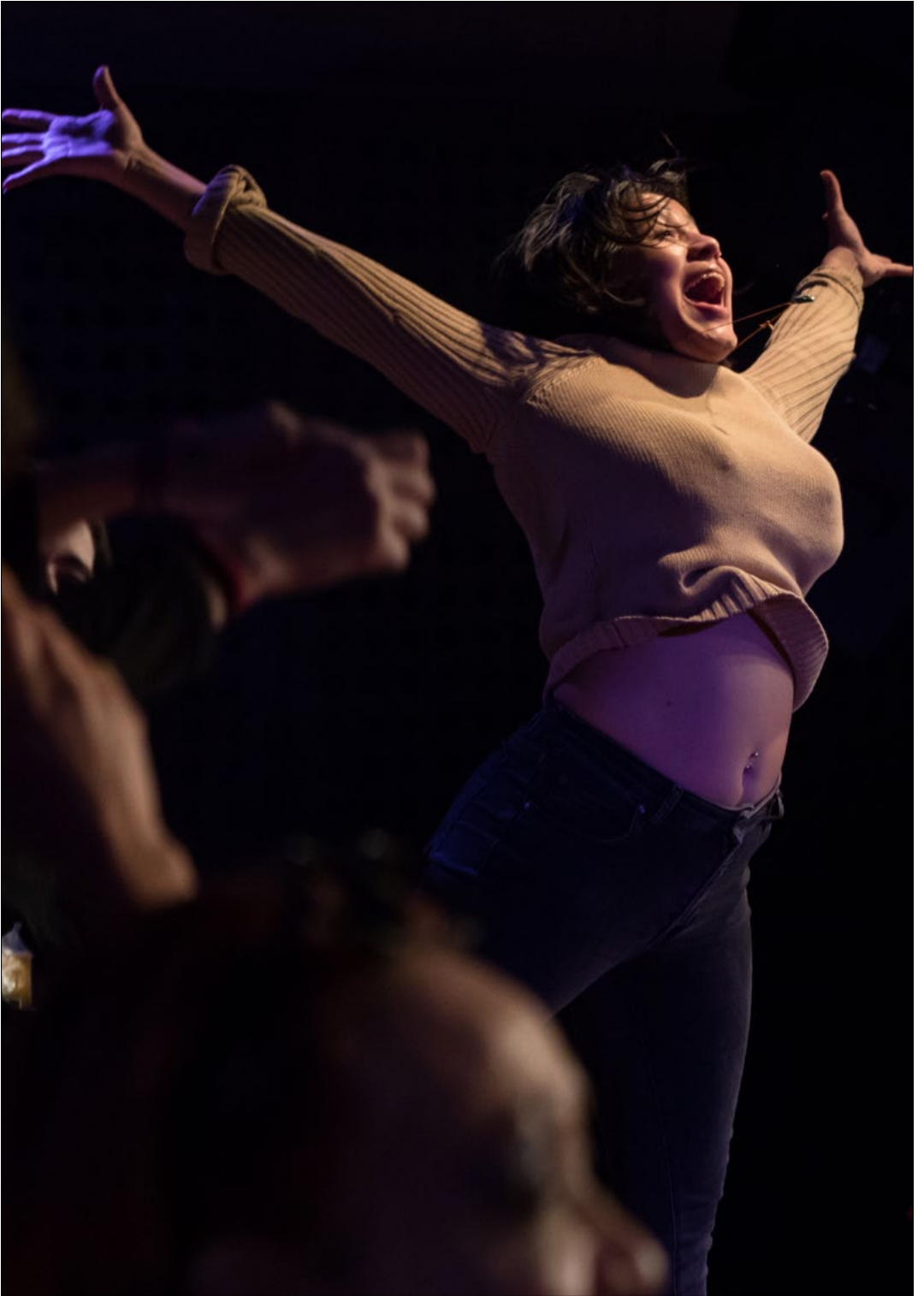
“Por eso –relata Castillo– yo empecé por mi cuenta cuando todavía era menor de edad. Estaba en un momento importante de mi vida. Yo quería estudiar y me decidí por la psicología porque quería acompañar a las mujeres víctimas de violencia sexual y a las mujeres víctimas de violencia de género. Paralelamente, como sobreviviente, empiezo a involucrarme en el movimiento feminista de Nicaragua. Me acompañan mi hermana mayor y una vecina, que era como nuestra hermana de corazón. Nos íbamos en autoestop a Managua para participar en las charlas, talleres y campañas que estaba realizando el movimiento en la capital, y luego regresábamos a los espacios feministas que había en nuestra ciudad para reproducir esos conocimientos. En esa etapa crecí un montón y aprendí muchísimo”.

Castillo

“Con el proyecto de la revolución sandinista las mujeres esperaban un cambio de todo este modelo patriarcal, pero en realidad, después de la revolución, a muchas de las que habían participado en la guerrilla se las relegó a un segundo plano. Las demandas de esas mujeres también fueron relegadas. Con el discurso de unidad, las luchas de las mujeres se desvanecen, y entonces todo lo que tiene que ver con la violencia que sufrimos directamente sobre nuestros cuerpos parece que a *la política* no le importa. Mis compañeras veteranas me explicaron cómo el modelo del *nuevo hombre* de Nicaragua y ese discurso macho de *Patria libre o morir* finalmente lo que hizo fue arrancar a muchos hombres y muchos niños de su casa para ir a una guerra y dejar todos los cuidados a los hombros de las mujeres”, concluye Castillo.

ASEDIO AL FEMINISMO

“Yo había estudiado en el Movimiento de Teatro Popular Sin Fronteras que tiene su origen en la revolución sandinista. Esa experiencia me cambió la vida porque no partíamos del teatro clásico sino de personajes populares que teníamos en nuestras localidades; no era una pieza creada



Violencias contra las mujeres

En Nicaragua, según datos de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir, entre enero y setiembre de 2019 el macabro balance de la violencia de género fue de 46 mujeres asesinadas y 52 menores huérfanos. El gobierno nicaragüense, que solo reconoce como víctimas de la violencia machista a las mujeres que son asesinadas por sus parejas, reduce la cifra de este mismo periodo a 17 casos. A criterio de la vicepresidenta Rosario Murillo, la principal causa de los feminicidios fue “la discordia entre parejas”.

La naturalización de la violencia sexual es otra de las grandes lacras de un país donde, tal y como recoge el anuario del Instituto de Medicina Legal, casi 1.700 niñas de hasta 12 años y 1.650 de entre 13 y 17 fueron abusadas sexualmente en 2018. De todos estos casos, el 46% tuvo lugar dentro del hogar de la víctima y el 53% de los abusadores fueron miembros de la familia u hombres próximos a la misma.

que nos aprendíamos sino que se basaba en nuestras vivencias y eso a mí se me quedó. Sin embargo, el machismo y la misoginia seguían estando ahí y yo estaba cansada porque en algunos de los espacios en los que participaba me daba cuenta de que mi palabra no valía igual que la del resto de mis compañeros. Cuando queríamos hablar de las violencias específicas que sufrimos las mujeres, se burlaban de nosotras y nos callaban. Pero yo no había salido de mi casa para que un hombre me volviera a callar”.

“Entonces, a través del movimiento feminista, llegaron a Nicaragua unas cabareteras mexicanas que trabajan bajo el enfoque de la justicia social y que vinieron para dar unos talleres. Gracias a esa experiencia, junto con otras compañeras decidimos crear un colectivo de teatro solamente para mujeres que funcionaba como un espacio de seguridad, y empezamos a organizar talleres, charlas, conversatorios, peñas culturales y presentaciones de teatro”. Según Castillo, “lo importante de este

tipo de teatro es que, a través del humor, permite cuestionar a quién ejerce la opresión. Los personajes que se construyen son poderosos y no revictimizan, no se burlan de las víctimas. Le damos mucha relevancia a la resiliencia porque, aunque sufrimos violencia, sobrevivimos a ella y resistimos, y eso no nos lo puede quitar nadie”.

“La metodología con la que nosotras trabajábamos era, primero, compartir nuestras experiencias y, luego, iniciar un proceso creativo colectivo que acabábamos presentando en diferentes espacios. Esa herramienta nos permitió estar en lugares muy formales, como la academia, pero también estar en la calle, en los barrios, en las cafeterías y en las comunidades. Lo que más nos encantaba era ir a las comunidades rurales porque precisamente ahí las mujeres no tienen ningún otro espacio más que la casa y el campo. Algunas personas nunca habían visto una obra de teatro. Esa experiencia era muy intensa, prácticamente estábamos las 24 horas de los 7 días de la semana dedicadas a esa tarea”.

Con el tiempo y gracias al trabajo realizado, el grupo de teatro se convirtió en “un espacio de referencia para las mujeres jóvenes de Estelí porque ni en su casa, ni en la escuela ni en ningún lado tenían la oportunidad de hablar de acoso sexual callejero, de abusos sexuales o de educación sexual y reproductiva”, explica Castillo.

La actividad del grupo no paraba de crecer y decidieron buscar un local que proporcionara estabilidad al proyecto: “En Estelí había un espacio de la municipalidad que estaba abandonado y nosotras queríamos utilizarlo. Un decreto de la alcaldía decía que ese espacio estaba abierto a cualquier grupo juvenil que quisiera ocuparlo y lo solicitamos. Empezamos a trabajar desde ahí, pero cuando se dan cuenta de que además de hacer teatro somos feministas, el alcalde automáticamente lo manda cerrar con nuestras cosas dentro”.



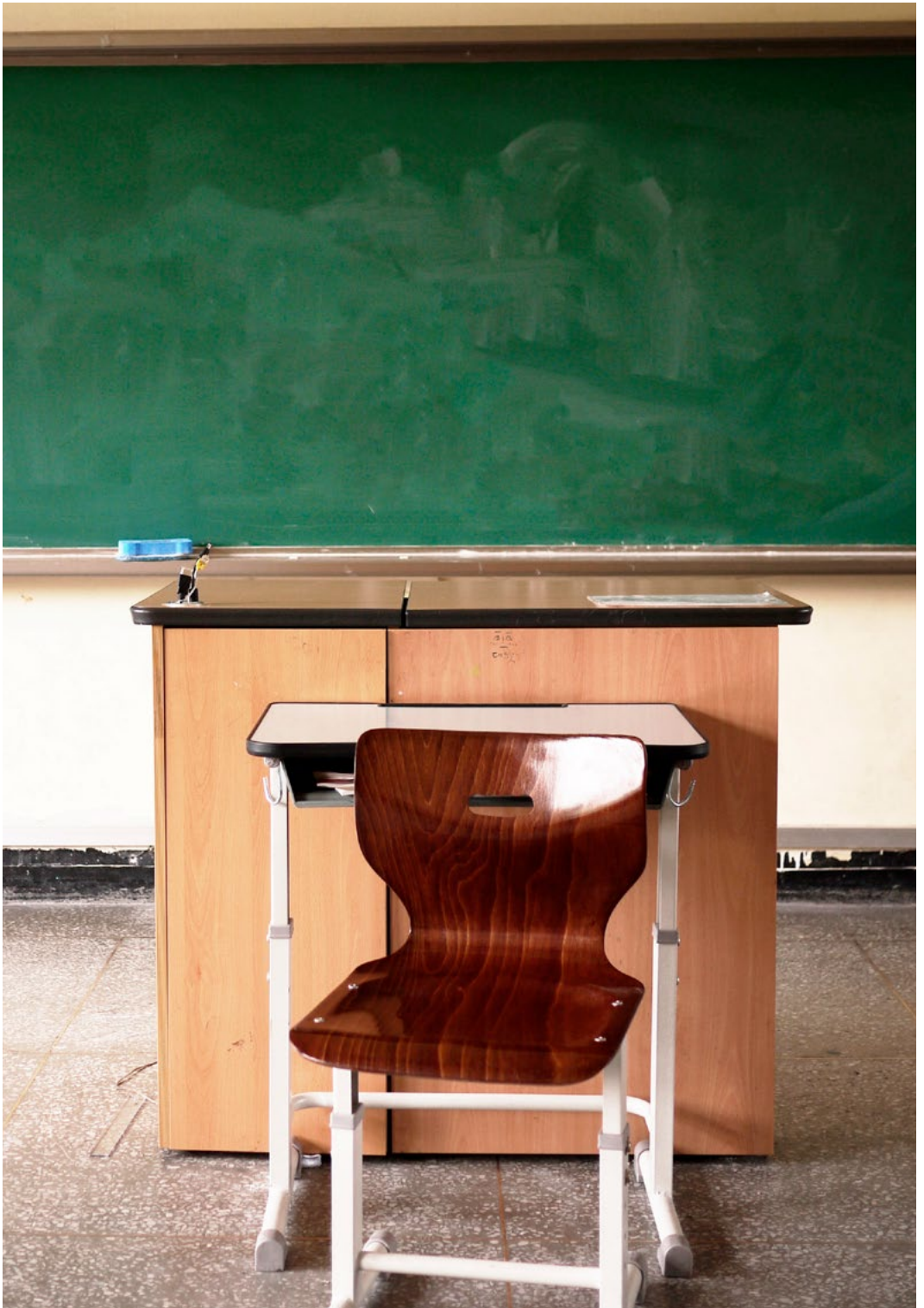
“A partir de ahí, ante cualquier nuevo intento que hacemos, nuestras actividades son anuladas, censuradas. Incluso se nos identificaba: dónde estudiábamos, dónde vivíamos, qué estábamos haciendo. Eso pasaba con todo el movimiento feminista porque precisamente es un movimiento que – pese a las amenazas, la persecución y la represión– siempre ha cuestionado y visibilizado las graves vulneraciones que se cometen en Nicaragua contra las mujeres y los cuerpos feminizados. Nosotras nos intentábamos reunir y siempre había criminalización. Por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo o del Día Internacional contra la Violencia de Género pasaban sus cordones de policías para que desde las otras ciudades las marchas feministas no pudiéramos llegar a la capital. A nosotras, que éramos un grupo pequeño, nos hacían eso, pero a las organizaciones grandes les querían controlar la cooperación, les cerraban las oficinas, les robaban los equipos... Y todo eso antes de la crisis de abril de 2018...”

EL ESTALLIDO DE LA INDIGNACIÓN

Cuando todavía humeaban las brasas del incendio de Indio Maíz, apagado finalmente gracias a unas intensas y providenciales lluvias, el gobierno Ortega-Murillo anunció una reforma del sistema de Seguridad Social. Las medidas, aprobadas por decreto el 18 de abril de 2018, suponían el aumento progresivo de las contribuciones de plantillas y empresariado y el establecimiento de una retención del 5% de las pensiones. El anuncio consiguió provocar el descontento tanto de las patronales empresariales como de las personas jubiladas, y ese mismo día tuvieron lugar las primeras protestas contra la reforma. Por la mañana, en la ciudad de León, una pequeña concentración frente a las oficinas locales del Instituto de la Seguridad Social sufrió insultos e intimidaciones de varias personas que las manifestantes identificaron como funcionarias públicas y miembros de la Juventud Sandinista. Un episodio similar pero bastante más violento tenía lugar poco después en Managua, donde las cerca de 200 personas que protestaban frente al centro comercial Camino de Oriente fueron agredidas a pedradas y con barras de hierro por un grupo de motoristas partidarios del gobierno. Enseguida las imágenes de los heridos –entre los cuales había varios periodistas– empezaron a correr como la pólvora por las redes sociales.

*José Miguel
Gómez*

José Miguel Gómez, estudiante de Comunicación de la Universidad Centroamericana de Managua –y actualmente solicitante de asilo en el Estado español–, explica que “me llegó un vídeo de una señora con la cabeza rajada y me indigné. Los del movimiento motorista pegaban a la gente y la policía no actuaba. Había muchas personas mayores y tam-



Los mensajes del gobierno Ortega-Murillo

El 20 de abril, al día siguiente de los primeros muertos en las protestas, la vicepresidenta Rosario Murillo atribuía las movilizaciones a “agendas políticas de personas que celebran la ruptura de la paz en Nicaragua” y que promueven el vandalismo y la destrucción. Murillo defendía que el gobierno había “actuado con responsabilidad y seriedad, anteponiendo el interés de la Nación, del País y del Pueblo nicaragüense”.

El 21 de abril, el presidente Daniel Ortega explicaba la presencia de jóvenes en la calle porque, “con una buena manipulación de las redes, claro, les tocan el sentimiento y entonces van a protestar”. El presidente alertaba de la participación en las protestas de “miembros de pandillas” capaces de “matar a la misma madre” que estaban en un estado de “enloquecimiento criminal”. Para él, “el objetivo de los que están dirigiendo estos planes criminales es destruir la imagen de Nicaragua”, “sembrar el odio” y frenar el turismo y las inversiones.



Desde el estallido de la revuelta de 2018, el gobierno Ortega-Murillo acusó a los estudiantes movilizados de formar parte de “una fuerza diabólica” que pretendía “acabar con la paz” en Nicaragua

Mientras Ortega se mantenía en un segundo plano, Murillo aprovechó sus espacios de comparecencia diaria en los medios de comunicación para seguir retorciendo un discurso que llegaría al paroxismo el día 16 de julio, dos días después del violento desalojo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua que acabó con dos estudiantes muertos. Para la vicepresidenta, estaba claro que “los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua. ¡Nicaragua es cristiana, socialista y solidaria! ¡Nicaragua es para la obra de Dios! ¡La descendencia de los impíos será destruida! Guardamos el camino de Jehová y Él nos exaltará para heredar la Tierra; cuando sean destruidos los impíos, lo veremos”.

bién medios de comunicación. Un fotógrafo que había trabajado conmigo salió golpeado y le robaron la cámara”.

“La noticia de las agresiones se viraliza y en mi universidad, la UCA, sentimos que tenemos que hacer algo y se convoca un plantón en la puerta. En ese momento la movilización se organiza a través de las redes sociales y sobretodo por grupos de WhatsApp. Era todo horizontal. Salía la necesidad de montar algo y se hacía”. Antes de la revuelta de abril, José Miguel no se había involucrado nunca en ninguna protesta. “Mis padres siempre fueron del Frente Sandinista. Ellos vivieron la época de la revolución y mi padre estuvo como militante y tuvo que ir a las montañas y todo eso. Eran muy partidistas y alababan mucho el movimiento que sacó al país de la antigua dictadura de los Somoza. Además yo tenía amigos que pertenecían a la Juventud Sandinista. Algunos me invitaban a participar y me decían que estaba muy bien. Yo nunca lo hice pero me codeaba mucho con ellos. Al principio hacían actividades de carácter social, iban a los barrios más pobres, repartían las canastas básicas, daban ropa... Era un movimiento atractivo, pero ya luego se va viendo que tenías que ser partidario sí o sí, que tenías que participar en todos los eventos del gobierno, que no podías criticar al presidente...”, continúa.

“El 18 de abril, a eso de las seis de la noche, yo estaba en clase. Quería ir al plantón pero no podía porque estaba en el final de cuatrimestre y tenía muchas cosas pendientes. Fuera se escuchaba música y los pitos de

los coches que no se podían mover. Entonces llegó la policía y también los chicos de la Juventud Sandinista. Mis compañeros estaban protestando en la puerta de la universidad y los de la Juventud al otro lado de la calle. Pero la cosa es que no era una contraprotesta pacífica –que es totalmente válida– sino que comenzaron a tirar piedras y, en un momento dado, cruzaron la calle para pegar a los estudiantes. Ahí la gente entró a la universidad corriendo para protegerse y los de seguridad cerraron la puerta dejando a algunas personas afuera. Entonces la protesta se movió a una rotonda y ahí sí comenzaron las palizas. A un buen amigo lo golpearon y le robaron el ordenador y el disco duro donde guardaba el proyecto que estábamos haciendo juntos y que perdimos”, relata José Miguel.

Aquella tarde, viendo la evolución de los acontecimientos, la dirección de la Universidad Centroamericana decidió cancelar todas las clases. Dentro de la universidad, explica Gómez, “había un ambiente de caos, se escuchaban ruidos como de morteros y mucha gente entró en pánico porque no sabía cómo salir de ahí. Yo tuve la suerte de que tenía coche y lo que hice fue sacar a mis amigos hasta donde pudieran coger autobuses. Fue un momento todo raro... A las nueve de la noche llegué a mi casa y mi madre me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que bien y que llegaba tarde porque estaba cenando con unos amigos. No le conté nada de lo que había pasado”.

LA BATALLA DE LAS REDES

“Al día siguiente ya había más protestas en Managua y también en otras ciudades. Yo no fui a la universidad pero sí fui a trabajar. Desde más o menos hacía un año trabajaba para una institución del gobierno que se encarga de educación, y en la oficina casi todos eran militantes del FSLN. Claro, al ser el único estudiante todos me preguntaban qué había pasado y yo pues me hacía el despistado. Ese día yo empiezo con mi trabajo normal, pero al cabo de dos horas llega mi jefa y nos llama a mí y a otro compañero del departamento. Ella nos dice que nos están solicitando en un *laboratorio* para hacer apoyo en redes sociales porque hay mucho movimiento y tenemos que decir lo que está pasando. Yo como que fue: ‘Bueno. Vale. Sí, está bien’. Yo no iba con malicia. Era mi trabajo, tenía que ir y fui. Cuando llegas, te para un policía que te coge la matrícula y la identificación. Yo había estado en ese *laboratorio* dos veces, una para tiempo de elecciones y otra para los Juegos Centroamericanos. Estando ahí, entras en una sala llena de ordenadores, llena de gente en redes sociales creando y alimentando cuentas en Twitter y en Instagram. También hay informáticos y, luego, una sección solo de diseño”, relata Gómez.

El joven nicaragüense explica que “los *laboratorios* son instalaciones temporales que funcionan en edificios administrativos y en centros

de convenciones del gobierno. La mayoría de gente que está ahí es trasladada puntualmente para esas tareas y luego vuelve a su puesto normal de funcionario. Las jornadas son muy intensivas, incluso hay gente que duerme ahí, pero te tratan muy bien. Tienes comida 24 horas, sala de descanso, puedes salir a fumar... y el pago es muy generoso. Te llama el coordinador y te dice: 'Mira, por tus servicios y por el esfuerzo que estás haciendo, aquí tienes'. Y te da un sobre con dinero. Esto mantiene mucho a la gente, no es tanto la ideología sino el dinero, porque al final tienes que cuidar a la gente que tienes en casa y eso es algo que te llega de extra. Durante unos días no tienes vida, pero mira...".

Según el relato de Gómez, desde estas instalaciones se intenta contrarrestar las informaciones consideradas negativas por el gobierno a través de la creación de perfiles falsos en redes sociales, de la manipulación de imágenes y de la creación de noticias falsas. "Esa mañana, por ejemplo, se manipularon imágenes de personas heridas para que parecieran víctimas de los manifestantes y también de noticiarios extranjeros para que la gente pensara que esos medios estaban denunciando a los 'violentos de derechas' que estaban causando disturbios en Nicaragua. Luego esos materiales se hacían circular por las redes y algunos los usan medios y canales de televisión controlados por ellos".

"Yo ya comenzaba a ver que eso no estaba bien, ¿sabes? Me llegaban una cantidad de mensajes al WhatsApp de mis amigos y yo no podía hablar. Ellos estaban en las protestas y yo también quería ir. La verdad es que me sentía muy raro y quería salir de allí". Finalmente Gómez decidió simular que estaba enfermo para poder salir del *laboratorio*. "Les dije: 'Me estoy sintiendo mal y necesito irme'. Primero me dijeron que no, pero insistí y llamaron a mi jefa. Me la pasaron, le conté que me sentía muy mal y me dijo: 'Pues pasa por la oficina que te doy las orientaciones de mañana y ya vemos qué tal'. Yo entro al coche pensando qué hacer para verme enfermo. Al rato subí todas las ventanas y puse la calefacción a tope. Llegué totalmente sudado y pálido, medio ahogado. Entonces mi jefa me ve y me dice que me vaya a descansar y que mañana a las ocho vuelva a presentarme en el *laboratorio*".

"De camino a casa, Managua era un caos y tuve que dar una vuelta grande. De repente comienzo a llorar. No quería llorar sino que me partí en llanto. Llego a mi casa pitando para que me abran el garaje y entro. Salgo del coche llorando y mi madre me ve y, claro, se asusta. Entonces ya me tranquilizo y les explico a mis padres lo que ha pasado. Ellos me dicen que mañana no vuelvo a trabajar y que ya veremos cómo lo arreglamos. En eso, miro el WhatsApp y mis amigos me estaban acribillando a mensajes. Se hablaba de un muerto por un disparo en el cuello cerca de la Universidad Politécnica. Primero habían dicho que era un estudiante, después un simpatizante del Frente, y luego salió que era un chico que

volvía del trabajo y fue de curioso. Ese fue el primer muerto y entonces fue como... Bueno, esto va en serio”.

REPRESIÓN DESATADA

Por su lado, la activista feminista Castillo explica que “el 20 de abril asesinan a los primeros estudiantes en Estelí. Nosotras habíamos decidido que durante las movilizaciones íbamos a aportar en la atención primaria porque, ilusamente, creíamos que no iban a matar. O sea, nadie se espera que tu gobierno te mate. Creíamos que lo que había pasado el día anterior en Managua era que se les había ido de las manos y que iban a gestionarlo. Nosotras pensábamos que, como mucho, iban a tirar bombas lacrimógenas, que habría algunos heridos... Y no. Fueron asesinatos, tal cual. Francotiradores desde la alcaldía, militares y policías ayudando a las fuerzas de choque. Estelí parecía el fin del mundo, como lo que has visto en las películas”.

“Para mí fue muy claro que en nuestra ciudad –que ha sido siempre un bastión histórico de la revolución sandinista– nos iban a agarrar con mucha fuerza. Y, efectivamente, fue así. Las primeras amenazas nos llegaron el 21 de abril por redes sociales. Usurparon la cuenta real de una persona y empezaron a hacer comentarios desde ahí sobre nuestro colectivo. Nos acusaban de estar conspirando con la Iglesia católica –que había roto su alianza con el gobierno– y con ciertos propietarios de bares y comercios que dieron refugio a los manifestantes. Decían que nosotras, a través de los talleres de teatro, habíamos manipulado a las personas jóvenes, que les dábamos drogas, que les dábamos armas...”.

“De la misma forma que las feministas históricas estuvieron presentes en la batalla en los años setenta –explica Castillo–, durante las últimas protestas las jóvenes estuvieron en la calle luchando y participando desde las barricadas o desde las tareas de apoyo, ofreciendo contención emocional, comida, medicinas, curas... Nosotras sabemos que, aunque mucha gente ha salido a protestar, Nicaragua no ha dejado de ser machista, clasista y racista, pero es necesario seguir con la lucha porque han pasado cosas emocionantes como, por ejemplo, que en las manifestaciones masivas se denunciara a Ortega como violador y abusador de su hijastra Zoilamérica –cosa que solo las feministas se habían atrevido a decir– o que la consigna de *Patria libre o morir* se transformara en *Patria libre para vivir*, para reclamar vivir sin violencia y en un estado de derecho que nos dé garantías”.

Tal y como explica la activista feminista, “el gobierno empezó a crear un discurso para que la población creyera que todo lo que había sucedido estaba planeado y que las organizaciones eran financiadas por la CIA. El mensaje que el gobierno repetía era: ‘Defender la patria ante todo, defender la revolución ante todo’. Y, claro, cualquier fanático del

gobierno que escuche esas noticias se siente con el derecho de atacarte. Cuando empecé a ver ese comportamiento de desprestigio y de difamación hacia los movimientos sociales pensé: ‘Yo aquí no tengo ninguna garantía de vida’”.

En todo el país la represión y el goteo de muertos no paraban de crecer pero las movilizaciones no cesaban. “Yo seguí en las calles con todo el miedo del mundo porque era consciente, por mi militancia, qué cuerpos íbamos a sufrir más en esta situación”, afirma Castillo. El 30 de mayo, con motivo de la celebración del Día de las Madres, se convocó en distintas ciudades del país una manifestación en homenaje a todas las madres que habían perdido a sus hijos desde el inicio de las protestas. Ese día la represión se desató en Managua, Chinandega, Masaya y Estelí y dieciocho personas fueron asesinadas a tiros por efectivos de la Policía Nacional y paramilitares. Cuatro de esas muertes ocurrieron en la pequeña ciudad de Estelí, donde, según Castillo, “el alcalde estaba con una arma muy grande dirigiendo el ataque”.

HORA DE IRSE

“En el colectivo en el que yo trabajaba –explica Castillo– decidimos hacer nuestro protocolo de protección y nos dimos cuenta de que, en realidad, no teníamos los medios para salvaguardar nuestra integridad. Entonces solicitamos apoyo a la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras porque sabíamos que la crisis que estábamos viviendo iba a derivar en una persecución a muchas otras defensoras y activistas. Dos personas de nuestro colectivo fueron ayudadas por el programa de protección y tuvieron que irse a otros países de Latinoamérica. Otras compañeras, por la relación de pareja que manteníamos, teníamos la posibilidad de irnos a otros países. Una planeaba irse a Alemania y yo decidí venir a Barcelona. Pasaron varias semanas y yo, aparte de ir a las manifestaciones, seguía trabajando con mis compañeras viendo las cosas que nos ponían en más riesgo, las medidas que podíamos tomar... Hasta que, de un día para otro, la persecución fue insostenible para mí y me fui”.

Gómez, por su lado, consiguió no volver al *laboratorio* gracias a la baja por estrés que le facilitó una doctora amiga de la familia. Pero cuando se reincorporó a su lugar de trabajo habitual empezó a recibir comentarios y amenazas de otros trabajadores. “Ellos me decían: ‘Tus compañeritos, los hijos de puta que están haciendo mierda el país, ¿no han visto los esfuerzos que hace el gobierno? Tú no seas uno de ellos, eh, porque si no te va a ir mal...’”.

Gómez se sentía cada vez más incómodo y sufría por si sus compañeros descubrían que seguía participando en las protestas. “Después de mi jornada me iba a los plantones o a las universidades que habían sido tomadas por los estudiantes a dar apoyo. Dejaba el coche por ahí,

me cambiaba la camisa, me ponía otra en el rostro y me iba las protestas. Con un poco de miedo, ¿no? Pero la verdad es que estando ahí el ambiente no es como se ve desde fuera. Se dieron situaciones difíciles pero, dentro del caos que había, los universitarios nos unimos y fue muy bonito. Así lo viví yo”.

En paralelo, la situación en la oficina se iba tensando cada vez más. Finalmente, después de hablar con su madre, Gómez decidió renunciar al trabajo. Pocos días después, al entrar en su casa, vio a su madre llorando: “Le había llegado una foto de las protestas donde salía yo y estaba muy preocupada. Yo le dije que tenía derecho a expresarme, pero ella insistía en que, por las cosas que sabía del trabajo, no podía seguir haciendo eso. Me decía que me entendía pero que estaba en riesgo y, además, los estaba comprometiendo a todos. Esa noche –era un miércoles– mis padres me dicen que tengo que salir del país y que iban a comprar un billete de avión para irme a España dos días después. Al día siguiente pido permiso para ir a despedirme de mi novia y de algunos de mis amigos. Enseguida llega el viernes y, bueno, tuve que ir al aeropuerto. Había mucha policía y mi padre me dice que para evitar cualquier cosa me acueste en la parte de atrás del coche. Así llegué al aeropuerto. Era una sensación extraña, como muy irreal. Todo fue muy rápido. Y ya cuando subo al avión digo: ‘Mierda, me voy’. Y me fui”.

Para saber más

Informe *Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua* (UNHR)
<http://ves.cat/erDA>

Situación de las defensoras de derechos humanos en Nicaragua 2017 (IM-Defensoras)
<http://ves.cat/erDB>

Discursos de Rosario Murillo y Daniel Ortega
<http://ves.cat/erDC>

Anuario 2018 sobre la violencia sexual (Instituto de Medicina Legal de Nicaragua)
<http://ves.cat/erDD>

Fundación del Río
<http://ves.cat/erDE>

LA PUYA



Lucha en



Exilios

Empezar de nuevo

La mayoría de migrantes que consiguen entrar al Estado español no tienen el apoyo de las redes organizadas por el tercer sector o las instituciones públicas. Las redes informales, pues, acaban siendo el principal colchón con la que estas personas se encuentran, y es a partir de la ayuda de familiares, amistades directas e indirectas y de las comunidades de los lugares de procedencia ya instaladas que, finalmente, consiguen ubicarse.

La activista nicaragüense Castillo, por ejemplo, explica que fue a parar a Barcelona porque su compañero, que llevaba muchos años en Nicaragua, era catalán: “Yo entré a España por la frontera gracias a la unión de hecho estable que tenía con mi pareja, un trámite que habíamos hecho en Nicaragua para garantizar que él no pudiera ser expulsado durante su estadia. Tiempo después resultó que este trámite que estaba pensado para él fue el que me ayudó a mí”. Castillo cuenta: “No sabía qué era lo que yo tenía que hacer, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Yo llegué y al día siguiente me empadroné en la ciudad donde fui a vivir. Después consulté a un asesor del Ayuntamiento y me dijo que como no había garantías de que me dieran el refugio era mejor que, para regularizarme, presentara un papel al juzgado. Yo hice lo que me dijo y después me quedé esperando sin saber exactamente qué”.

Con el apoyo de la familia de su compañero, la joven nicaragüense pudo resolver el problema del alojamiento y tuvo el apoyo necesario para afrontar los primeros tiempos del exilio. “Nosotras, ilusamente, pensábamos que sería por pocos meses y que podríamos volver, pero no fue así. Seis meses después de haber presentado el papel, yo no había vuelto a ver al asesor. Entonces fui a Bilbao a dar una charla y una compañera me dijo que podíamos ir a la oficina de SOS Racismo a preguntar por mi trámite. Fue entonces cuando entendí que yo había iniciado un proceso para certificar el matrimonio y que tenía que esperar a que me llegara el libro de familia español”.

LAS OTRAS TURISTAS

Para las migrantes que vienen de América Central, la llegada al Estado español siempre es un momento complejo y de tensión por el miedo que

genera y por la arbitrariedad del funcionariado a la hora de fiscalizar las condiciones de entrada. El temor a ser retornadas hace que la mayoría intenten entrar como turistas y piensen en intentar regularizar su situación legal después.

El estudiante nicaragüense José Miguel Gómez explica que él entró “como turista con permiso para estar aquí tres meses. Tuve la suerte de que –con los ahorros de mi familia– pudimos comprar un billete de un día para el otro. Eso sale muy caro. Nosotros nos lo pudimos permitir pero mucha otra gente no puede aunque lo necesite. Yo traía una carta de invitación, pero como no estaba en el formato oficial, en Madrid me retuvieron. Horas después, al comprobar que la invitación era de una monja, me dejaron pasar. Perdí mi vuelo a Barcelona y la maleta llegó días después, pero por lo menos no me devolvieron a casa”. Los padres de Gómez planearon su salida del país con el apoyo de una vieja amiga de la familia, una monja catalana que durante los años ochenta había viajado a menudo a Nicaragua y con la que mantuvieron una relación de amistad desde entonces. Gracias a la que Gómez llama “abuelita”, él tuvo la oportunidad de encontrar un piso –donde actualmente vive con un miembro de la misma orden religiosa.

La defensora hondureña María Flores optó por la misma vía que Gómez para entrar al Estado español pero, en su caso, antes de salir de Honduras ya había informado de su llegada tanto a la Red de Migrantes Hondureñas (REDMHI) como a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Yo venía nerviosa, llorando, se me hizo eterno y tenía miedo. Nunca había ido en avión y veía todo el mundo tan tranquilo que pensaba: ‘¿Soy la única que lleva todos estos problemas en la espalda?’. Entonces pensé que, si había corrido entre el gas, entre las balas, entre las montañas, tenía que poder travesar el gran charco”. Flores tuvo en cuenta todos los requisitos a la hora de preparar su llegada a España como turista: “Llevaba las reservas de hotel, el vuelo de vuelta, unos euros, unos dólares y la historia preparada de que venía de vacaciones”. Si en la aduana del aeropuerto le hubieran denegado la entrada, las entidades contactadas “estaban preparadas y yo habría hecho la solicitud de asilo allá mismo. Pero no tuve problemas y me pudo recibir una compañera de la REDMHI”, concluye Flores.

REDES DE ACOGIDA

Entidades como la REDMHI, integradas por personas migradas y refugiadas de las distintas comunidades, se han multiplicado durante los últimos años en Cataluña y han significado un elemento clave en los procesos de acogida de muchas de las personas con quienes se ha podido hablar para construir esta investigación.

Marcadas por la ley de extranjería

Al entrar en el Estado español, las migrantes chocan con una ley de extranjería –la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social– que las atraviesa de arriba abajo. El temor y el riesgo constantes de ser deportadas o encerradas en un centro de internamiento de extranjeros (CIE), la imposibilidad de reagrupar a la familia, la explotación laboral de manera precaria e irregular –durante al menos los primeros tres años en el Estado español, las extranjeras no pueden disfrutar de un contrato laboral– y las identificaciones o retenciones policiales con trasfondo racista –mediante una práctica ilegal como la selección por perfil étnico–, son algunos de los obstáculos con que se pueden encontrar.

La ratio de desproporcionalidad elaborada por la campaña “Parad de pararme” constata que por cada persona española identificada por la policía se identifican 7,4 extranjeras, mientras que estas representan un 13% del total de la población. El racismo institucional se traduce también en la exclusión de las personas extranjeras –con residencia y sin– del sistema electoral, mientras el racismo estructural las expone a delitos de odio y discriminación. Poder formalizar la solicitud de protección internacional es vital, porque convirtiéndose en solicitantes de asilo, quedan teóricamente protegidas por el principio de no devolución y cualquier proceso de expulsión o extradición a su país de origen tendría que quedar suspendido.

La activista feminista Castillo cuenta que ha participado, sobre todo, de “espacios de mujeres migrantes porque es donde puedo encontrar la fuerza que necesito y donde me siento como un sujeto político y no solo como una migrante”. “En los lugares donde he vivido –pueblos y ciudades pequeñas– he encontrado procesos muy herméticos dentro de las entidades y los movimientos sociales. Definitivamente, en muchos casos las mujeres migrantes no son tenidas en cuenta. Lo encuentro muy fuerte, porque incluso en los lugares donde tú te acercas pensando que son espacios de cuidados –como los movimientos de izquierdas o los movimientos de mujeres– hay mucho por transformar. Hay racismo, hay xenofobia, y pienso que es por eso que muchas de nosotras no estamos participando”.

Sobre el racismo en el Estado español, Castillo piensa que “está creciendo y lo he podido vivir yo misma. En la manifestación contra la celebración del 12 de octubre, por ejemplo, había un montón de gente que invadió nuestro espacio y se nos enfrentó. Nos gritaban: ‘Váyanse de aquí’, ‘Id a trabajar a vuestros países’... A mí me dolió mucho porque no se trata de migración económica como pretenden hacer ver. Lo que pasa es que hay conflictos graves en toda América Latina, y estos conflictos son producto de un modelo impuesto desde aquí. Un modelo extractivista, de saqueo y de todo lo que eso implica. La realidad es que estamos huyendo por todo esto. Nos exiliamos porque estamos intentando salvarguardar nuestras vidas”.

Por su parte, la hondureña Carol Murcia afirma que “ACATHI (Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y Transexuales Inmigrantes) fue mi primera familia aquí. Me han ayudado mucho a crecer como persona. Retroalimentarme, entender mis dere-



El papel del tercer sector

Dentro del tercer sector en el Estado español encontramos gran cantidad y diversidad de organizaciones –ya sean ONG, fundaciones o asociaciones– que ejercen alguna función alrededor de la acogida y la protección internacional. Hay que mencionar que la mayoría de ONG que trabajan en este sector –como Cáritas, Cruz Roja o ACCEM– son financiadas sobre todo a través de proyectos y subvenciones gubernamentales. Como afirma Alfredo Olmeda en el libro *Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal*, “el movimiento ONG tiene una escasa capacidad asociativa en España y, en general, es un fenómeno enormemente dependiente de instituciones nacionales y supranacionales”. Según el filósofo madrileño, las ONG no crecen cuando la sociedad las necesita sino “cuando hay subvenciones que privatizan ciertos aspectos de la organización estatal”. Junto con estos fenómenos, Olmeda también habla de una despolitización importante del mundo de las ONG desde principios del siglo XXI.

Gran parte de la gestión de las plazas de acogida que ofrece el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social español es llevada a cabo por ONG y va en aumento. Blanca Garcés explica en un informe del CIDOB que “si en 2015 los centros de acogida del gobierno (o CAR) disponían de casi la mitad de las plazas y CEAR, ACCEM y Cruz Roja de la otra mitad, a finales de 2018 las entidades sociales gestionaban un 94% de las plazas del conjunto del sistema estatal de acogida”.

chos, saber situarme dónde estoy”. “A mí nadie me dijo dónde tenía que pedir asilo, pero ahora esto ya no pasa. ¿Por qué? Porque ahora hay un enlace entre las transexuales que ya hemos pedido asilo y las que vienen para que nadie más sea abusada”, explica la activista LGTBI.

En el caso del Nery Gómez, las redes informales de hondureñas migradas se organizaron desde el Estado español para sacar al joven estudiante que se encontraba en una situación de riesgo extremo en Tegucigalpa. “El compañero Milthon Robles hizo una campaña de micromecenazgo y, con este dinero y la ayuda de la organización Freedom House de los Estados Unidos, se reunió una cantidad suficiente para poder moverme”. Hay que decir que, en este y en otros casos, los recursos que se consiguen de ONG se gestionan gracias a personas individuales de la entidad que se solidarizan con la situación de vulnerabilidad de una persona y buscan la partida de dinero necesaria.

Al fin y al cabo, en muchos casos las personas migradas transitan, inevitablemente, entre las redes formales e informales que acaban constituyendo su entorno. A Nery Gómez, por ejemplo, la entidad que le ofreció alojamiento durante los primeros días cuando acababa de llegar de Honduras fue la Cruz Roja. El Hotel Welcome, lleno de personas solicitantes de asilo, fue su primer dormitorio en el Estado español. Pero después quedó temporalmente “a la deriva”, como él mismo dice, y pudo contar con la casa y la solidaridad de un amigo.

Milthon Robles, por su parte, llegó a Madrid con un permiso de residencia por razones humanitarias ya tramitado. “Me acompañaron a un hostel, sí, pero después tuve que buscarme la vida por Madrid. Yo soy muy crítico, ellos [Reporteros Sin Fronteras] presumían de acompañamiento, pero aquello no lo fue. Acompañamiento es que, si yo vengo como persona refugiada, me acompañen a hacer todos los trámites, al menos las dos primeras semanas. Yo salgo en el informe de Reporteros Sin Fronteras 2017, pero no tuve acompañamiento”, denuncia.

REHACER LA VIDA

Llegar a un nuevo país e intentar rehacer la vida no es fácil. Para Milthon Robles, “cuando te obligan a salir de tu espacio tú no sales feliz, para empezar. No necesitamos que nos reciban en el aeropuerto y que nos dejen tirados en un hotel. Necesitamos recibir el calor humano, sentirnos en casa, sentirnos en familia. Sentir que la ausencia de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestras parejas, de nuestro entorno, no es tan grande. Yo estuve en un piso en Móstoles compartiendo espacio con un chico que tenía problemas con las drogas y no me dejaba dormir por la noche. Aguanté cuatro semanas allá hasta que pude salir. Necesitamos que nos orienten, no que nos dejen solos, como me dejaron a mí. Pienso que la entidad no tiene que utilizarnos para hacerse la foto. Eso sí, es importante

que nos impulsen para que hagamos cosas, que no nos acomodemos y sigamos nuestras luchas desde aquí, para que aprovechemos este espacio del exilio. Pero antes necesitamos esta protección, esta sanación. Yo al inicio subía al metro y no me podía sentar cerca de una persona porque ya sentía que me clavaría una puñalada o un tiro. Créeme que hoy todavía lo siento”.

Por su parte, Castillo explica que “los primeros meses son duros e intentar construir un proyecto de vida es difícil. Yo me involucré enseguida que pude con la diáspora nicaragüense, pero por otro lado estaba haciendo mi proceso personal de adaptación”. La activista feminista se encontró, además, con una dificultad inesperada: “Yo en Nicaragua llegué a acabar mis estudios, tenía la carrera hecha y mi tesis presentada y evaluada. Cuando, ya desde aquí, pedí a una abogada que fuera a recoger los papeles oficiales, me encontré que no se los querían dar. Es decir, me niegan información y no me permiten gestionar mi título. No soy la única que tiene estos problemas; ha habido muchos estudiantes que han sido expulsados, hay expedientes académicos borrados o inaccesibles... No tienes pruebas de que fuiste estudiante, y esto, obviamente, también precariza la vida aquí. Es horrible y me hace sentir muy enfadada porque a mí, particularmente, me costó mucho poder acceder a la universidad y dedicarle cinco años de mi vida”.

En este aspecto, el también nicaragüense José Miguel Gómez tuvo más suerte. “Yo estaba haciendo el último curso y me faltaban cuatro asignaturas para graduarme. Fui al SAIER [Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados del Ayuntamiento de Barcelona] para ver qué podía hacer con el tema de mis estudios. Vi que convalidar era muy y muy caro. De hecho, me dijeron que me saldría más barato volver a empezar la carrera que convalidar todos los créditos que ya tenía. Entonces escribí al rector de mi universidad –que está gestionada por los jesuitas– y se llevaron muy bien porque lo que hicieron es abrir una nueva modalidad en línea para toda la gente que ha tenido que salir del país. Ahora ya he aprobado las asignaturas que me faltaban y pronto tendré que defender mi trabajo de fin de grado por Skype y ya tendré el título. Me ha costado un poco pero estoy satisfecho”.

Como mucha de la gente que llega huyendo de una situación complicada, José Miguel Gómez tenía la esperanza de poder volver a su país en poco tiempo. “Yo llegué pensando que me estaría aquí tres meses y podría volver y rehacer mi vida, pero el tiempo pasaba y la cosa seguía igual. Llegué a un punto de desesperación. Quería volver y mi madre me decía que no lo hiciera. De hecho, mis padres me enviaban un dinero cada mes y dejaron de hacerlo porque decían que me conocían y que intentaría comprar un billete. Y bien es verdad que lo pensé muchas veces, pero finalmente no pasó. Ahora tengo permiso de trabajo y estoy buscando trabajo. Lo que quiero es comprarle un billete a mi madre y que me venga a ver”.

La incertidumbre del asilo

Casi 71 millones de personas, según ACNUR, han sido desplazadas de su territorio de forma forzada en todo el mundo en 2018. Una cifra que aumenta año tras año y que conlleva una demanda creciente de protección oficial a los países que concentran comodidades y privilegios como son los europeos. Hasta el mes de septiembre de 2019 el Estado español había recibido 81.675 solicitudes de asilo. El año 2018 recibió 54.060, pero, según CEAR, más de 78.000 quedaron pendientes de resolver.

La gestión y el desarrollo de este sistema de protección internacional y asilo están muy centralizados en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social español, y tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos que quieren dedicar esfuerzos a este sector reclaman una mejor coordinación entre gobiernos y más presupuestos. Por otro lado, a pesar de que las facilidades que ofrece este modelo de asilo son muchas y tienen una función muy importante en la vida de muchas refugiadas, la falta de recursos, la fragmentación y la rigidez del itinerario de las solicitantes de asilo y la descoordinación entre la parte institucional y las entidades sociales del tercer sector se reconocen como algunas de sus problemáticas principales.

En el caso de Mesoamérica, su población pasó a estar entre las nacionalidades que más asilo piden dentro del Estado español a partir de 2017. Mientras que en 2015 Siria era el país de origen de la mayor parte de la población que pedía asilo –con 5.725 solicitudes presentadas–, en 2019 esta desaparece de los primeros lugares de la lista y el ranking pasa a estar liderado solo por países de América Latina, tres de ellos de América Central. Actualmente, y de mayor a menor presencia, los cinco países con más solicitudes de asilo en el Estado español son Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La mayor parte de las peticiones de asilo de estos países, pero, son rechazadas. Demasiado a menudo, conflictos reconocidos como políticos y transnacionales, como por ejemplo la violencia de las pandillas, no son aceptados como un motivo que dé derecho al estatus de refugiada. El año 2018, un 76% de las solicitudes de asilo fueron rechazadas y, por

Desde CIES, aeropuertos y fronteras

De enero a septiembre de 2019, 1.783 personas han pedido asilo en puntos fronterizos aeroportuarios, 2.945 en puertos y pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, 1.586 en centros de internamiento de extranjeros y 75.458 en territorio nacional.

lo tanto, la mayoría de personas desplazadas de Mesoamérica a causa de la extractivismo, la persecución política, la lucha estudiantil, la lucha feminista y LGTBI o la violencia de las maras que solicitan asilo, no consiguieron ser aceptadas como refugiadas. Hay que recordar que las que solicitan asilo solo son una pequeña parte de las migradas de cada país: para poner un ejemplo, 4.660 hondureñas han solicitado asilo durante el año 2019, pero en el Estado español actualmente residen alrededor de 100.000 según el padrón.

DIFICULTADES PARA LAS SOLICITANTES

El líder estudiantil hondureño Nery Gómez solicitó asilo solo llegar a Madrid, en el punto fronterizo del aeropuerto de Barajas. Quedó cuatro días a la espera que aceptaran la solicitud, que es el tiempo máximo que las autoridades tienen para dar una respuesta. “Aquellos cuatro días fueron muy duros, no dormí. Estaba con aquella incertidumbre de que si me denegaban ser solicitante de protección internacional me iba directo a Honduras y, si me iba a Honduras, iba directo a la cárcel”, relata el joven sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura en su país de origen por luchar por la educación pública.

Según Gómez, aproximadamente un centenar de personas estaban en la sala de espera, sobre todo hombres, y a todos se les requisaron los objetos personales como el teléfono móvil. Aparte de denunciar que no se le permitió hacer la llamada reglamentaria a la cual tiene derecho, Nery Gómez asegura que en otra ocasión un compañero hondureño estuvo hasta 21 días esperando en el aeropuerto antes de ser deportado.

La solicitud de asilo de Nery Gómez fue aceptada a trámite y, a pesar de varios obstáculos burocráticos y después de ser acogido por compañeras hondureñas a través de redes informales y familiares durante algunos meses, consiguió entrar en el programa de ayudas para solicitantes de asilo. Uno de los aspectos negativos que Gómez resalta es la ubicación del piso de acogida que el programa le ha ofrecido, que en su caso lo ha llevado a vivir, como él dice, “en medio de la nada”, en Teruel.

Y es que entrar en el programa de ayudas significa estar dispuesto a irse a vivir donde sea que salga una plaza.

La lideresa comunitaria Yolanda Oqueli vivió la transición entre un programa de acogida temporal de Amnistía Internacional y el proceso de solicitud de asilo que hizo a través de CEAR. En aquel momento se le ofrecieron las ayudas para solicitantes de asilo, pero “no las quise porque no sentía que fuera sano, ni para mis hijas ni para mí, tener que seguir moviéndonos. En Guatemala, en un año cambiamos de casa siete veces por cuestiones de seguridad. Entonces, al llegar aquí lo que queríamos era estabilidad, y con CEAR me tenía que quedar a la espera hasta que me dijeran dónde me enviaban, que podía ser a Madrid o a cualquier otro lugar donde saliera un piso”, explica la lideresa. “Ya fue demasiado fuerte tener que salir de Guatemala como para seguir moviéndonos aquí. La situación con mis hijos ya ha sido bastante difícil”, asegura.

En el caso de la activista hondureña Carol Murcia, con las maletas y todo, sin conocer el funcionamiento, fue a pedir asilo sin tener cita previa. Esta es, precisamente, uno de los principales obstáculos de este sistema: se entregan citas previas con hasta seis meses de espera y durante estos meses las futuras solicitantes quedan fuera del sistema de acogida. Murcia llamó en ese mismo momento y le dieron cita para al cabo de dos meses. Obstinada, volvió a entrar para insistir. “La estrategia fue que me vieron con las maletas, y es que yo necesitaba hablar con alguien. Me atendieron, estaba muy nerviosa y le expliqué al trabajador social todo lo que había vivido, le dije que no tenía dónde ir y me enviaron a un hostal”, recuerda Murcia, mostrando la positiva sorpresa que le provocó aquel trato. De este modo se activó su proceso de acogida.

Tanto para Gómez como para Murcia, los primeros seis meses dentro del programa sin disfrutar de un permiso de trabajo fueron bastante duros. En la llamada fase de integración, las refugiadas comentan que se hace difícil adaptarse al nuevo territorio si no tienes una actividad cotidiana que te ayude a relacionarte con sus habitantes y sus costumbres y critican que se tiene que pedir permiso para poder realizar desplazamientos o recibir visitas en el piso y que es obligatorio justificar todos los gastos. “Después de estos seis meses pasas a la segunda fase, en la cual ya tienes permiso de trabajo y ya no compartes piso, buscas una habitación y te dan una ayuda para pagarla –que dura un año y medio– hasta que encuentras trabajo”, explica Carol Murcia. Para Nery Gómez, quien se encuentra en esta fase del proceso denominada de *autonomía*, este momento supone tener “algo más de libertad, a pesar de que aún no puedo salir de Teruel”.

La discriminación vivida por ser mujer, migrada y transexual no permitió que Carol Murcia encontrara un trabajo, pero, agotadas las ayudas del programa de asilo estatal, pudo entrar al proyecto Nausica del

Ayuntamiento de Barcelona a través de ACATHI. “Es un proyecto bonito, pero fue como volver al principio, tener tutorías, una cierta cantidad de dinero, etc.”. Hasta un año después Murcia no encontró trabajo como trabajadora del hogar. Por su parte, y después de muchos esfuerzos, Nery Gómez ha encontrado trabajo como carnicero en Teruel. “Yo soy una persona que, mientras tenga el derecho a alimentación y a la vivienda, me parece bien lo que nos brindan, pero muchas se quejaban”, asegura el líder estudiantil. “Eso sí, siento que no hay una política real de integración del refugiado. La realidad es que llegas y estás marginado. Para mí, España no está preparada para acoger refugiadas, cuando se trata de un derecho universal. Tiene que buscar nuevas estrategias y nuevas ideas para integrar y encontrar soluciones al problema de las plazas de acogida”, sigue analizando Gómez.

Más allá de las fases de los programas, a las cuales no todas las solicitantes acceden –solo aquellas que demuestran no tener lugar donde ir ni recursos económicos–, la gran fragilidad de las que ya han pasado por la entrevista y el proceso de la cita previa es la espera de saber si será aceptada o no. Una vez se ha aceptado a trámite la solicitud existen cuatro caminos posibles: que sea aceptada para la concesión de asilo, para la protección subsidiaria o para la residencia por razones humanitarias, o que sea denegada.

Mientras esperan, las solicitantes no pueden salir del Estado español y tienen que renovar “el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional” cada seis meses. El nicaragüense José Miguel Gómez explica que “el proceso es muy lento porque llegan muchas solicitudes. En un primer momento me dijeron que esto tanto me lo podían resolver en un año como podían pasar diez sin tener respuesta”. “Hoy puedes estar normal y mañana te llega una carta que te dice que se ha aceptado o que no. Y en este último caso tienes catorce días para salir del país. Si no sales, te abren un expediente”, explica el nicaragüense.

La lideresa comunitaria Míriam Miranda ha ayudado a gestionar la salida de Honduras de varias lideresas que estaban en riesgo en sus territorios. Ha estado en el Estado español y en otros países de Europa recogiendo premios, haciendo conferencias en acontecimientos de reconocimiento de la defensa de los derechos humanos en el Sur global y ha participado en diferentes instancias políticas de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Y, con toda esa experiencia, asegura que está cansada. “Hay una cosa fundamental en los procesos de migración: no se puede poner solo la mirada alrededor de los derechos de los migrantes. Yo he estado insistiendo mucho a la gente que trabaja con migración que no es únicamente esto, porque hay muchas organizaciones que básicamente se especializan en la ropa, la comida, la vivienda, etc., pero esto es

seguir perpetuando estas condiciones en las que llega la persona migrada. Si no vemos y trabajamos en las razones, los motivos por los cuales la gente está saliendo, que son las condiciones de nuestros países de origen, y no nos damos cuenta de que son parte de un problema estructural, de un modelo que expulsa la gente de sus territorios, no estamos viendo la totalidad de la situación”, sentencia la lideresa.

Protección temporal ante la emergencia

Cuando la presión sobre las defensoras es insostenible y el peligro que corren en su territorio es demasiado alto, los programas de protección temporal en el exterior se convierten en un valioso recurso para salvar la vida. El objetivo de estos espacios de reubicación es incrementar la seguridad de las personas que han puesto en riesgo su integridad para defender sus territorios, ofrecerles un respiro y reforzar sus capacidades personales y profesionales. Además, otro de los ejes comunes es el apoyo en las tareas de incidencia –actos, charlas, entrevistas, etc.– que permiten dar visibilidad e internacionalizar las luchas de las defensoras.

UNA OFERTA CRECIENTE

En los últimos años, la oferta de este tipo de programa en diferentes países europeos se ha multiplicado gracias a la iniciativa de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil espoleadas por las situaciones de emergencia que sufren las defensoras en todo el mundo. La mayoría de programas ofrecen una estancia temporal –que, en general, oscila entre los tres meses y los dos años– y la oportunidad de acceder a programas de formación y de atención psicosocial. Cada vez en más casos, y fruto de las carencias detectadas en la práctica, también se contempla una tarea de acompañamiento y seguimiento en el retorno de las defensoras a su país de origen.

Actualmente, en el Estado español existen programas de protección para defensoras latinoamericanas en el País Vasco, Cataluña, Madrid, Valencia y Asturias. En los tres primeros casos, los titulares del programa son instituciones públicas pero la gestión la realizan los núcleos territoriales de la Comisión de Ayuda al Refugiado y, en el caso de Madrid, la Fundación Mundubat. En el País Valenciano, el CEAR es titular y gestor del programa que se desarrolla en esta comunidad, y en Asturias las dos tareas son responsabilidad del colectivo internacionalista de solidaridad Soldepaz Pachakuti. Por su lado, Amnistía Internacional también cuenta

Aprender de las defensoras

Vincent Vallies, experto en la construcción de estrategias de prevención y protección integral y coautor de la guía *Programas de acogida temporal en el exterior*, explica que “entre los usuarios de los programas de protección temporal la oportunidad de intercambio directo entre defensores –que en muchos casos no se conocían antes– es valorada muy positivamente. Crear redes entre personas defensoras de un mismo país o región es uno de los efectos positivos de estos programas”.

Para Vallies, las entidades y los movimientos de los países que acogen podrían aprender muchas cosas de las defensoras latinoamericanas: “Durante su estancia, muchas de estas personas podrían impartir formaciones en temas que van desde las curas –que se han trabajado mucho más que en Europa– hasta la práctica de estrategias innovadoras de resistencia en sus luchas. Tenemos muchas cosas que aprender de ellas”.

con un programa propio que acoge a defensoras en diferentes lugares del Estado español en función de las capacidades de sus grupos locales. Finalmente, el panorama catalán se completa con el programa de acogida de periodistas mexicanos –impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad Taula per Mèxic– y con el programa Escritor Acogido, coordinado desde 2006 por el PEN Catalán.

ADAPTARSE A UN NUEVO ENTORNO

Mario Luna, defensor de los derechos indígenas y del medio ambiente en México, es una de las personas acogidas actualmente por el Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y cuenta con el acompañamiento de la entidad Taula per Mèxic.

“Yo accedí al programa a través de Serapaz, una ONG mexicana que contribuye a la lucha del pueblo yaqui con tareas de asesoría jurídica y política. La decisión no fue fácil y la tomamos después de analizarlo largamente con mis autoridades tradicionales y con mi familia”. Para Luna, poder pasar seis meses en Barcelona supone “no solo proteger mi integridad frente a un nivel de riesgo que ya era insostenible, sino también bajar un poco el perfil, recuperar fuerzas y también aprovechar para hacer tareas de incidencia política”.

Adaptarse a la nueva realidad no es fácil para las defensoras. “Todavía tengo algunos problemas. El cambio de horario me ha resultado difícil y todavía tengo problemas para dormir porque no termino de acostumbrarme. También hay algún problema de carácter cultural como, por ejemplo, la alimentación, los códigos de comunicación o la falta de conocimiento del territorio. Pero lo vamos superando poco a poco. Estoy haciendo una diplomatura relacionada con derechos humanos en la Universidad Autónoma de Barcelona y eso me está sirviendo bastante. Yo noto que estoy más descansado física y psicológicamente. Romper con el estrés constante y tener más tiempo y tranquilidad también me permite pensar y reflexionar, y eso es importante”, explica Luna.

PROGRAMAS QUE EVOLUCIONAN

En la mayoría de casos, la parte más compleja para las defensoras es alejarse de las personas queridas. Aunque algunos programas permiten la acogida de sus familias, en muchos otros eso todavía no es posible. “La parte personal –explica Luna– es la más difícil y la que más problemas da. No es fácil estar lejos de la familia. También está el aspecto económico porque, en mi caso, los ingresos que yo generaba eran imprescindibles para su mantenimiento y, aunque ahora yo les mando el dinero de la beca del programa, no es suficiente”. Luna explica que mantiene “reuniones periódicas con la Taula per Mèxic, donde vamos analizando esta problemática y ellos tratan de aliviar, en la medida de lo posible, los problemas que van saliendo”. Tal y como cuenta Luna, la Taula traslada los temas a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el programa “se intenta ir adaptando a las circunstancias y, de acuerdo con la experiencia, se vuelven a acomodar las cosas. Los programas evolucionan y eso creo que permitirá que las personas que vengan el año que viene encuentren condiciones más óptimas.”

Yolanda Oqueli, defensora del territorio guatemalteco, explica que pudo venir con sus hijas pero que el seguimiento que recibió estaba enfocado solo en ella. “Sería muy importante que en estos programas se pudiera pensar, más allá de nosotras, en nuestras familias”. Para Oqueli sería necesario que “cuando llegamos no nos encontremos solo con un piso o unos recursos, sino con aquella parte humana que dejamos allá.

Venimos de tener todo el contacto, del activismo, y llegar aquí y encerrar-nos en una casa es duro.”

En algunos casos, la supervisión y la gestión externa de las agendas produce sensación de falta de autonomía. Yolanda Oqueli explica que, a la hora de organizar la participación de las defensoras en charlas, encuentros u otras actividades, algunas organizaciones “nos ven como de su propiedad. Tienes la sensación de que piensan: ‘Ha venido a través de mi programa y tiene que estar conmigo’”.

A pesar de la necesidad de introducir mejoras, en el contexto actual de aumento de amenazas a las defensoras y de las situaciones de emergencia que provocan, la necesidad de los programas de protección temporal en el exterior es clara. El principal reto es mantener los esfuerzos para adaptarlos a las necesidades particulares de acompañamiento de cada defensora, incluir en el foco los impactos que sufren sus familias y los colectivos donde trabajan y no perder de vista que el objetivo final es fortalecer las organizaciones dentro de su territorio y dar apoyo a las redes de protección locales y regionales.

Para saber más

Datos y estadísticas de asilo en el Estado español
(CEAR)

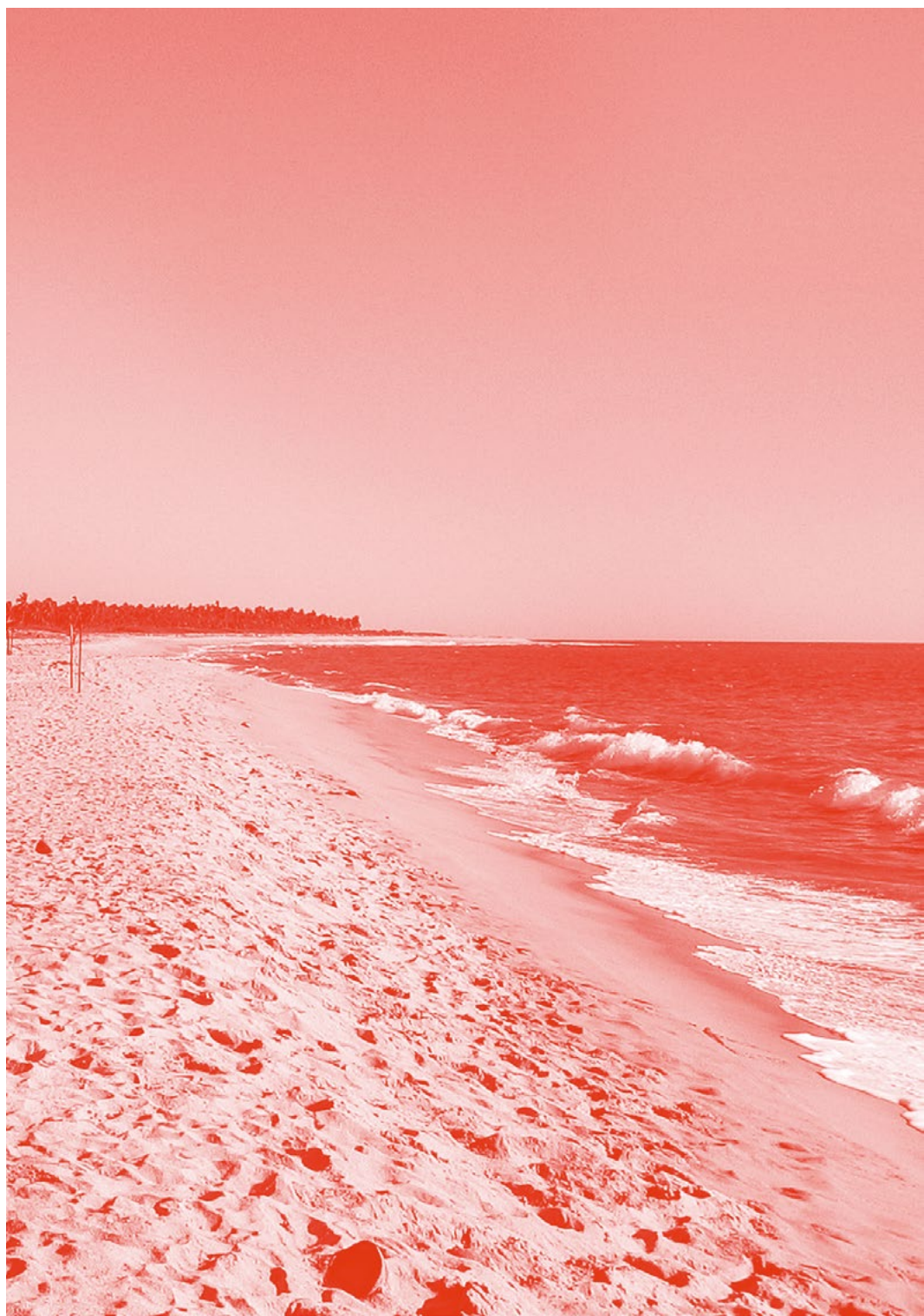
<http://ves.cat/erDF>

Informe *Front Line Defenders Global Analysis 2019*

<http://ves.cat/erDG>

El sistema estatal de acogida en España desde 2015, de
Blanca Garcés y Francesco Pasetti (CIDOB)

<http://ves.cat/erDH>



Horizontes

Hacia una protección integral feminista

La llegada y los primeros días en el Estado español de la mayoría de las refugiadas resultan difíciles y en algunos casos incluso traumáticos. A menudo, las entidades que organizan la salida del territorio de una persona en riesgo y las que ofrecen la acogida y el acompañamiento en el Estado español no son las mismas y no tienen suficiente coordinación entre ellas. Algunas veces, desde el país de origen se financia la salida del territorio de estas personas pero no se prevé ningún acompañamiento una vez llegadas al país de destino. En otras ocasiones, a pesar del riesgo que puedan correr, las refugiadas llegan directamente solas y no existe ningún tipo de acompañamiento formal. Muy habitualmente, las redes informales acaban siendo las que facilitan la información necesaria para solicitar asilo y para conseguir acceso a los servicios básicos.

SER MUJER EN EL EXILIO

Si a todo esto le sumamos las circunstancias diferenciales de tener que salir de tu territorio formando parte de un colectivo vulnerable, el refugio se puede convertir en un abismo. En el marco de un sistema patriarcal, no es lo mismo migrar o exiliarse para un hombre que para una mujer. Maternidades en solitario, pobreza extrema, personas mayores o enfermas a cargo. “Para las compañeras no es solo tener que huir, es pensar en cómo alimento mis hijos si se quedan, cómo conseguiré alguien que se encargue de tener cuidado de mi madre que está postrada en la cama”, explica María Martín, activista y abogada feminista. Según ella, la realidad familiar y las dinámicas comunitarias atraviesan a las mujeres en más medida que a los hombres y las perjudica emocional, social, política e incluso logísticamente a la hora de migrar.

La protección integral feminista es una forma alternativa de acompañar a las mujeres defensoras de derechos humanos desde el autocuidado, el cuidado de las otras y el trabajo en red. En países como México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el espacio que está ponien-

do en práctica este nuevo paradigma es la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), una articulación de organizaciones sociales y redes de colectivos que trabaja para “dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”.

María Martín es la coordinadora de incidencia de esta gran red y asegura que acompañar desde este paradigma “implica necesariamente atender las formas de violencia que viven las defensoras y atender los impactos diferenciados que han vivido, no solo los que se deben a la violencia diferenciada que viven por el hecho de ser mujeres, sino el impacto diferenciado que genera una situación de desigualdad estructural” dada por el sistema económico, político y social.

LA ESCUCHA COMO REMEDIO AL PATERNALISMO

Una de las claves de la protección integral feminista es la escucha. Crear las condiciones que hagan posible atender y escuchar para así conocer y comprender la realidad y las necesidades de las personas acompañadas. “Intentamos huir de las lógicas paternalistas y maternalistas en materia de protección que conllevan ofrecer una batería de respuestas a una compañera defensora que muchas veces no resuelve de forma clara su situación. No es ‘te podemos ofrecer esto y esto’, sino ‘qué necesitas y cómo podemos ayudar a construirlo’”, asegura María Martín. De este modo, este método para proteger y acompañar atiende de manera especial la situación psicoemocional de la persona desplazada. Y no lo hace necesariamente a través de terapias psicológicas convencionales, que también se incluyen en la mayoría de programas de acogida, sino desde las redes de relaciones: “No se trata de que no esté sola, sino de que no se sienta sola”, afirma Martín.

Ana María Hernández, directora del Consorcio Oaxaca de México –una de las entidades que forman parte de la Iniciativa Mesoamericana–, explica que “estamos en contra de medicalizar y mercantilizar el bienestar. No es una moda, no es una cosa banal. Se trata de reconstruir otras maneras de relación y recuperar, también, mucho del conocimiento que ha dado razón de ser a los pueblos, y por eso rescatamos mucho la medicina ancestral pero también toda la cultura de protección de la vida que los pueblos originarios nos han enseñado”.

Para Hernández, la persona defensora que se ve obligada a salir de su país de origen sufre un “exilio del alma, un destierro de la propia esperanza. Vienes cargado de dolor con la incertidumbre de no saber si vas a poder volver, extrañas a la familia, extrañas los olores de tu casa...”. Según su criterio, lo que necesitan estas personas es “encontrar un abrazo que no sea invasivo pero, al mismo tiempo, que sea reparador. Un

Financiar los cuidados

Para Ana María Hernández, “el autocuidado, el cuidado colectivo y los procesos de sanación deben entenderse como un ejercicio de justicia sanadora, como un derecho de la persona defensora a poder reparar el daño que genera estar expuestos cotidianamente a la violencia”. Invertir tiempo y recursos humanos para cuidar a las defensoras es “una visión estratégica de fortalecimiento de nuestros movimientos y es vivir en congruencia con el mundo que estamos buscando”. Para garantizar el autocuidado de sus integrantes, las organizaciones deben tener capacidad económica, pero la cooperación internacional no acostumbra a considerar este tema como un eje de actuación financiable. Por eso, según Hernández, es necesario “establecer un diálogo con los gobiernos, las agencias de cooperación y todos los donantes para hacerles entender que la protección integral feminista es una inversión necesaria para la sostenibilidad de las luchas”.

Una de las estrategias que la Iniciativa Mesoamericana ha desarrollado para conseguirlo es destinar una parte fija del presupuesto a esta finalidad: “Nosotras hemos planteado la meta que el 10% de los recursos tienen que ir destinados a programas de cuidado y acompañamiento”. Aunque este objetivo todavía queda lejos, Hernández cree que el trabajo hecho a lo largo de los últimos años ha servido para ganar espacios y para que los financiadores entiendan este tipo de protección como una necesidad políticamente justificable: “Hemos logrado, en primer lugar, legitimar el tema y también que varios donantes entiendan que al igual que es importante proteger una casa con una alarma, tenemos que lograr blindar también los cuerpos psicológicos y espirituales de las defensoras”.

abrazo que te permita seguir y poner piso a ese vendaval de emociones, de conflictos y de preguntas con el que llegas”.

“Este acompañamiento humano, más allá de que resuelva o no el problema que te ha generado la salida de tu país, ayuda a generar una base importante de resiliencia para poder construir una alternativa desde tú misma y para tú misma”, concluye la coordinadora de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana, María Martín. Antes de salir de Honduras, a María Flores, lideresa comunitaria que se opuso a un proyecto minero en su territorio, ya la habían puesto en contacto con compañeras hondureñas que estaban en Madrid. La Red de Defensoras en Honduras, que forma parte de IM-Defensoras, la había conectado con la Red de Hondureñas Migradas de Madrid (REDMHI), “mujeres hondureñas migradas y organizadas para *acuerparse*, para informar a las compañeras paisanas que llegan. Ellas me recibieron, me ubicaron, hicieron toda una red para *acuerparme*”, explica Flores.

Gracias a todo el acompañamiento que recibió dentro del marco de la protección integral feminista, María Flores viajó de Honduras al Estado español sabiendo cómo funcionaba el mecanismo de asilo. “Ya llevaba cartas de la Fundación San Alonso Rodríguez, de la Red de Defensoras, que daban constancia de que yo soy parte de esta lucha, del Comité de Guapinol, y que mi vida corre peligro. También hice una compilación de videos de mi gente explicando nuestra lucha y hablando de mi trayectoria allá”, explica la lideresa hondureña. Cinco meses duró la espera hasta la llegada del día de la cita para solicitar asilo. Después de pasar por la entrevista, para Flores lo más importante fue “salir con un resguardo que me asegura que no me pueden deportar. Es un apoyo importante, mientras ellos analizan el caso. Pero confío que me concederán asilo, porque la funcionaria me dijo que tenía un caso potente, que estaba muy apoyado en la información”. El 24 de marzo de 2020, casi un año después de su llegada, lo descubrirá. “Entonces podré trabajar. Hasta entonces seguiré haciendo horas limpiando en casas, pasando, viviendo”, explica Flores.

“Considero que he recibido una protección integral feminista y que he sentido la solidaridad, el apoyo, la atención, la preocupación. Poder identificarse con las hermanas y por lo que estamos pasando, apoyarnos, hacer campañas en solidaridad de compañeras que están en otro país, aunque no las conozcamos”, asegura la lideresa hondureña. “Se trata de tejer redes para seguir luchando aunque hayamos tenido que marcharnos”, añade. A pesar de la dificultad de haber sentido de cerca la muerte y de haber dejado atrás a sus hijas, María Flores solo transmite palabras de amor y sonrisas cuando habla de su proceso migratorio y de su llegada al Estado español. “Todo lo que la Red ha hecho por mí, desde que salí de casa hasta llegar aquí; hacerme sentir el afecto, el calor, ponerme en contacto con la Casa de la Cultura, con la Casa de la Mujer... Siempre

Por un activismo sostenible y placentero

Uno de los objetivos del Consorcio Oaxaca es generar “un activismo sostenible que permita transformar desde el goce y el disfrute colectivo y no desde el sacrificio personal”, explica Ana María Hernández. El autocuidado implica no solo ponernos límites personales sino “ser conscientes que no somos omnipotentes y que todas las desigualdades que queremos transformar deben abordarse colectivamente”.

Hernández defiende modelos de activismo que no reproduzcan “la autoexplotación y las prácticas depredadoras contra las que luchamos. No queremos liderazgos extenuantes ni gente resistiendo hasta el límite. No podemos estar esperando que llegue el siguiente contingente de activistas para sustituir a los que ya se han quemado. Eso es una falta de visión política. Es muy triste cuando los jóvenes te dicen que están listos para morir. No queremos que nos maten, queremos rescatar de la muerte a nuestra gente. Por eso necesitamos modelar otras formas de trabajar y de aportar que no signifiquen dejarnos la piel en la lucha. No queremos defensoras de un solo uso ni que nuestros jóvenes sean soldados del bando de la transformación. Creo que aquí hace falta una reflexión y una cuestión ética que necesitamos explorar”.

me han dado las herramientas para que me apoderara de la información que necesitaba”, asegura. Para cualquier duda, cualquier necesidad, la hondureña explica que siempre ha habido una mujer para asesorarla que, más que ofrecerle un servicio, le ha ofrecido su amistad.

A diferencia de ella, muchas refugiadas denuncian haber sentido desesperación en su llegada al Estado español. No solo han tenido que dejar su principal tarea en el territorio de origen y huir, sino que, además, llegan aquí y no se les ofrece la posibilidad de realizar alguna actividad que se enmarque dentro del universo de transformación social y defensa de la vida por el que vienen travesadas. Una actividad que, más allá del ámbito laboral –al cual, de todos modos, si consiguen el estatus de refugiadas no pueden acceder hasta después de como mínimo seis meses–, les pueda brindar algún sentido al hecho de estar lejos de casa. Esta es la otra gran base de la protección integral feminista: “Formar redes. Saber que no es solo la entidad que te acoge, sino que hay compañeras, que todo teje una red, es muy importante”, asegura la defensora guatemalteca y refugiada Yolanda Oquelí.

En su caso, las redes construidas de manera autónoma la han llevado a conectar con una causa diferente, a pesar de que siempre conectada con la lucha que llevaba a cabo en Guatemala. “Mi lucha, que era por el territorio, ahora es una lucha por la defensa del territorio-cuerpo, como le llamamos nosotros, de las mujeres”, explica. “Me ha conmovido mucho encontrar compañeras con situaciones diferentes que a la larga ves que tratan sobre lo mismo: nos expulsa del país el miedo, la inseguridad, la falta de oportunidades. Percibir esto me ha llevado a implicarme en un feminismo de encontrarnos entre mujeres. Sean defensoras o no, son mujeres migrantes y lo están pasando muy y muy mal aquí. Ahora estoy trabajando en esto, porque muchas no osan hablar y denunciar”. Yolanda Oquelí apoya casos de mujeres que llegan con una deuda económica u otras situaciones de subordinación a través de redes de tráfico de personas que las llevan a encontrarse encerradas, a entrar como trabajadoras del hogar internadas en condiciones infames o a prostituirse.

MÁS ALLÁ DEL INDIVIDUO

Según la abogada María Martín, ofrecer protección “no es solo trasladar a alguien para protegerla, es trasladar a una persona que ha vivido hechos traumáticos y entender que sus familias también se han visto impactadas por estos hechos de forma directa o indirecta”. Una protección con un enfoque integral es aquella que tiene en cuenta todas las esferas de la vida de la desplazada. Y esto no quiere decir necesariamente dar siempre la posibilidad de refugiar a toda la familia junto con la defensora, quiere decir escuchar cuáles son las necesidades de la defensora y de su familia. De nuevo, escuchar. Porque incluso hacerlo, ofrecer la oportunidad de sa-

lir del país junto con la familia, no es garantía de ofrecer una protección integral feminista.

Yolanda Oquelí pudo salir de Guatemala junto con su familia mediante un programa de Amnistía Internacional, pero hace énfasis en que “el acompañamiento que recibí fue hacia mi persona, no hacia mi familia, y esto fue muy duro. Creo que nos tienen que enfocar, nos tienen que ver como familias. Porque sí, ciertamente, el activismo era mío, pero implicó y afectó a mi familia”. Oquelí se siente afortunada de haber podido salir de su territorio con sus hijas, pero recalca que es necesario “encontrar la parte más humana” en los programas de acogida. Preguntada por si ella recibió una protección integral feminista, afirma que “no, feminista no. Sin querer desacreditar el trabajo hecho, habría sido mucho más rico si hubiera sido feminista. Hubo vacíos”. Según la defensora comunitaria, si la protección es feminista, “una misma ya siente la confianza para quejarse, la confianza para agradecer, la confianza para hablar; mientras que si no es feminista, de la parte personal no puedo hablar”. En estos contextos se confirma más que nunca, como afirmó el movimiento feminista durante los años sesenta, que “aquello personal es político”.

Para saber más

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras
de Derechos Humanos
<http://ves.cat/erDI>

*Autocuidado: una estrategia política en la defensa de los
Derechos Humanos*, de DefenRed/IM-Defensoras
<http://ves.cat/erDI>

Informe *El enfoque de género en la protección
a defensoras de derechos humanos*, de JASS/CEJIL/PI
<http://ves.cat/erDN>

Defendemos! Diálogos con activistas por los derechos
humanos en América Latina
<http://ves.cat/erDL>

Puntos clave

- Hay que destacar la tarea de las redes de defensoras de derechos humanos de Mesoamérica y su apuesta por la protección integral feminista.
- Paralelamente a acoger sus desplazadas, las organizaciones y entidades tienen la responsabilidad de seguir visibilizando y actuando contra los daños que causa la actividad de empresas españolas en Mesoamérica, es decir, atacar las causas del desplazamiento.
- Se considera imprescindible hacer campañas para exigir transparencia a los gobiernos tanto de Mesoamérica como del Estado español.
- A pesar de la tarea de entidades e instituciones, la gran mayoría de personas llegan sin el acompañamiento y el asesoramiento adecuados: es necesaria más coordinación con organizaciones de los territorios de origen.
- Existe una carencia de información actualizada sobre los procesos de solicitud de asilo, de regularización de inmigrantes y de la compatibilidad entre ellos.

- Es necesaria una actualización jurídica de las categorías y de los motivos que dan derecho al asilo.
- La supervisión y gestión externa de las agendas de las defensoras acogidas con programas de protección producen, en algunos casos, sensación de carencia de autonomía: de nuevo, hay que caminar hacia una protección integral feminista.
- Es necesario más apoyo y seguimiento del retorno de las defensoras a su territorio de origen.
- Se considera importante poder adaptar los programas de protección a las necesidades de las personas y de las luchas que protagonizan y representan. Es estratégico que, en vez de Europa, defensoras y activistas encuentren refugio en otros países de América Latina para seguir creando red entre luchas, personas y procesos.
- El grueso de actividades y giras que se hacen en el Estado español con defensoras de los derechos humanos mesoamericanas podrían tener, a veces, más impacto si se hicieran en sus países de origen.
- Hay que implantar modelos de redes de voluntarias que permitan un mayor apoyo a las defensoras en los aspectos sociales y de ocio.

VIDAS CONTRA EL CAPITAL

